



XXII INFORME ASTURIANO

ESTADO DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Y DE LA PAZ

COLOMBIA 2026

**XXII INFORME ASTURIANO
ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
DE LA PAZ EN COLOMBIA 2026**

XXII INFORME ASTURIANO ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA PAZ COLOMBIA 2026

Los avances en calidad democrática contrastan con los ataques a la dirigencia social y al tejido social organizado que está en peligro

La XXIIª Delegación asturiana agradece el acompañamiento durante nuestra visita por parte de las organizaciones integrantes del Comité de Selección del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia: CUT-DDHH nacional y Subdirectivas; CNA, MOVICE, ANDAS, CSPP, ONIC, CPDH, CAJAR y Fensuagro. Agradecemos el acompañamiento de la MAP/OEA, la Misión de la ONU, Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral MOE, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Fundación DHOC, Somos Defensores, Corporación Vínculos, Corporación Minga, Red Llano y Selva, Humanidad Vigente, SweFOR.

En memoria fértil de TINO BRUGOS, maestro, sindicalista, internacionalista astur cántabro, activista de los derechos humanos e integrante de la Delegación Asturiana en visitas a zonas de conflicto armado en Colombia.

Fotos: XXII Delegación Asturiana

Edita: XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y la Paz en Colombia

Con el apoyo de: Protect Defenders

Traducción: Alma Hidalgo Lucena

Imprime: Paper Color

INDICE

PRESENTACIÓN	7
Prólogo	7
Integrantes de la XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz	9
Regiones visitadas	10
Entrevistas institucionales	10
1-. LA PAZ, UN ANHELO, UNA NECESIDAD	11
Un conflicto que se fragmenta y se degrada	11
Esquemas de gobernanza armada ilegal en los territorios	14
La Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana no llega a las regiones	15
Crece el reclutamiento de menores	15
LGBTIQ+ un colectivo discriminado y perseguido	17
La persistente violencia contra las mujeres y las niñas	17
Crece el desplazamiento forzado	18
Avances en derechos económicos, sociales y culturales	18
Crítica situación en las cárceles.	19
Simón Trinidad, preso político en los Estados Unidos	20
Avances en medio de las dificultades para el cumplimiento del Acuerdo de Paz	21
La reactivación de la reforma agraria convencional	22
La Jurisdicción Especial de Paz profiere sus primeras sentencias	23

Cuestionada la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	23
Derechos de los pueblos indígenas	24
Continúa la desaparición forzada de personas	25
Se incrementan los ataques a personas defensoras	26
2-. SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS REGIONES VISITADAS ENTRE EL 5 Y EL 17 DE MARZO/26.	29
Norte de Santander	29
Cauca	29
Valle del Cauca	30
Eje cafetero	30
Guaviare	31
Meta	32
Bogotá D.C.	33
CONCLUSIONES	34
RECOMENDACIONES	35
Al gobierno de Colombia	35
Al gobierno de España y a la Unión Europea	36
UN RELATO Y UNA CARTA DEL VIAJE	36
Viaje solidario a los centros del conflicto en Colombia	36
Carta de un colectivo de presos políticos del ELN	36
ORGANIZACIONES	48
REFERENCIAS Y FUENTES	49

PRESENTACIÓN

Prólogo

ATAJAR LA CONTINUACIÓN DEL CONFLICTO

Veintidós años después de la primera Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz en Colombia nos permiten constatar, con la suficiente perspectiva, los elementos de continuidad y cambio producidos. Más allá de las retóricas oficiales y los análisis interesados, si algo tiene de imprescindible la agenda que se organiza cada año es el contacto con los activistas sociales en cada rincón del país, la recogida de testimonios sin más afán que dar voz a quienes de manera desinteresada nos los ofrecen.

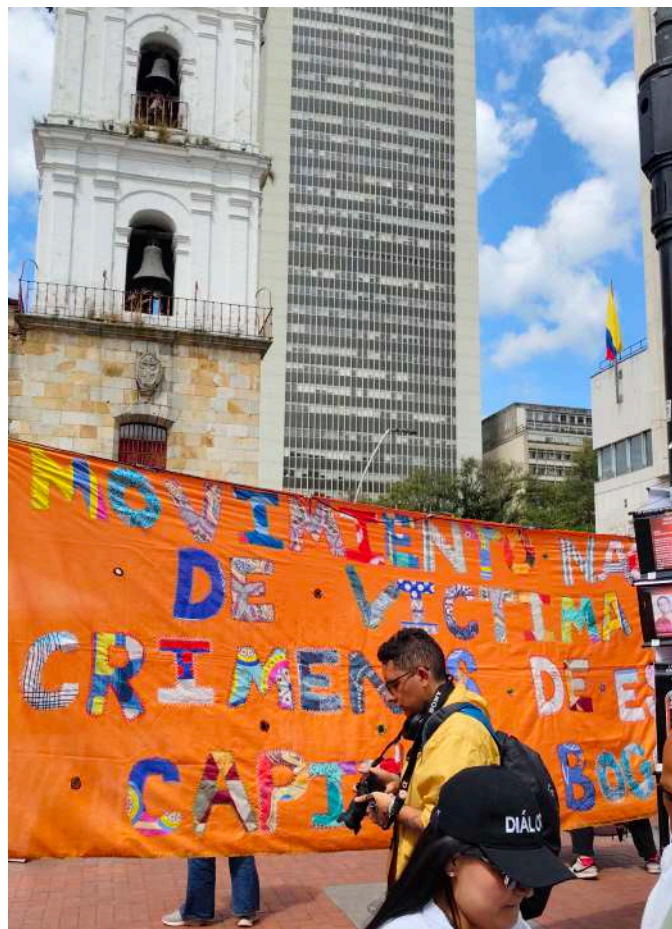
Primera constatación: en Colombia el conflicto permanece. Esta afirmación no supone ninguna devaluación de la importancia de los procesos de paz, de los cambios políticos, de los avances en derechos civiles, sociales, económicos y culturales. Nos enorgullecemos de que, el grano de arena que supone la acogida temporal a personas defensoras de derechos humanos y sindicalistas de Colombia en Asturias, se refleje en el papel protagónico que muchas de ellas desempeñan en los cambios positivos que hemos presenciado.

Pero los graves ataques a civiles y activistas sociales continúan y se agravan en algunas regiones que hemos visitado. La declaración formal de la Unión Europea por la que considera a Colombia un país seguro, lejos de constituir un gesto de diplomacia hacia los esfuerzos de los



gobernantes del país andino, es un acto de egoísmo e irresponsabilidad, donde prima el cálculo en las políticas migratorias restrictivas de derechos y la oportunidad de negocio sin limitaciones legales para sus multinacionales.

Una segunda constatación que hacemos es el impulso a las reformas democráticas, algo que pudimos comprobar de primera mano con la participación de miembros de la delegación como observadores durante las elecciones de marzo. Hemos seguido con interés y preocupación la situación política colombiana, en un contexto regional de involución ante el fortalecimiento de opciones autoritarias y las brutales intervenciones del gobierno norteamericano, en clara violación del Derecho internacional y la soberanía de los pueblos.



En este sentido serán decisivas las próximas elecciones presidenciales. Para superar los obstáculos que impiden avanzar en la construcción democrática, en la consolidación de un Estado Social de Derecho, en el libre desempeño del activismo social, es preciso atajar la continuación del conflicto. Para ello no hay otro camino que confrontar la resistencia política y armada al cambio de los sectores que defienden sus privilegios y el poder económico de cualquier origen, desde una acción del Estado coherente con los derechos humanos y desde la movilización democrática de las mayorías sociales.

Como última constatación relevante quisiera destacar el retroceso de la cooperación internacional y la presencia de los organismos supranacionales que venían desempeñando un papel positivo en el conflicto, algo que desde nuestra primera delegación pudimos observar en el extenso territorio colombiano. Nos preocupa el cierre de tres oficinas de la ONU en Medellín, Neiva y Villavicencio, que hasta ahora desempeñaban tareas de monitoreo, asistencia técnica y promoción de los derechos humanos en zonas donde el riesgo de la degradación del conflicto, en las nuevas circunstancias, es real.

Este retroceso se suma al de la cooperación y de numerosas organizaciones no gubernamentales internacionales.

La presencia sobre el terreno, el papel de delegaciones como la nuestra, es una labor que permite superar la frialdad y los espejismos de las estadísticas y los informes oficiales.

En un mundo dominado por la inmediatez y la política espectáculo, dar carpetazo mediático a la realidad de las zonas de conflicto cuando se producen inflexiones decisivas es una práctica lamentablemente extendida.

Lo acabamos de comprobar con el genocidio en Gaza. No es el caso de la Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz en Colombia.

En estos veintidós años, los miles de kilómetros recorridos han tejido con un hilo simbólico de solidaridad las relaciones de los pueblos de ambos lados del océano.

El informe que se ofrece a continuación es una muestra más de esta declaración de compromiso.

Mauricio Valiente Ots. Director General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR.

INTEGRANTES DE LA XXII DELEGACIÓN ASTURIANA DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ

ADRIÁN GAYO.

Alcalde del ayuntamiento de Teverga/Asturias.

MAURICIO VALIENTE OTS.

Director General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR.

INMACULADA GONZÁLEZ CARVAJAL.

Presidenta de la Coordinadora de Ongs de Asturias, CODOPA

ELOINA BERMEJO LOZANO.

Secretaría de la Coordinadora de Ongs de Asturias, CODOPA

MARÍA ESTHER BARBÓN BARBÓN.

Comisiones Obreras de Asturias, CCOO

RUBÉN RUIZ FERNÁNDEZ.

Federación de Enseñanza, Comisiones Obreras de Asturias

JAVIER ARJONA MUÑOZ.

Soldepaz Pachakuti

PILAR RATO RODRÍGUEZ.

Presidenta de Paz y Solidaridad Asturias

LUCÍA ALLER GUTIÉRREZ.

Ingeniería Sin Fronteras Asturias, ISFA

DAVID SÁNCHEZ PIÑEIRO.

Asamblea Moza d'Asturies, AMA

ALMA HIDALGO LUCENA.

Conceyu de la Moceda d'Asturies CMPA y CMX.

CARLOS MEANA SUÁREZ.

Soldepaz Pachakuti

ALBA NOGUEIRO GARCÍA.

Soldepaz Pachakuti

VERÓNICA LAORDEN GÓMEZ-PAVÓN

Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR

JAVIER OROZCO PEÑARANDA.

Soldepaz Pachakuti. Técnico de la Delegación Asturiana. Coordinador del Programa Asturiano de Atención a víctimas de la violencia en Colombia.



REGIONES VISITADAS

CAUCA: Popayán, Santander de Quilichao, Corinto

VALLE DEL CAUCA: Cali y la cárcel de Palmira

RISARALDA: Pereira

NORTE DE SANTANDER: Cúcuta y la cárcel de Cúcuta, Juan Frío

GUAVIARE: San José del Guaviare, El Retorno

META: El Castillo, Puerto Lleras, Puerto Esperanza, Villavicencio y cárcel de Villavicencio.

BOGOTÁ D.C.



ENTREVISTAS INSTITUCIONALES

La XXII Delegación Asturiana se reunió con representantes institucionales, alcaldes de El Retorno en el Guaviare y El Castillo en el Meta, las personas delegadas de la Defensoría del Pueblo en el Guaviare, Meta y Norte Santander, Prosperidad Social y Consejería Presidencial de DDHH en el Norte Santander, Agencia de Reincorporación y Normalización, ARN.

En Bogotá la Delegación compartió hallazgos y valoraciones en torno al estado de los derechos humanos y de la paz con el Sr. Embajador de España Santiago Jiménez Martín, con el Sr. Scott Cambell representante en Colombia del del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y con funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Sr. Nelson Restrepo de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

La XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y paz visitó Colombia entre el 5 y el 17 de marzo del 2026.

1-. LA PAZ, UN ANHELO, UNA NECESIDAD

“Colombia se enfrenta a la posibilidad de retroceder a la grave situación de los derechos humanos experimentada antes de la firma del Acuerdo de Paz en particular en los territorios.” Informe del ACNUDH “Estado de los Derechos Humanos en Colombia en el 2025.”

UN CONFLICTO QUE SE FRAGMENTA Y SE DEGRADA

La Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz que se integró a la Misión de Observación Electoral (MOE) en los comicios del 8 de marzo, felicita al pueblo colombiano por el ejercicio de su soberanía de la que emanó un nuevo Congreso de la República.

Colombia avanza en la construcción de Estado Social de Derecho con el obstáculo del conflicto armado interno que persiste, se fragmenta, se extiende y se degrada con graves afectaciones sobre la población civil, las comunidades y su dirigencia, a pesar del propósito del gobierno presidido por Gustavo Petro Urrego de alcanzar la paz, compromiso asumido por el Estado desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC hace diez años.

La expansión y degradación actual del conflicto armado interno se relaciona con el incumplimiento deliberado del Acuerdo de Paz en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, en la marginación del campesinado y en la histórica concentración de la propiedad de la tierra que se agravó con la contra reforma agraria a sangre y fuego durante los gobiernos de Álvaro Uribe, caldo de cultivo para la minería ilegal, la expansión de los cultivos de uso ilícito a



nuevas áreas huyendo de las fumigaciones aéreas, la penetración del Congreso y de segmentos de los poderes y de la fuerza pública por agentes de la corrupción empresarial y del narcotráfico, cobijados por la impunidad estructural.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, más de 1,6 millones de personas fueron impactadas por violencia y conflicto armado en 2025, triplicando las cifras del 2024.

La expansión del conflicto se refleja en el Informe de Amnistía Internacional sobre Colombia: “Se registraron hechos especialmente preocupantes en los departamentos de Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar y La Guajira, así como en las

regiones del Catatumbo, Magdalena Medio, Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar. Se intensificaron las disputas por el control territorial, social y económico y la fragmentación de los grupos armados. La Fundación Ideas para la Paz identificó 14 zonas en disputa entre estos —el doble que al inicio del mandato del presidente Gustavo Petro— y documentó un aumento de los combates entre grupos armados y las fuerzas militares y de seguridad.”

Las privaciones ilegales de la libertad por grupos armados ilegales tienen un alto sub registro porque las familias han sido amenazadas y no denuncian. Pretenden fines extorsivos o de “justicia revolucionaria” que incluye tortura y en algunos casos termina en homicidio y en desaparición forzada. La ONU registró que se pasó de 163 casos en 2024 a 277 en 2025 (245 hombres y 32 mujeres).

NARCOTRÁFICO. Las incautaciones de drogas siguen creciendo. El Ministerio de Defensa comunicó la incautación de 3.275 toneladas de cocaína valoradas en 95.000 millones de dólares entre el 2022 y el 2026. Para el gobierno es la mayor incautación mundial de cocaína porque “Colombia, a pesar de sus errores y problemas, tiene la inteligencia más sofisticada en alianza con 71 naciones para incautar, sin matar a nadie.”

Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos no certificó a Colombia (24 sep./25) en su lucha contra el narcotráfico y amenazó con una intervención militar en enero del 2026.

LOS DIALOGOS DE LA PAZ TOTAL. El conflicto, sus causas y soluciones han sido abordadas en mesas de diálogo entre el gobierno nacional y los grupos armados con pocos resultados a juzgar por la expansión territorial, la intensidad y el impacto de una confrontación de más de sesenta años que se degrada.

Por orden del presidente Gustavo Petro desde el 17 de enero/25 se suspendió la negociación con el Ejér-

cito de Liberación Nacional, ELN. “Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El ELNN no tiene ninguna voluntad de paz.”



La decisión se fundamenta -según el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, delegado del Gobierno en los diálogos- en que “El Eln está cometiendo crímenes de guerra en la región del Catatumbo, asesinando a civiles inermes, líderes sociales y a firmantes de la paz, en una operación que está desplegando en distintos municipios del Catatumbo. Ante esta circunstancia, la Delegación de paz del Gobierno no puede seguir en los diálogos en este momento”.

El gobierno avanzó en el propósito de Paz Territorial desde el 2 de febrero/25 con la Disidencia del ELN Frente Comuneros del Sur, al pactarse cese de las hostilidades, desminado humanitario, no reclutamiento y desvinculación de menores, sustitución de cultivos y búsqueda de personas desaparecidas.

Las mesas de diálogo con las disidencias de las FARC Segunda Marquetalia no se reanudaron.

El gobierno anunció -en julio/25- que mantendría diálogos con las disidencias Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. El 21 de abril/26 los suspendió junto con las negociaciones con el Estado Mayor

de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tras la muerte de tres soldados y cuatro menores en un ataque con drones en Ipiales, Nariño.

Se avanzó en los “diálogos sociojurídicos” con bandas criminales de Medellín, Quibdó y Buenaventura y con el grupo paramilitar Ejército Gaitanista de Colombia, EGC.

Para la ONU es necesario dejar claros los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación –para no generar impunidad ni gabelas para jefes criminales– en el proyecto de ley presentado el 22 de julio/25 que busca el desarme, la desmovilización y la reintegración de esos grupos y bandas.

NO HAY PAZ TERRITORIAL. Las libertades fundamentales de las personas y la autonomía de las organizaciones sociales de las regiones sometidas a estrategias de control por los grupos armados, están limitadas por las presiones a las comunidades y las amenazas a la dirigencia que disienta o que denuncie violaciones del DIH y de los derechos humanos.

La instrumentalización de las comunidades por actores armados para la minería ilegal pone en riesgo la vida en los territorios, aumenta la violencia y debilita la organización comunitaria. Además, la contaminación de los ríos afecta directamente la salud, el sustento y la vida cotidiana de las comunidades.

Los grupos armados ilegales responsables de graves violaciones del DIH son las disidencias de las FARC conocidas como Estado Mayor Central, EMC, Estado Mayor de Bloques y Frentes, EMBF, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano CNEB y la Segunda Marquetalia.

También recibimos denuncias contra el Ejército de Liberación Nacional, ELN, los grupos paramilitares Clan del Golfo - Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, y los

Conquistadores de La Sierra Nevada - Los Pachenca.

En regiones visitadas por la Delegación Asturiana en los departamentos del Cauca, Valle, Norte de Santander Meta y Guaviare, hay comunidades sometidas al control armado y a los enfrentamientos entre las disidencias Estado Mayor de Bloques y Frentes EMBF y el Estado Mayor Central EMC, el ELN y el Clan del Golfo-AGC.

A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional por mitigar las consecuencias de la escalada del conflicto en los territorios visitados hay un claro retroceso en la garantía de derechos humanos básicos.

Hay temor de que ante la toma de posesión de un nuevo gobierno en agosto/26 se produzcan desplazamientos masivos en el Guaviare y el Meta.



MASACRES. Durante el año 2025 se registraron 87 masacres –asesinato en una acción de tres o más personas– que dejaron 174 víctimas.

Según INDEPAZ Entre el 2016 y el 2026 se han registrado 733 masacres en 295 municipios que dejaron 2.676 personas asesinadas. Las masacres - el asesinato de tres o más personas en un mismo hecho-

están ocurriendo también en zonas urbanas como el barrio Atalaya de la localidad de Bosa/Bogotá, en la que fueron asesinadas tres mujeres el 24 de marzo/26.

La Oficina OCHA de la ONU en Colombia informó -en marzo/26- que el año pasado aumentarán las afectaciones humanitarias del conflicto con más de 155.000 personas confinadas y 96.400 desplazados, afectando especialmente a comunidades étnicas y siguen creciendo las restricciones al acceso humanitario.

Además de las familias afectadas por el conflicto armado están cerca de un millón de personas más, afectadas por los desastres ambientales.

Se registra un incremento de los ataques de los grupos armados con armas de fuego, drones y explosivos contra la fuerza pública en regiones del Cauca, Huila, Guaviare, Norte de Santander, Valle del Cauca -incluida la ciudad de Cali y en otras ciudades y territorios afectando también a la población civil.

Durante el “plan pistola” ejecutado por bandas criminales fueron asesinados en Antioquia y en la región Caribe 173 integrantes de la fuerza pública y 675 fueron heridos.

La práctica de retener a miembros de la fuerza pública por parte de personas civiles mientras se desarrollan operativos militares, ha sido señalada por el Ministerio de Defensa como una reacción presionada por los grupos armados ilegales en regiones del Guaviare, Cauca, Valle, Huila y Putumayo.

Se registraron violaciones al DIH por guerrillas y paramilitares en las que ocuparon escuelas, amenazaron profesorado y ejecutaron hostigamientos desde centros escolares, en algunas ocasiones estando en clases. Las denuncias provienen del Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y Sierra Nevada de Santa Martha. Los pueblos indígenas nasa y murui enfrentan el reclutamiento de sus menores dentro de las aulas.



ESQUEMAS DE GOBERNANZA ARMADA ILEGAL EN LOS TERRITORIOS

La población civil colombiana sigue siendo afectada por la degradación y expansión del conflicto armado por grupos armados ilegales y bandas que se proveen de dinero con la extorsión, el tráfico de drogas, la minería ilegal y la tala de selvas.

Crece el número de personas afectadas por la escalada del conflicto entre grupos armados, grupos paramilitares y bandas delincuenciales, todas enfrentadas a su vez con la fuerza pública: confinamientos, reclutamiento de menores, amenazas individuales y colectivas, masacres, captura o ruptura de las organizaciones sociales de base, bombardeos, ataques contra la población civil y el asesinato asistemático de la dirigencia social que resiste, enfrenta y denuncia los atropellos.

La Defensoría del Pueblo (boletín Voces que Resisten, sept./25) alertó del control social sobre la población por parte de actores armados no estatales mediante “esquemas de gobernanza armada ilegal” que incluyen la imposición de normas, multas, castigos físicos, extorsiones, reclutamiento, esclavitud sexual, toques de queda, asistencia obligatoria a citaciones y reuniones de

control, como ocurre en el río San Juan (Chocó), regiones de El Guaviare como El Retorno y los Montes de María.

LA POLÍTICA DE DEFENSA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO LLEGA A LAS REGIONES

Según los informes del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Gustavo Petro, salvo el delito de Trata de Personas que bajó de 591 casos en el 2023 a 251 en el 2025, los demás indicadores siguen al alza, reflejando la crisis de los derechos humanos: el homicidio intencional pasó de 13.636 casos en el 2022 a 14.038 casos en el 2025. El Secuestro pasó de 313 casos en el 2024 a 701 casos en el 2025; las masacres pasaron de 87 casos con 302 víctimas en el 2024 a 90 casos con 315 víctimas en el 2025; la extorsión: pasó de 13.082 casos en el 2024 a 13.417 casos en el 2025.

Según los datos del Ministerio de Defensa las acciones de terrorismo se duplicaron durante la Paz Total, al pasar de 742 casos al inicio del gobierno Petro en el 2022 a 1.398 casos en el 2025. Esta cifra refleja un escalamiento del conflicto que corresponde a su expansión sobre los territorios.

La revisión de la doctrina operativa de la policía junto con las instrucciones del gobierno de respetar la protesta social, la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana y la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, estarían generando cambios en el tratamiento a la población civil movilizada.

Amnistía Internacional en su Informe recoge la condena en primera instancia del policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, por el homicidio de Juan Carlos León Acosta durante las protestas del paro agrario de 2013 y seguía pendiente la decisión de casación de la Corte Suprema de Justicia sobre la condena en dos



instancias de otro integrante del ESMAD por el homicidio de Nicolás Neira el 1 de mayo de 2005 en Bogotá durante una manifestación. La familia de Nicolás continuaba denunciando la impunidad evidenciada en el caso, que llevaba veinte años sin resolverse por completo.

Por tercer año consecutivo bajan los casos de homicidios cometidos por la arbitrariedad de la fuerza pública. La ONU verificó seis casos en el 2025 y revisan ocho casos más, señalando que hay una mayor contención de la Fuerza Pública en el uso de la fuerza en el abordaje de protestas sociales. Los cambios obedecerían a directrices del gobierno y al apego a los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

La fiscalía general avanzó en la investigación de graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante las protestas sociales entre el 2018 y el 2022.

Ha levantado causas penales por 14 homicidios cometidos durante las protestas del 2021 contra los comandantes de la Policía Metropolitana de Cali y del Grupo de Operaciones Especiales.

Continúan impunes 113 casos de lesiones oculares cometidas por integrantes de la fuerza pública durante la represión de protestas entre el 2018 y el 2022.

CRECE EL RECLUTAMIENTO DE MENORES

Genera preocupación el crecimiento del reclutamiento de menores de edad de origen indígena, afro y campesino, por grupos armados y bandas criminales como estrategia de guerra y de control social.

Para INDEPAZ en su informe Dinámicas de reclutamiento de NNA en territorios bajo control armado, “Mientras el reclutamiento crece la infancia se reduce”.

Las cifras son solo indicativas porque las familias evitan denunciar por miedo o porque ya se normalizó este delito que se encuentra ligado a otras violaciones graves de los derechos de la niñez, como la violencia sexual, la trata con fines de explotación sexual, desapariciones, privaciones a la vida, violaciones a la integridad física o psicológica, desplazamientos forzados, y vulneraciones del derecho a la salud o educación, castigos corporales y malos tratos, y conocimos testimonios de víctimas que fueron obligadas a asesinar a compañeros y compañeras, como lo denuncia Scott Campbell representante en Colombia de la OACNUDH en su nota informativa de junio 27/25 “Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños”.

Se incrementó el reclutamiento de menores y la muerte de niños-as reclutados. La ONU reportó en los primeros seis meses del año pasado 17 niños y 13 niñas muertas en situación de reclutamiento en los departamentos del Amazonas, Arauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Norte de Santander, “incluyendo fallecimientos ocurridos en, al menos, 4 bombardeos realizados en el marco de operaciones militares, en los que murieron 8 niños y 7 niñas.

Las denuncias recibidas en el Guaviare y el Meta por familiares de menores señalan a redes sociales como Meta y Tik Tok de dejarse utilizar por los grupos armados, los paramilitares y las bandas criminales para reclu-



tar menores difundiendo una cultura que promueve la violencia y las ventajas económicas de unírseles.

El reclutamiento de menores -a pesar del subregistro- se incrementó entre el 2022 y el 2024 llegando a 474 casos según la ONU, más 51 en el primer semestre del 2025, pasando de 600 los casos en los últimos cuatro años.

La Convención sobre los Derechos del Niño de 2000 prohíbe el reclutamiento de menores por los grupos armados ilegales y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional califica como crímenes de guerra el reclutamiento o alistamiento de menores de 15 años y su utilización en la logística o en las hostilidades, haciendo responsable al reclutador de usar a la niñez como escudo humano.

13 de noviembre/25 en un bombardeo de la Fuerza Aérea contra las disidencias de las FARC Estado Mayor Central, EMC, en zona rural de El Retorno en el Guaviare, murieron 7 menores.

Frente a los hechos se abrió una polémica. La ONU expresó su preocupación por el fallecimiento de 3 niños y 4 niñas “en desarrollo de las hostilidades contra un objetivo militar legítimo en Guaviare. “Los siete niños fallecidos son víctimas de reclutamiento por parte de un grupo armado ilegal”.

El presidente Petro justificó el bombardeo como una



acción necesaria para proteger a la fuerza pública: “simplemente, por la relación numérica podría resultar mal hacer un movimiento envolvente, por el número de personas, y terminar los soldados encerrados bajo el fuego. Y decidí que antes de que llegara a ese punto, se bombardeara el lugar. De ahí el bombardeo siempre tiene un riesgo.”

El ministro de Defensa afirmó que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma en sí”.

La Defensoría del Pueblo indicó que las Fuerzas Militares tienen el deber de adoptar todas las precauciones para proteger a los menores de edad aun en aquellos casos en los que son obligados a participar en los conflictos porque los niños, niñas y adolescentes “conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar estrictamente limitada, así como del interés superior de la niñez”.

En Pereira recibimos denuncias de operaciones de “limpieza social” contra jóvenes de los barrios populares.

LGBTIQ+ un colectivo discriminado y perseguido

Aunque se avanza política y socialmente en el reconocimiento de los derechos de las personas del colectivo LGBTIQ+, persiste la discriminación laboral y en el acceso a salud y educación públicas y los ataques con un patrón de violencia que dejó 43 personas del colectivo asesinadas durante el 2025, mientras que en el 2024 fueron 164 según Caribe Afirmativo.

Se recibieron denuncias del aumento de los delitos de odio contra el colectivo LGTBIQ+ por parte de grupos armados en ciudades como Medellín, Cúcuta, Cali, Bogotá.

LA PERSISTENTE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

Se recibieron denuncias de reclutamiento de mujeres para fines de esclavitud o trata con fines de explotación sexual.

Hay quejas de colectivos de mujeres contra la Unidad Nacional de Protección, UNP, por discriminarlas en relación con la protección que reciben hombres en la misma situación de peligro, con el argumento de que el riesgo de ellas no proviene de su liderazgo social

Las mujeres enfrentan barreras de acceso a la justicia en casos de violencia sexual y de género por la estigmatización y por estereotipos étnicos y de género imperantes. Son revictimizadas por el burocratismo y por la falta de acompañamiento.

Las mujeres que acceden a los sistemas de protección oficial por el riesgo que tienen al ejercer el liderazgo en sus comunidades, denuncian la falta de dispositivos suficientes de seguridad en comparación con sus compañeros hombres. Estos dispositivos no integran las necesidades de conciliación de las mujeres lideresas.

Los grupos armados y los paramilitares continúan ejerciendo violencia de género, violaciones sexuales, explotación sexual y embarazos forzados al restringir el uso de anticonceptivos. Niegan el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Se sancionó a comienzos del 2025 la ley que permite el divorcio con la voluntad de sólo uno de los cónyuges.

Persiste la violencia contra las mujeres. El Observatorio Colombiano de Femicidios registró 609 femicidios entre enero y septiembre y pedía aplicar más y mejores medidas para erradicarla.

Colombia no ha eliminado la mutilación genital femenina. Cursa un proyecto de ley para erradicarla. El 56% de las víctimas son niñas entre los 0 y 5 años de edad. Hay identificados 86 casos en población afrodescendiente. Según el Instituto Nacional de Salud hay registrados 216 casos desde el 2020, la mayoría en comunidades indígenas de Risaralda, Chocó, Antioquia, Cauca, Quindío y Bogotá.

Las mujeres y las niñas de los pueblos indígenas wiwas, arhuacas, jiw y nukak, las comunidades afro y las mujeres migrantes vienen siendo víctimas de violencia y explotación sexual en regiones de frontera como Arauca, Nariño, Norte de Santander,



la Sierra Nevada de Santa Marta y en el Valle del Cauca.

También se está atacando a mujeres acusadas de tener vínculos afectivos con miembros de grupos rivales.

Se registraron casos de reclutamiento de niñas en espacios comunitarios manipuladas con promesas de protección, afecto o económicas, derivando en control, aislamiento y traslado forzado a zonas bajo dominio armado. Una vez reclutadas, enfrentaron coerción sexual y tareas de cuidado o logísticas impuestas. ONU

Grupos armados y bandas criminales han generalizado la extorsión afectando a pequeños empresarios y a personas que están en situación de pobreza.

Crece el desplazamiento forzado: el desplazamiento forzado y masivo creció un 85% en relación con el 2024, al ritmo de la expansión y de la escalada del conflicto.

El enfrentamiento por más de un año entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC ha ocasionado una crisis humanitaria en el Catatumbo y el desplazamiento forzado de casi cien mil personas en la frontera con Venezuela.

También se registraron desplazamientos forzados en el Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Caquetá y el Sur de Bolívar.

AVANCES EN DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El gobierno está fortaleciendo el Estado Social de Derecho con avances en equidad y en derechos económicos, sociales, culturales y territoriales.

Colombia presenta una economía que creció el 2,6% en el 2025 jalonada por la diversificación industrial hacia la superación de la dependencia minero-energética, la reforma laboral y la reactivación de la reforma agraria con la entrega de tierras al campesinado que abastece alimentos frescos y asequibles.

Hay una reducción de la pobreza monetaria por el incremento acumulado del 42% del salario mínimo en los últimos tres años, los subsidios a adultos mayores y el control de la inflación que bajó del 16% al 5%.

Las reformas para la redistribución del ingreso y de la tierra están generando crecimiento de la demanda interna, reducción del desempleo hasta el 8,8% -el más bajo en veinte años-.

CRÍTICA SITUACIÓN EN LAS CÁRCELES

Las cárceles colombianas son “depósitos de personas” según un preso político recluido en la cárcel La Tramacúa de Valledupar. Desde hace tres décadas la Corte Constitucional calificó como un “estado de cosas inconstitucional” la violación masiva y sistemática de los derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo expresó en las Sentencias T-388/13, T-762/15, SU-122/22.

Más de 105 mil personas privadas de la libertad son, además, depositadas en condiciones de hacinamiento, malos tratos, dificultades de acceso a asistencia sanitaria, escasez y mal estado de los alimentos, dificultades de acceso a la justicia



y a la familia, trabas para redimir pena con trabajo o estudio, falta de agua y de condiciones mínimas de salubridad.

En el caso de la cárcel de Cúcuta se suma que las mujeres enfrentan condiciones más restrictivas, como segregación, espacios reducidos para ellas y sus hijos, un régimen de mayor seguridad que limita su tiempo fuera de la celda, el acceso a comunicaciones y frecuencia de las visitas.

En la cárcel de Palmira se recibieron denuncias de hacinamiento (hasta 25 presos en lugares en los que debería haber 8), mala atención médica, hay casos de tuberculosis y de otras enfermedades sin tratar. Se abusa de los analgésicos para evadir remisiones a centros especializados.

La Delegación conoció el caso de Mauricio Tierradentro, sin juicio desde hace más de cuatro años, quien además denuncia el asesinato de varios de sus compañeros (presos por el “estallido social”) a la salida de prisión.

En Palmira y Cúcuta miembros del ELN expresan su voluntad de retomar los diálogos de paz y, en esta última, entregaron un comunicado en ese sentido.

En Villavicencio, se reportan graves deficiencias sanitarias, como el caso de DIEGO VARGAS BETANCOURT, sin tratamiento adecuado. Al igual que en resto de peni-

tenciarias los presos políticos de las disidencias de las FARC también manifiestan disposición al diálogo.

A pesar de la amnistía y del indulto contemplados en el Acuerdo de Paz continúan en prisión excombatientes de las FARC como FRANK FERNÁNDEZ, condenado a 35 años de cárcel de los cuales lleva 20 en prisión, MOISÉS QUINTERO condenado a 51 años de los cuales ha pasado 12 recluso, OSCAR FABIAN POLANÍA ARIAS, condenado a 60 años de los que lleva 12 en prisión.

Otros presos no aparecen en los listados de combatientes que entregaron las FARC y continúan presos sin que se haya subsanado la omisión por parte de las autoridades y del Alto Comisionado de Paz.

SIMÓN TRINIDAD, PRESO POLÍTICO EN LOS ESTADOS UNIDOS

JUVENAL PALMERA PINEDA conocido como SIMÓN TRINIDAD, fue integrante del Estado Mayor del Bloque Caribe de las FARC, detenido en Quito-Ecuador el 2 de enero del 2004 cuando iba a reunirse con un delegado de la ONU y extraditado el 31 de diciembre del 2004 por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a los Estados Unidos por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses en el 2003, hechos que no cometió.

Era dirigente del partido de izquierda Unión Patriótica y se incorporó a las FARC huyendo del exterminio contra ese movimiento entre 1985 y 1987. Es firmante del Acuerdo de Paz del 2016.

Desde hace 20 años está privado de la libertad incomunicado, en una celda bajo tierra y siempre con la luz encendida, sin acceso a lecturas y sin la posibilidad de escribir en la prisión de máxima seguridad de USP FLORENCE ADMAX, en Florence, Estado de Colorado, Estados Unidos.

Simón Trinidad fue extraditado por el delito supuesto de tráfico de drogas, acusación falsa que no se probó, pero fue condenado a 60 años de cárcel por conspiración para la toma de rehenes, debido a que el 13 de febrero del 2003 tres mercenarios estadounidenses –contratistas de la empresa Northrop Grumman– cayeron a la selva colombiana tras accidentarse la avioneta del Departamento de Defensa de los EUA cuando hacían labores de inteligencia en el marco del Plan Colombia.



Simón Trinidad no participó ni tuvo responsabilidad en la captura de los ciudadanos estadounidenses, Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes, quienes estuvieron en poder de las FARC más de cinco años, hasta su liberación con la Operación Jaque del ejército nacional el 2 de julio del 2008.

Los delitos que se le imputaron a Simón Trinidad en Colombia y los únicos que probó la justicia de los Estados Unidos, tienen el carácter de delitos políticos.

Así lo reconoció la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz que le concedió amnistía de iure por el delito de rebelión el 21 de junio del 2024, con base en la extinción de la acción penal a la luz del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016, en el que se determinó la aplicación del artículo 6.5 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949, según el cual “se amnistiarán e indultarán



delitos políticos y conexos cometidos en el desarrollo de la rebelión por las personas que formen parte de los grupos rebeldes con los cuales se firme un acuerdo de paz”.

Organizaciones colombianas de solidaridad con los presos políticos como Lazos de Dignidad, han iniciado una campaña para el acompañamiento jurídico y acciones de solidaridad por la libertad de Simón Trinidad ante el gobierno de los Estados Unidos, atendiendo a su avanzada edad (75 años), al deterioro marcado de su salud física y mental y a la amnistía otorgada en Colombia por la justicia transicional que lo requiere para que aporte su relato aportando a la verdad y a la justicia.

La justicia colombiana ha reconocido que el delito de rebelión por el cual fue procesado es considerado como el delito político por excelencia, al levantarse contra el régimen constitucional y legal vigente por medio de las armas, en la búsqueda de un cambio del sistema político y jurídico.

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha pedido al gobierno de los Estados Unidos el indulto y la liberación de Simón Trinidad para cumplir con el Acuerdo de Paz y

para que aporte en Colombia a la búsqueda de la verdad y a la Paz Total. La Jurisdicción Especial para la Paz también ha enviado cartas rogatorias al gobierno estadounidense que no muestra voluntad política de indultarlo.

El 29 de abril/26 la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, reconoció a SIMON TRINIDAD como víctima del genocidio contra la Unión Patriótica.

AVANCES EN MEDIO DE LAS DIFICULTADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE PAZ

“Si no hay un fortalecimiento de la implementación del acuerdo de paz, hay un riesgo de que estas situaciones se deterioren con más desplazamiento, más confinamiento, más atrocidades masivas y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales.” Scott Campbell, representante en Colombia del ACNUD. Bogotá, febrero/26. The Associated Press

La persistencia del conflicto es un obstáculo para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz suscrito entre las FARC y el Estado hace diez años. Las personas firmantes siguen siendo amenazadas, desplazadas y asesinadas con impunidad, los proyectos productivos no tienen entornos seguros.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia verificó el asesinato de 45 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP) en 2025 (incluidos 1 mujer, 5 indígenas y 1 afrodescendiente), mientras que en 2024 verificó 33, observándose un aumento del 36 %. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, han sido asesinados 486 antiguos integrantes de las FARC–EP.

A diez años del Acuerdo de Paz suscrito con las FARC el gobierno asignó la mayor inversión presu-



puestal para su cumplimiento, enfocada en inclusión territorial, víctimas y pobreza, incremento del presupuesto de educación y cultura y políticas de igualdad.

Los obstáculos para mayores avances tienen que ver con falta de garantías para la vida, la falta de vivienda con electricidad y agua potable, vías, centros educativos y de salud, que faciliten la reinserción de las personas firmantes de la paz.

LA REACTIVACIÓN DE LA REFORMA AGRARIA CONVENCIONAL

Es un avance en el punto del Acuerdo “Reforma Rural Integral” la reactivación de la reforma agraria convencional con dotación de tierras al campesinado en regiones que han sufrido la violencia armada, predios provenientes de la compra directa a los propietarios y fincas de narcotraficantes a las que se extinguió el derecho de dominio, la creación de zonas de reserva campesina, la titulación de baldíos, el saneamiento y la ampliación de resguardos indígenas, la creación de zonas agroalimentarias...

La «Reforma Rural Integral», compromete a un total de diez millones de hectáreas para favorecer la titulación y explotación de tierras de aquellos enclaves que vivieron con mayor agudeza la violencia armada. Además de incentivar la inversión de recursos económicos, tejido productivo e infraestructura, se involucra a los municipios en el desarrollo de medidas políticas que, de manera eficaz, contribuyan a superar las condiciones de violencia estructural del orden local

La reactivación de la reforma agraria con la disponibilidad de 2,5 millones de hectáreas ha sido un estímulo para el campesinado sin tierra, una herramienta económica para el control de la inflación y una fuente de seguridad alimentaria y de puestos de trabajo, que se refuerza con la compra de 445.770 hectáreas y la dotación de tierras a 72.786 familias en el 2025, algunas bajo la forma de títulos de propiedad provisional en Antioquia, Cauca, Córdoba, Guaviare, Meta y Nariño.

La entrega al campesinado de tierras en poder de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, provenientes de extinción del derecho de dominio por enri-

quecimiento ilícito, es un paso importante en la lucha contra la impunidad estructural, refuerza el Estado de Derecho y es un avance hacia la equidad.

Varios pueblos indígenas tienen conflictos con colonos campesinos por la ocupación de tierras de resguardo, como el pueblo Nukak que pide detener la invasión de su territorio en el Guaviare donde hay al menos quince caseríos de colonos y por el que circulan grupos armados y paramilitares que someten o expulsan a los nativos.

Hay conflictos por tierras entre empresarios, La Fazenda, el grupo religioso mormón y el pueblo indígena guahibo en Puerto Carreño, Vichada.

La Unidad de Restitución de Tierras avanzó en el 2025 en la ruta colectiva de restitución de tierras al campesinado en 15 casos. La restitución en medio del conflicto está siendo afectada por nuevos despojos de tierras del campesinado que es revictimizado y por agresiones y amenazas a los funcionarios encargados de la restitución material.

La aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural es un avance para resolver conflictos por tierras.

LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ PROFIERE SUS PRIMERAS SENTENCIAS

La Jurisdicción Especial de Paz, JEP, comenzó en septiembre/25 a proferir sentencias en los casos de secuestro y ejecuciones extrajudiciales cometidas dentro del conflicto armado, y avanza en los casos de reclutamiento de menores y violencia de género.

El primer fallo, condena a siete excomandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) a cumplir ocho años de sanciones propias por su responsabilidad

reconocida en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la implementación de una política de secuestros entre 1993 y 2012.

En el segundo, condena a cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales del Ejército Nacional a cumplir entre cinco y ocho años de sanciones propias por su responsabilidad reconocida en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en los departamentos de Cesar y La Guajira entre 2002 y 2005.

Sus sentencias constituyen un avance en la lucha contra la impunidad porque se basan en el reconocimiento de la verdad



y de la responsabilidad por los autores frente a las víctimas, lo que crea un espacio restaurativo sin precedentes en el país.

En un pronunciamiento la JEP elevó de 6.402 a 7.837 el número de víctimas de “falsos positivos” o civiles ejecutados por el Ejército entre 1990 y el 2016 para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate y recibir recompensas.

El presidente Petro ha calificado estas ejecuciones como “el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo”.

CUESTIONADA LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

En 2025, la Unidad para las Víctimas, UARIV, aprobó 42 planes de reparación colectiva, avanzó en 8 y cerró 3, según lo informado por responsables de la UARIV a la Delegación Asturiana.

En las regiones recorridas hay quejas de las víctimas y de sus organizaciones que se sienten abandonadas, afectadas en sus derechos individuales y colectivos por supuesto burocratismo y corrupción en la UARIV, entidad que reconoce no haber ejecutado sólo la mitad de los dineros destinados para las víctimas. “El Fondo de Reparación dejó sin girar en 2025 más de la mitad de su presupuesto de COP 324.000 millones, lo que podría retrasar la entrega de recursos para reparación de víctimas y amarrar el dinero disponible para el próximo gobierno.”

La entidad alega problemas presupuestales y falta de participación de otras instituciones, además de la persistencia del conflicto, lo que afecta el avance de la reparación colectiva a pueblos indígenas como el hitnu de Arauca y a la comunidad de Charras, Guaviare.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Los pueblos indígenas y afrodescendientes siguen siendo afectados de manera grave por los actores del conflicto armado que imposibilitan los planes de vida colectivos y la vida comunitaria autónoma.

La disputa entre los grupos armados ilegales, los paramilitares y la fuerza pública genera un clima de inseguridad y de temor para los pueblos indígenas, como pasa con los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta (wiwa,



kogui, aruhaco, kankuamo); el pueblo barí del Catatumbo, los pueblos makaguán, wayúu, cubeo, curripaco, piapoco, piaroa y guariacana en la frontera con Venezuela y Brasil; los embera katío – dóbida – chamí, wounaan, zenú y tule en la frontera con Panamá y pueblos del suroccidente como los nasa. En la frontera con Ecuador y Perú los siona, inga, kichwa, kofán, awá, murui, sáliba; pueblos de selva como los nukak, tikuna, yagua, cocama. En otras regiones hay más pueblos indígenas afectados por el conflicto.

El desarrollo del capítulo étnico del Acuerdo de Paz presenta atrasos en sus metas. Los resultados están limitados por el asesinato sistemático de la dirigencia indígena y por la persistencia del conflicto en los territorios. El gobierno lo reconoce y se propone avanzar mediante un “Pacto por la implementación del capítulo étnico”.

Es un avance la adquisición de 94.000 hectáreas para grupos étnicos, la constitución de 123 resguardos indígenas, la ampliación de 94 y la titulación de 65 territorios para comunidades negras, en beneficio de 271.000 personas en 136 municipios. donde

Preocupan las alegaciones recibidas sobre violaciones de los derechos humanos en el contexto del mercado de bonos de carbono, por lo que la ONU alienta una regulación que incluya la responsabilidad de las empresas, la consulta previa, la abstención de daños a los pueblos

indígenas y a las comunidades afrodescendientes y campesinas y garantizar medidas de reparación efectivas.

Hay temor en los pueblos indígenas y comunidades afros del Chocó por la presencia de efectivos de los grupos armados que ejercen control sobre la población civil restringiendo las libertades básicas para someter, controlar las organizaciones sociales y enquistarse en las comunidades para capturar el autogobierno indígena mediante amenazas, cooptación e infiltración.

Preocupa el avance de la minería, la deforestación y la siembra de coca en territorios colectivos que junto con el control armado amenazan la existencia cultural y física de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes en zonas del Chocó y otras regiones del suroccidente y nororiente del país.

Persisten los ataques contra los pueblos indígenas y su cultura. El grupo paramilitar Conquistadores de La Sierra incineró en febrero/25 la casa ceremonial del pueblo indígena Kankuamo en el sitio Lagunita, corregimiento de Rioseco, municipio de Valledupar. Es un ataque grave contra una cultura al borde de la extinción, reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Hay denuncias de nexos criminales entre los grupos paramilitares en Valledupar, los poderes económicos y políticos locales y miembros de la fuerza pública, incluidos los mandos del Batallón de Ingenieros señalados de proveer armas para los grupos narco paramilitares Clan del Golfo y Conquistadores de La Sierra.

CONTINÚA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UBPPD, informó que hasta marzo del 2066 hay 136.010 casos en contexto de conflicto armado, de los cuales 36.731



tienen solicitud de búsqueda que se adelanta en cementerios municipales con equipos especializados, apoyo de familiares de las víctimas y de instituciones como Medicina Legal y la fiscalía. Continúan las prácticas de control social mediante las retenciones ilegales y el uso de la desaparición forzada de personas por guerrillas y paramilitares para atacar a quienes consideran adversarios y generar terror.

La UBPPD informó que entre enero y septiembre había encontrado a 141 personas con vida, recuperado 1.161 cuerpos, entregado 762 al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y realizado 166 actos de entrega digna de cuerpos y “encuentros para la verdad” con familiares.

La UBPPD inició la búsqueda de restos de personas víctimas de desaparición forzada en el estero San Antonio —en aguas del océano Pacífico—, ubicado en la ciudad de Buenaventura y hallaron restos en el sector de La Escombrera en Medellín y en las instalaciones del Ejército Nacional en Bogotá donde operó el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano o Brigada XX.

Es el caso de Buenaventura y del Bajo Calima con 32

casos denunciados de desaparición forzada en 2024 y 21 en 2025.

Se reconoce el esfuerzo institucional por prevenir la desaparición forzada, una violación grave y en la mayoría de los casos impune.

Pese a los esfuerzos del Comité Interinstitucional de Lucha contra la Desaparición Forzada por mejorar el acceso a la justicia, fortalecer la búsqueda y prevenir nuevos casos en esta región, persiste la desconfianza institucional debido a los escasos resultados en la judicialización.

Este delito tiene subregistros por el temor y la revictimización a las familias, en su mayoría monoparentales, a denunciar la desaparición de sus hijos-as.

SE INCREMENTAN LOS ATAQUES A PERSONAS DEFENSORAS

“Pese a la voluntad política y los esfuerzos del Gobierno y otras instituciones, no se han revertido los altos niveles y los patrones de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos que el ACNUDH viene registrando desde 2018.” Informe OACNUDH/26

“El año con mayor violencia letal contra personas defensoras de derechos humanos durante el gobierno de Gustavo Petro”. Programa Somos Defensores. Informe Promesas Rotas (14 de abril/26).

El gobierno abrió espacios de diálogo con el movimiento social para abordar conflictos, sin embargo, las personas portavoces de las comunidades no cuentan con un espacio seguro para defender los derechos humanos.

Persisten los patrones de violencia letal contra las personas que ejercen liderazgo social o defienden los derechos humanos.



A pesar del reconocimiento por el gobierno de GUSTAVO PETRO de la legitimidad de defender los derechos humanos, continúa un ciclo de violencia incrementada contra las personas defensoras que viene desde el 2018, primer año de ejecución del Acuerdo de paz que el gobierno de IVÁN DUQUE se propuso hacer “hacer añicos”.

El Informe de Amnistía Internacional recoge cuestionamientos al presidente Petro por estigmatizar a las personas defensoras de derechos humanos al declarar que las organizaciones de la sociedad civil de la región del Catatumbo estaban “subordinadas” a los grupos armados que operaban en la zona y su gobierno se negó a rectificar cuando se le pidió que se retractase.

INDEPAZ registró el homicidio en el 2025 de 187 personas con liderazgo social, llegando a 1.934 personas (87,5% hombres) en 427 municipios entre el 2016 y el 2026.

La dirigencia social que está siendo perseguida a muerte en los últimos diez años proviene de los sectores comunal (487 personas con liderazgo asesinadas), pueblos indígenas (370), campesinado (278), líderes políticos (164), comunitario (163), sindicalistas (101), LGBTI (35),

víctimas (27), mineros (22) y reclamantes de tierras (17).

En el mismo lapso la ONU Derechos Humanos documentó 972 homicidios de personas defensoras de derechos humanos (112 mujeres, 843 hombres y 17 personas LGTBI+3).

Ante la persistencia de los ataques contra la dirigencia social, el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia el gobierno asturiano reforzó esta acción de solidaridad política para el 2026 acogiendo a siete personas cuya vida e integridad corren peligro por su defensa de los derechos humanos y de los bienes comunes.

Con estas personas el Programa Asturiano llega a 159 personas de la dirigencia social colombiana acogidas en veintiséis años:

BEATRIZ CH. M., lideresa y defensora de Derechos Humanos. Es integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice Capítulo Cauca, del Colectivo de Mujeres Trascendiendo por la Paz y del



Movimiento de Madres Buscadoras. Ejerce su labor en municipios bajo conflicto armado interno. Participa en la solución pacífica de conflictos y defiende los DDHH de las mujeres y grupos étnicos del territorio, lidera procesos de prevención de reclutamiento forzado de niñas, niños jóvenes y adolescentes. Debido a su labor ha sufrido amenazas, retenciones ilegales y un atentado en diciembre del 2025.

FABIO MARRIAGA, ambientalista, defensor de los derechos humanos, educador, poeta y tallerista de literatura y tradición oral en zonas bajo conflicto armado en el Cauca. Es integrante de la Asociación Regional de Usuarios Campesinos del Suroccidente Colombiano, ARUC. Ha sido amenazado, desplazado y retenido en los retenes móviles por grupos armados ilegales en su territorio.

JUAN CASTRO NOREÑA, ingeniero industrial, defensor de los derechos humanos, ejerce liderazgo social como secretario de salud de ASOJUNTAS, Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tuluá-Valle, en una zona rural bajo el control de los grupos paramilitares y de las Disidencias de las FARC que lo hostigan, amenazan y extorsionan.

LIZETH, educadora comunitaria, defensora de los derechos humanos en Cartagena de Indias, integrante de CONTEXTOS, Colectivo Comunitario Antirracista, acompañante de víctimas de la violencia policial racista. Está recibiendo hostigamientos, extorsiones y amenazas de muerte agravadas tras el asesinato de sus dos hijos, HAROLD en el 2020 y JOSÉ DAVID el año pasado. Las amenazas provienen de grupos armados al margen de la ley que se expanden por los barrios marginales.

ALFREDO, es integrante del Comité de Solidaridad con presos Políticos CSPP Santander, líder campesino y comunal. En nombre de su comunidad se ha opuesto a la minería de oro a cielo abierto en su territorio, por lo que ha recibido amenazas y declarado objetivo de los narco-paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, grupo que le

disputa al ELN el control de la Serranía de San Lucas. Otras personas de la misma región opuestas a la minería del oro a cielo abierto con maquinaria pesada han sido asesinadas.

ANGELITO, es defensora de los derechos humanos, lideresa social, educadora popular y ambiental, gestora cultural, trabaja en economía popular, huertas comunitarias y como maestra de Artes Plásticas y Humanidades. Es representante de la Fundación Manoyano y de la Asociación Mutualista Xisqua. Sus actividades se orientan al trabajo comunitario con la población vulnerable de la localidad de Puente Aranda, Bogotá D.C. Viene recibiendo amenazas de la banda criminal Tren de Aragua con omisión de la policía local, situación que la llevó a desplazarse de manera forzada.

ERIKA CUELLAR SALCEDO, es lideresa juvenil campesina, ambientalista, defensora de los derechos humanos, integrante de la Asociación Municipal Campesina de Trabajadoras-es de Piamonte Cauca, ASIMTRACAMPIC. Participa en campañas juveniles por los derechos humanos, el medio ambiente, la economía campesina y contra el reclutamiento forzado. Ha recibido amenazas colectivas de las disidencias de las FARC y de otros grupos al margen de la ley. El 13 de enero/26 el coche de protección en el que se movilizaba fue atacado con cinco disparos de arma de fuego.

A finales del 2025 se recibieron siete amenazas de muerte contra integrantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPHD Capítulo Norte de Santander, como YOHAN MANUEL VELÁZQUEZ, dirigente juvenil y defensor de los derechos humanos. El grupo paramilitar AGC amenazó a trece dirigentes entre ellas la abogada del CPDH ELIANA ZAFRA AGUDELO y a los liderazgos de dieciséis organizaciones sociales más. También recibieron amenazas a nombre del Frente 33 de las disidencias de las FARC – EMB, quienes coinciden con los paramilitares en impedir la defensa de los derechos humanos, en silenciar las denuncias de las víctimas que señalan



alianzas criminales entre las élites locales y el orden de destierro con plazo de un día o asesinan a quienes integran y dirigen el CPDH en esa región de la frontera con Venezuela.

Los integrantes del Pacto Histórico en el Norte de Santander denunciaron amenazas de muerte del grupo paramilitar AGC en las que advierten “los tenemos ubicados... tiene 48 horas... vamos por sus cabezas ...” y agresiones en el municipio de Los Patios.

El Sistema de Información del Programa Somos Defensores verificó 165 asesinatos y 874 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en el 2025. Afirma en su Informe Promesas Rotas (abril/26) que fue “El año con mayor violencia letal contra personas defensoras de derechos humanos durante el gobierno de Gustavo Petro”.

Cuestiona que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no escuchara las advertencias de la sociedad civil sobre la crisis humanitaria en muchas regiones por el accionar de los grupos armados y bandas delincuenciales contra la dirigencia y el tejido social, cayendo en las “prácticas lamentables de anteriores gobiernos que tampoco han dado la importancia que merecen estos espacios, cuyo reconocimiento real debe trascender a la convocatoria, creación y financiación de los mismos... A la luz de

estos hechos reiteramos que el actual gobierno nacional no ha priorizado el reconocimiento y la protección de quienes defienden los derechos humanos en Colombia.”

La dirigencia indígena continúa siendo atacada. La Asociación De Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó.

La Orewa denunció el 10 de marzo/26 la desaparición y el asesinato del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, autoridad de la comunidad indígena Alto Tarena. Es un crimen orientado a destruir la resistencia indígena que protege la selva del Darién en la frontera con Panamá.

Los grupos armados ilegales y los paramilitares son los principales agresores según las denuncias.

2-. SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS REGIONES VISITADAS

“Hay que mantener el silencio para poder mantenerse en la tierra y con vida”. (Testimonio de un campesino en Puerto Esperanza, Alto Ariari-Meta)

NORTE DE SANTANDER. Desde hace un año todo el departamento está afectado por la expansión y la degradación del conflicto armado interno, afectando la población de la frontera colombo-venezolana.

Las organizaciones sociales del Norte de Santander continúan exigiendo garantías para su labor. Mientras que la misma institucionalidad pública no puede funcionar en regiones del Catatumbo.

Miembros de la candidatura del Pacto Histórico en el Norte de Santander han recibido vía SMS



amenazas de muerte por parte de las AGC y se encuentran desamparados institucionalmente.

Firmantes de paz fueron desplazados de Caño Indio a la finca El Pital y se encuentran en viviendas provisionales precarias, sin acceso a agua potable —lo que genera problemas de salud, especialmente en la infancia— ni acceso adecuado a educación, evidenciando el incumplimiento de las garantías para su reincorporación.

Se destaca la falta de reconocimiento como víctimas del conflicto a varias personas de la comunidad de Juan Frío a pesar de haber sido testigos de masacres y familiares directos de víctimas, y haber sufrido la presencia paramilitar durante más de 15 años.

CAUCA: El departamento del Cauca sigue siendo una de las regiones con más violaciones graves de los derechos humanos y del DIH. El deterioro de los derechos humanos y la crisis humanitaria son consecuencia del

incremento de la violencia armada que produce desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas, asesinatos de personas de la dirigencia social, reclutamiento de menores, uso de explosivos en zonas de uso civil, desapariciones forzadas, extorsiones, imposibilidad de reunirse sin autorización de los grupos armados y -en algunas regiones del nororiente- restricciones de ingreso a los territorios bajo el control de las Disidencias EMC - FARC para las misiones humanitarias de la ONU, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de la ONU y de la MAP-OEA.

Las organizaciones sociales reportan que durante el 2025 en el Cauca fueron asesinadas 38 personas con liderazgo social, 5 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados, 623 muertes violentas (64 mujeres), hubo 7 masacres, 72 enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el Ejército, 35 entre grupos armados, más de cien ataques contra la Policía y 30 contra el Ejército, 68 ataques con drones, 70 ataques con explosivos y 54 ataques contra civiles, además de 54 secuestros.

Las organizaciones sociales señalan que el aumento de violencia responde a la expansión del ELN y de las disidencias de las FARC Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y a sus divisiones internas con una creciente militarización del territorio.

Hay denuncias por restricciones al ejercicio de los derechos y libertades sindicales, amenazas contra la dirigencia sindical y contra 110 docentes, muchos obligados a trasladarse.

Las denuncias incluyen concentración de la propiedad de la tierra en grandes terratenientes y empresas, expansión de proyectos mineros y desigualdades en el acceso a la tierra. Los cultivos de coca y marihuana están vinculados a la pobreza y la falta de alternativas económicas.

Recibimos denuncias de un aumento del recluta-

miento de menores que reciben ofertas de dinero, teléfonos o motocicletas. Denunciar estos hechos puede provocar represalias contra las familias.

Colectivos de memoria histórica denuncian dificultades en la identificación y entrega digna de cuerpos de personas desaparecidas. Las organizaciones de mujeres buscadoras indican que 32 cuerpos fueron recuperados en el 2025.

El 25 de abril de 2026 en la vía Panamericana en la zona rural de Cajibío, el grupo armado “Bloque Occidental del EMC” detonó explosivos, produciendo el asesinato de 22 personas y dejando heridas a otras 30, todas ellas civiles, indígenas, afros y campesinas, en lo que se considera una escalada premeditada para afectar el tiempo electoral.

VALLE DEL CAUCA. El departamento tiene varios frentes de conflicto que afectan población urbana y rural.

Las organizaciones sindicales del Valle denunciaron abusos en la contratación temporal de trabajadores, algunos llevan 15 años como trabajadores de ETT con contratos tempora-



les, por obra y servicio, políticas anti sindicales en empresas locales y en transnacionales que imponen desventajas laborales a trabajadores sindicalizados en los ingenios azucareros, el asesinato de dos sindicalistas del sector, setenta familias desplazadas, amenazas de atentado y secuestros, hostigamiento en puestos de trabajo y viviendas por hombres armados con fusiles de los grupos al margen de la ley.

Sinaltrainal denuncia persecución sindical por retirada de beneficios y setenta despidos en un mes, acusaciones de adoctrinamiento y de terrorismo, hostigamiento a los trabajadores y vigilancia mediante cámaras, presión patronal para que se acojan a planes de retiro voluntario para reducir plantilla.

Los sindicatos del sector bancario reciben presiones sindicales, vulneración de derechos sindicales, cierre de sucursales, creación de la figura de corresponsales bancarios destrucción de puestos de trabajo y racismo en el ámbito laboral.

La corrupción en el ámbito sanitario genera vulneración de derechos de los trabajadores que afecta a los pacientes. Despidos injustificados e inestabilidad, retirada de funciones.

CALI. Los sindicatos de distintos sectores denuncian un contexto generalizado de persecución contra la labor sindical, incluyendo violencia contra líderes y lideresas, desplazamientos forzados y graves afectaciones a derechos básicos.

Cali conecta con los puertos del Pacífico y según la Alerta de la Defensoría del Pueblo del 26 sept./25, se ha convertido en teatro de operaciones que generan riesgo para las comunidades urbanas y rurales por parte de la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC); bandas criminales como los Shottas y Espartanos (en el puerto de Buenaventura), La Oficina y La Inmaculada (en Tuluá), Lokos Yam, Los Zetas y RPS (en Quibdó); además de los carteles transnacionales de Sinaloa y Jalisco Nueva Gene-



ración, el Tren de Aragua, mafias italianas y albanesas, y grupos ecuatorianos (Lobos, Choneros y Tiguerones).

La Alerta proyecta un escenario de violencia urbana en Cali considerando la fragilidad de los pactos de no confrontación entre grupos armados y bandas criminales.

GUAVIARE

Las comunidades campesinas están sometidas a frecuentes confinamientos y cansadas de mal vivir -más de medio siglo- en medio del conflicto armado y de las actuales disputas por el control social y territorial entre las disidencias de las FARC de Iván Lozada "Mordisco" y alias Calarcá Córdoba, el grupo paramilitar Renacer ERPAC y la fuerza pública, generando temor en la población y presión sobre las organizaciones sociales, abocadas a perder su autonomía.

Las comunidades campesinas del Meta y del Guaviare

temen que una previsible escalada de los enfrentamientos vuelva a generar desplazamientos forzados en el sur del Guaviare y en regiones del Alto Ariari como Puerto Esperanza.

Por su vocación de permanencia en el territorio exigen inversión pública en infraestructuras, caminos, puentes, escuelas, centros de salud, espacios culturales, y aunque hay quejas en el sentido de que las mesas de participación no resuelven los problemas o no se convocan con regularidad, exigen la reactivación de las mesas de diálogo con los liderazgos, incluidos los del río Inírída y la puesta en marcha la jurisdicción agraria para resolver los conflictos por tierras.

Hay miedo entre la población y la percepción de que antes de que tome posesión el nuevo gobierno, en el Guaviare va a haber una situación aún más crítica de los Derechos Humanos.

Hay denuncias de que el ejército nacional solo atacaba al grupo de alías Iván Lozada “Mordisco” y no al de Calarcá. Similares denuncias en sentido contrario recibimos en regiones del Meta.

El campesinado arrancó las plantaciones de coca, pero volvió a sembrarla por falta de apoyo integral para sustituir los cultivos.

La zona de reserva campesina del Guaviare se traslapa con territorios del pueblo indígena nukak makú lo que está generando tensiones.

Recibimos denuncias de que durante las elecciones del 8 de marzo/26 hubo trashumancia, trasteo de personas y de votos para copar la curul de las víctimas en el Guaviare que fue ganada por ALEJANDRO CASTILLO GAITÁN, lo que explicaría en parte el que la mitad de la representación de las víctimas en el Congreso en las elecciones de marzo/26 fueran cooptadas por los clanes políticos.

META: la población en zonas del departamento del Meta está afectada por el conflicto entre las disidencias de las



FARC y la fuerza pública. La dirigencia social tiene miedo de ejercer la representación comunitaria por el riesgo de ser perseguida y las comunidades nuevamente desplazadas.

Luego de la visita asturiana al Alto Ariari, el 17 de marzo/26, las disidencias EMC de las FARC emitieron un comunicado en el que restringen en los territorios que controlan el acceso a misiones humanitarias de la ONU y de la OEA, así como a la Defensoría del Pueblo.

Son previsible los efectos nocivos sobre la población civil de este aislamiento forzado del monitoreo y de la observación de los derechos humanos en medio del conflicto.

En Puerto Esperanza las organizaciones de la región del Alto Ariari están sometidas al peligro de la confrontación armada en su región y al riesgo que supone para las directivas de las juntas de acción comunal y para la población en general un recrudecimiento de la violencia y un nuevo desplazamiento masivo.

En esta como en otras regiones de Los Llanos, la ciudadanía tiene miedo de denunciar y de ejercer sus derechos.

En la reunión sostenida por la Delegación Asturiana con el alcalde de El Castillo, Meta, Daimer Otálora, la administración municipal explicó las dificultades de orden público que hay en la zona y el esfuerzo que la administración municipal hace por llevar infraestructura e inversión a los territorios extensos del municipio. El alcalde se queja de que el gobierno ha recortado los recursos de inversión y no facilita la interlocución con el presidente del gobierno.

El municipio del Castillo es un territorio militarizado con la presencia de más de 800 efectivos del ejército nacional, más los efectivos del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía y la Policía Nacional. El alcalde considera que es necesaria más pie de fuerza y más inversión.

La delegación asturiana ha recibido informaciones según las cuales se han presentado nuevos casos de detenciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública, Brigada Móvil y Fuerza de Tarea Omega del ejército nacional.

Recibimos denuncias que indican que el ejército nacional habría ejecutado extrajudicialmente al ciudadano **NED DAVID VALENCIA RODRÍGUEZ** en la zona rural del municipio de Vistahermosa (Meta).

La defensora de Derechos Humanos, **CARMEN MAYUSA PRADA**, elegida como representante a la cámara por el Departamento del Meta, denunció estar recibiendo amenazas desde el día previo a las elecciones (7 de marzo/26).

PEREIRA. Las organizaciones sociales de la región cafetera denuncian amenazas a maestros, sindicalistas, dirigencia campesina e indígena y senadores del Pacto Histórico.

Hay denuncias por infracciones al DIH por parte del ELN y violaciones graves de los derechos humanos por el grupo EGC que contaría con la actitud omisiva del ejército para desplazar población de territorios estratégicos para la minería.

Risaralda tiene un millón de habitantes de los que 134 mil son víctimas del conflicto (el 56% mujeres).

Las organizaciones sociales consideran necesarias medidas preventivas por el riesgo de disputa territorial entre el ELN y 13 estructuras paramilitares en Caldas y son escépticas por la pérdida de control de los ayuntamientos, lo que genera como consecuencia a corto plazo la consolidación, a medio plazo la estabilización y a largo plazo la normalización de formas de gobernanza criminal.



La presencia de hombres armados y motorizados poniendo retenes e interviniendo en la cotidianidad, en los mercados locales afecta la autonomía personal y la vida comunitaria. Hay alarma en la ciudad de Cartago-Valle por la desaparición de 11 personas entre enero y febrero de este año. A finales del 2023 desapareció la pareja de jóvenes Isis Sánchez Restrepo y Jean Pool Hernández quienes continúan desaparecidos.

BOGOTÁ D.C. Las organizaciones sociales de la ciudad capital advierten un preocupante deterioro en las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular en lo que respecta a la población juvenil.

Se constata un incremento sostenido de los procesos de estigmatización hacia este sector, quienes son cre-

cientemente objeto de discursos de criminalización que los vinculan con dinámicas de inseguridad. Esta tendencia ha venido acompañada de una progresiva restricción y desarticulación de los espacios legítimos de participación, organización y reivindicación social y política, limitando de manera significativa su capacidad de incidencia y debilitando el tejido democrático.

Asimismo, se observa que las políticas locales de seguridad, caracterizadas por la participación de empresas privadas integradas en gran medida por personal proveniente de fuerzas militares y estructuras desmovilizadas, han contribuido a un deterioro adicional de la situación de derechos humanos.

CONCLUSIONES

Colombia avanza en calidad democrática construyendo Estado Social de Derecho con políticas de equidad, inclusión, redistribución de la tierra y del ingreso, que cuentan con amplio respaldo social.

Durante el 2025 creció la economía, subió la tasa de empleo, se incrementó el salario mínimo, se controló la inflación, se redistribuyeron tierras al campesinado que abasteció la demanda interna de alimentos y se incrementó la inversión en educación, salud e infraestructuras.

Se adelanta una política de combate al narcotráfico cuyas cifras convierten a Colombia en el país del mundo con mayores incautaciones de drogas, extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos e intervenciones sobre las propiedades de la mafia.

A pesar de los avances en derechos sociales y del buen resultado económico, el conflicto armado interno se agudizó y se expandió a regiones que están en disputa entre los grupos armados ilegales (ELN), gru-



pos de disidencias de las FARC y grupos paramilitares enfrentados por el control de áreas de minería y de territorios donde se cultiva, se procesa y se distribuye cocaína, marihuana y se trafica con armas y personas.

La política de Paz Total que ha incluido mesas de diálogo y ceses al fuego, no logra detener el asesinato de la dirigencia social, ni las violaciones graves de los derechos humanos y del DIH contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, el campesinado y comunidades urbanas que están bajo el control de bandas delincuenciales.

En los territorios en disputa y en los que se ha impuesto una gobernanza ilegal, corre peligro la autonomía y la existencia de las organizaciones representativas de las comunidades como las juntas de acción comunal, los sindicatos campesinos, las autoridades indígenas y negras.

El tejido asociativo de los territorios ha sido convertido en un objetivo a controlar mediante la violencia para usar la población civil como escudo y para legitimarse mostrando un apoyo comunitario conseguido mediante la coacción o la cooptación.

Como lo previeron las comunidades rurales durante la visita asturiana en marzo/26, el conflicto armado interno se escaló en días previos a las elecciones presidenciales. Los ataques de las disidencias de las FARC

en el suroccidente contra la población civil generan un ambiente de temor que sirve a sectores políticos proclives a profundizar la confrontación interna.

La degradación y fragmentación del conflicto ha ido desdibujando las líneas ideológicas y las formas de relacionamiento con la población civil que diferenciaban a las guerrillas de los grupos paramilitares. En algunas áreas hay cuatro o más conflictos en curso entre grupos armados con población civil en medio de la confrontación.

Las comunidades visitadas por la Delegación Asturiana denunciaron la situación extrema a la que los someten los actores armados, confinamientos, extorsiones, amenazas, asesinatos selectivos, reclutamiento de menores, violencia contra las mujeres, minado de áreas de uso de la población civil, desaparición forzada de personas, desplazamientos masivos, restricciones a las libertades básicas con imposición de la ley del silencio.

A pesar de los ataques el movimiento social continúa movilizándose, exigiendo paz y reformas estructurales y reivindicando la soberanía nacional ante las violaciones del derecho internacional que comete el gobierno de Estados Unidos en el área del Caribe.

RECOMENDACIONES

AL GOBIERNO DE COLOMBIA:

Incrementar la presencia del Estado con inversión social y desarrollo sostenible en las regiones bajo conflicto armado.

Fortalecer la autonomía de las autoridades y organizaciones territoriales campesinas, indígenas y afros, y proteger de manera efectiva la vida de la dirigencia social y de las personas firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC.

Mantener los canales de diálogo con los actores arma-



dos ilegales, pactar ceses al fuego bilaterales y acuerdos humanitarios hacia la paz territorial partiendo de las prioridades que presentan las organizaciones sociales en los escenarios de diálogo de cada región.

Profundizar la sustitución de cultivos de uso ilícito por proyectos productivos con apoyo del Estado, concertados con las comunidades y organizaciones que defienden el territorio.

Avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz profundizando la reforma agraria con entrega y restitución de tierras al campesinado y construir una institucionalidad pública de apoyo a la economía campesina.

Reformar a la fuerza pública sustituyendo la doctrina del enemigo interno por un enfoque con derechos humanos. Continuar con las reformas estructurales en materia de derechos de propiedad sobre las tierras, reforma política y de la doctrina con la que se forma a la fuerza pública. Avanzar en el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad, garantizando que reciban alimentación adecuada y de calidad, se garantice su acceso

a la salud y se tomen medidas para acabar con el hacinamiento, además del cumplimiento de los derechos de las infancias presas y la sustitución de penas a las madres para evitar la separación de los menores de 3 años. Implementar políticas de igualdad transversales que eviten la revictimización de las mujeres víctimas, prevean el reclutamiento, la esclavitud sexual y la trata en el seno del conflicto armado y la detección de las violencias específicas que sufren las mujeres.

Proporcionar a la juventud mecanismos para el desarrollo de una vida plena protegida y al margen de los grupos armados mediante la educación como herramienta de prevención del reclutamiento.

AL GOBIERNO DE ESPAÑA Y A LA UNIÓN EUROPEA

Incrementar la cooperación para la sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia.

Apoyar la reconstrucción del tejido social – organizativo en los territorios afectados por el conflicto armado.

Ayudar a superar los obstáculos para la paz como pidió el Intergrupo del Congreso Español por la paz de Colombia.

Promover y fortalecer los programas de protección para personas defensoras de los derechos humanos y ambientalistas en riesgo.

Concretar mecanismos de apoyo mutuo entre los gobiernos de España y de Asturias con el gobierno propio de los pueblos indígenas para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.

UN RELATO Y UNA CARTA DEL VIAJE

Viaje solidario a los centros del conflicto en Colombia.
(David Sánchez PIÑEIRO, Asamblea Moza d' Asturias, AMA).



Una crónica sociopolítica de lo que vio, escuchó y aprendió un integrante de la 22ª delegación asturiana de verificación de paz y derechos humanos.

En el contexto de la guerra de Irak, periodistas estadounidenses viajaban a cubrir el conflicto “empotrados” en unidades del ejército gringo. Nuestra experiencia no tiene mucho que ver con aquella, pues ni somos periodistas ni partimos hacia una guerra, pero estuvimos quince días recorriendo el territorio colombiano “empotrados” en una delegación ciudadana de paz y derechos humanos.

Etapa 1. Bogotá.

El día está nublado y el centro de Bogotá se presenta con su caos y su bullicio característicos. En los puestos callejeros se venden frutas tropicales y camisetas de la selección. Hombres jóvenes pasean llamas blancas ofreciendo a los turistas fotografiarse con ellas y señores mayores juegan al ajedrez en mesas de plástico en plena calle. Nuestra delegación inicia su recorrido a pocos metros del lugar donde asesinaron al candidato liberal y socialista Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Su magnicidio, que dio lugar a un estallido popular conocido como el “Bogotazo”, es un acontecimiento decisivo en la violenta historia de la Colombia contemporánea. En una de las esquinas de la carrera sép-

tima, cerca de la plaza de Bolívar, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) ha colocado por toda la acera fotografías de gran tamaño con las caras de personas asesinadas y desaparecidas. Al lado, en la carpa donde se pronuncian los discursos conmemorativos, sobresale un póster de Manuel Cepeda, senador de la Unión Patriótica asesinado en 1994 y padre de Iván Cepeda, actual candidato del Pacto Histórico a la presidencia de Colombia.

El 8 de marzo se celebran elecciones legislativas en Colombia y nuestra delegación está citada antes del amanecer en la sede de la Misión de Observación Electoral (MOE). Desde allí nos desplegamos en diferentes minibuses por los distintos barrios de la ciudad (San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Bosa) para estar presentes en los colegios antes de la apertura de las urnas. Los resultados finales de la jornada dibujan un Senado y una Cámara de Representantes en los que el Pacto Histórico aumenta su representación y se consolida como la fuerza política más votada, pero sin ser capaz de conseguir una mayoría en ninguno de los dos órganos legislativos. La existencia de una mayoría parlamentaria contraria a los intereses del poder ejecutivo ha sido precisamente el mayor obstáculo con el que se ha topado el actual gobierno de Gustavo Petro a la hora de implementar sus principales reformas.

Etapa 2. Cauca, Valle del Cauca, Risaralda.

La delegación abandona la capital y se divide en dos grupos: uno más pequeño se desplaza a los departamentos del Meta y el Guaviare, mientras que otro más numeroso viaja hacia el Cauca, en el sur del país. En nuestra primera reunión, en Santander de Quilichao, tenemos un encuentro fugaz con dos de las siete personas que viajarán próximamente a nuestra tierra para ser acogidas durante medio año en el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia (PAV). Es una iniciativa pionera a nivel español y europeo, que en sus 26 años de existencia

ha permitido acoger a 159 personas amenazadas de muerte por su activismo social o por sus labores en defensa de los derechos humanos. Ni el programa ni la delegación anual se habrían sostenido durante tanto tiempo de no ser por el tenaz compromiso solidario de la asociación gijonesa Soldepaz Pachakuti. Dos de los principales artífices de esta gesta internacionalista son Javier Orozco y Javier Arjona, a quien nuestro colega Pablo Batalla ha dedicado sendas entrevistas biográficas en Nortes que dan testimonio de su dignidad humana y de su grandeza política y moral.



En esta reunión en Santander de Quilichao escuchamos por primera vez una denuncia que se va a repetir como una letanía en casi todos los lugares que visitaremos después: se está produciendo un incremento alarmante del reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos armados. En muchos casos es un reclutamiento forzado, pero también se observan “vinculaciones voluntarias”, contra las que es todavía más difícil luchar. Además de los incentivos económicos, “empuñar un arma genera poder y respeto”. Los grupos armados han modernizado sus mecanismos de captación y ahora también recurren a redes sociales como TikTok o Facebook y a los videojuegos. Un líder afrodes-

endiente nos explica que las personas que nutren las filas de los grupos armados “no vienen de Marte ni de Júpiter, son de aquí, nuestros hermanos y primos”. La realidad de un “sistema patriarcal y machista”, además, hace que muchas chicas y mujeres jóvenes sean reclutadas por los grupos armados con fines de esclavitud o explotación sexual.



La siguiente etapa de nuestro recorrido hacia el norte es el predio El Tablón, en el municipio de Corinto. Hasta allí nos escolta la guardia campesina, un cuerpo autoorganizado para garantizar la seguridad de las comunidades que, a diferencia de la guardia indígena, no cuenta con reconocimiento jurídico por parte del Estado colombiano. El predio ocupa una extensión de 247 hectáreas y pertenecía hasta hace poco tiempo a terratenientes extranjeros que lo tenían semi-abandonado, pero la perseverancia de los campesinos sin tierra y la intervención del gobierno de Petro, en el marco de su reforma agraria, consiguieron que en este caso particular la tierra pertenezca a quien la trabaja. No obstante, los campesinos de El Tablón denuncian hostigamientos permanentes por parte del ejército, dejando claro que no todas las ramas del Estado colombiano cooperan con las directrices políticas del gobierno.

Seguimos subiendo y nos adentramos en el departamento del Valle del Cauca. En Palmira nos encontramos con Walter, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP),

que nos facilita una visita a una penitenciaría de media-alta seguridad. Una vez pasados los controles protocolarios, se abre ante nosotros el patio interior de la cárcel y un campo de fútbol de hierba natural excesivamente estrecho. Cruzamos las puertas del centro a la vez que un grupo de 14 presos jóvenes que están ingresando en prisión, esposados en parejas por las muñecas. En el interior, mantenemos una larga reunión con Mauricio Tierradentro, un hombre privado de libertad y a la espera de juicio durante cuatro años por haber participado en el estallido social de 2021 contra el gobierno de Iván Duque. Mauricio nos cuenta que, además de las decenas de muertes provocadas por la represión policial durante las protestas, varios compañeros suyos han sido sistemáticamente asesinados al salir de la cárcel.

En un segundo momento se incorpora a la reunión un grupo de presos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que denuncian las malas condiciones de la cárcel, insisten en su apuesta por la paz y rechazan con vehemencia las acusaciones de connivencia entre la guerrilla y el narcotráfico salidas de la boca de Petro. “El narcotráfico es un cáncer, lo peor para la sociedad”. Antes de despedirnos recuerdan el nombre de Manuel Pérez Martínez, un cura español seguidor de la Teología de la Liberación que llegó a ser comandante en jefe del ELN a finales de los setenta. También expresan su alegría por la reciente identificación de los restos de Camilo Torres, sacerdote guerrillero y mártir cuyo cuerpo llevaba más de seis décadas desaparecido.

En esta etapa del viaje nos acompaña Nahuel González, joven diputado valenciano de Esquerra Unida en el Congreso. Nahuel fue uno de los miembros de la delegación asturiana de 2024, cuando se “enamóro” de Colombia y entendió “la complejidad de la situación de violencia política que se vive aquí”. Esta vez ha viajado al país invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar tareas de observación internacional en las elecciones legislativas. Al ser preguntado por su valoración del actual gobierno del



cambio, su respuesta es contundente: “Petro ha cambiado la historia de Latinoamérica. Hace 15 años mirábamos a Colombia como un país gobernado por la extrema derecha y con presidentes muy autoritarios”. Ahora, en cambio, es “una esperanza y un referente frente al auge de la extrema derecha mundial”. Mientras charlamos al anochecer en un parque bajo la catedral de Palmira, Nahuel también destaca que en cada lugar que visitamos nos encontramos con personas, principalmente mujeres, “que llevan toda la vida peleando por la dignidad de sus pueblos”.

Pereira, la capital del departamento de Risaralda, recuerda por momentos a un país del sudeste asiático, por sus densas selvas urbanas, la belleza de sus atardeceres y la proliferación descontrolada de motocicletas. Nuestra rutina en cada localidad a la que vamos es bastante similar y consiste en mantener largas reuniones con colectivos locales (sindicatos, organizaciones de derechos humanos, asociaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes o de mujeres), escuchar atentamente sus historias personales –atravesadas con frecuencia por niveles de violencia humanamente difíciles de soportar– y tomar nota de sus demandas para trasladarlas después a las instituciones colombianas y difundirlas a

través de la comunidad internacional. En Pereira, además, tenemos la oportunidad de entrevistarnos en privado con dos mujeres –muy diferentes entre sí– cuyos testimonios nos resultan especialmente interesantes.

La primera es María Teresa Henao, militante feminista y por los derechos humanos. Varios años atrás esta mujer apareció en unas carpetas secretas del ejército como un peligro para la seguridad nacional. María Teresa es una antigua integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde puntualiza que nunca estuvo en la estructura armada ni llegó a manejar un arma. Ahora hace parte de Comunes. En las elecciones legislativas de 2018 y 2022, dicho partido consiguió diez “curules” (escaños), otorgadas directamente por los acuerdos de paz de 2016 con el objetivo de facilitar la integración de la guerrilla en la vida institucional del país. Sin embargo, en las elecciones de 2026 dicha cláusula expiró y Comunes acaba de quedarse sin representación. María Teresa reconoce que les “fue pésimo”, pero al mismo tiempo se alegra de los buenos resultados de una fuerza progresista como el Pacto Histórico. En relación con el conflicto armado, nos traslada la posición de su partido: “en este país no hay otra salida que la legalización de las plantas de uso ilícito como la marihuana y la coca”.

Ángela Andrea García es una joven de Manizales que coordina el Observatorio de Conflictividad, Paz e Innovación Social del Oriente Caldense. Cuando estudiaba Trabajo Social vivió un episodio que marcó su trayectoria vital. En una asignatura le tocó leer un informe de 2014 del Centro Nacional de Memoria Histórica en el que se narraban “los diferentes repertorios de violencia y hechos victimizantes que tuvieron lugar en el marco del conflicto armado nacional”. Mientras lo leía, Andrea lloraba y vomitaba. “Casi me muero. Yo sabía que este país estaba en guerra, pero a través de la pantalla. Crecí en el centro del país y la guerra ha sido fundamentalmente en las periferias”. Ese día adquirió

inconscientemente un compromiso pedagógico y militante. Desde un punto de vista histórico, relata que cada vez que se han dado procesos de paz, lo que ha seguido ha sido un exterminio de los desmovilizados: pasó con la Unión Patriótica (con más de 7.000 miembros del partido asesinados a finales de los ochenta y principios de los noventa), pasó con el M-19 y está pasando con las FARC (desde 2016 han sido asesinados casi 500 firmantes de paz). Andrea es muy crítica con los grupos guerrilleros que siguen operando en Colombia: “la insurgencia tenía una filosofía, unas convicciones, unas banderas absolutamente claras como la redistribución de la tierra. Actualmente estamos hablando de paramilitares y narcotraficantes”. También expresa su pesimismo frente al panorama actual: “tenemos un problema de seguridad incontrolable a lo largo y ancho del país, hay una pérdida absoluta del control por parte del Estado”.

– En este escenario, ¿qué supondría una victoria de la derecha en las elecciones presidenciales?

– La llegada de nuevo de la violencia absoluta hacia todo el mundo. Ellos no hacen distinciones [entre guerrilleros y líderes sociales]. Todo el que esté en su contra es un revolucionario peligroso. En los gobiernos de Uribe se buscó la seguridad a costa de sacrificar los derechos humanos.

Etapa 3. Norte de Santander.

Desde el sur del país nuestra mitad de la delegación viaja al Norte de Santander, a la ciudad de Cúcuta. Recién aterrizados nos trasladamos directos a la cárcel, limítrofe con Venezuela, para reunirnos con otro grupo de presos del ELN y, en esta ocasión, también con una presa, proveniente de la cárcel de mujeres. Su nombre es Sonia Escribano. Lleva 19 años presa y tiene una condena de 45. A pesar de su trayectoria como guerrillera nos confiesa que ella “es mala pa’ la política”. Se queja de la discriminación que sufren las mujeres respecto a los hombres en sus respectivos centros penitenciarios: menos tiempo para visitas, horarios más



restringidos para hacer llamadas telefónicas, citas ginecológicas virtuales y dispersión de las presas del ELN en diferentes módulos, cuando los hombres conviven todos juntos en el mismo espacio. También nos relata el dolor que sufren las presas cuyos hijos han nacido en la cárcel y al momento de cumplir los tres años les son forzosamente arrebatados. Los presos nos entregan un documento político dirigido a las instituciones colombianas y nos trasladan su confianza en que la posible llegada de Iván Cepeda a la presidencia permita reactivar las mesas de negociación de paz con el ELN, que en la actualidad están temporalmente suspendidas. Nuestras guías en esta visita han sido Adriana Lizarazo, una mujer del CSPP que estuvo acogida en Asturias porque la iban a asesinar en Colombia, y su hija Carolina Sandoval, que siguiendo las huellas de su madre será acogida temporalmente por un programa de la Universidad de Burgos.

Durante este viaje conocemos a numerosas personas comunes que están protegidas por esquemas de seguridad del Estado, que incluyen habitualmente un todoterreno blindado, un guardaespaldas y un chaleco antibalas. Son integrantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), sindicalistas de la Central

Unitaria de Trabajadores (CUT) o jóvenes militantes del Partido Comunista. Un compañero de la delegación destaca el llamativo contraste entre quienes disponen de vehículos blindados en España (ministros del gobierno o altos cargos del Estado) y quienes lo hacen en Colombia (ciudadanos corrientes, mujeres activistas, trabajadores pobres). Según datos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a mediados de 2025 más de 13.000 personas estaban protegidas en Colombia por esquemas de seguridad. El año anterior las solicitudes habían ascendido hasta casi 51.000.

En uno de los pocos momentos en los que nuestra frenética agenda de encuentros nos permite tomarnos un respiro y mantener algunas conversaciones informales, nos sentamos a comer con un grupo de mujeres de Banderas Unidas, con quienes hemos mantenido una reunión previa en su sede del barrio de San Miguel. Muchas de ellas son venezolanas o tienen la doble nacionalidad y denuncian que “la problemática de la frontera es de nunca acabar”. Su asociación realiza un importante trabajo comunitario, enfocado especialmente en mujeres víctimas de violencia. Durante la sobremesa, una mujer que no utiliza su nombre real por miedo a represalias rememora un episodio traumático de su vida. Cuando era una adolescente fue capturada por el ELN en el Catatumbo, violada junto a otras chicas y recibió un tiro en la pierna. Consiguió escaparse durante un enfrentamiento de la guerrilla con los paramilitares, pero su calvario no terminó ahí, pues las amenazas sobre ella y su familia obligaron a su hijo a solicitar asilo político en Alemania. “Nunca se me va a ir el dolor”.

El Catatumbo, al norte de Cúcuta, es una de las zonas más calientes de Colombia. En esta región selvática, rica en recursos naturales y con extensas plantaciones de hoja de coca, se produce desde enero de 2025 un enfrentamiento armado entre el ELN y el Frente 33, una de las disidencias de las FARC que no se acogió a los acuerdos de paz. Como resultado, alrededor de un centenar de personas



han sido asesinadas y casi 100.000 han sido desplazadas de la zona. Entre estas últimas, un grupo de 71 firmantes de paz de las FARC junto a sus familias, que residían en Caño Indio y tuvieron que ser reubicados forzosamente en un campamento a las afueras de Cúcuta, hacinados en habitáculos prefabricados y sin acceso permanente a agua potable. Su portavoz, Willy, antiguo comandante de las FARC durante 28 años, nos cuenta que los vecinos de la zona rechazaron inicialmente su presencia y que para ellos “todo es un sufrimiento”. A pesar de los padecimientos, no se arrepienten de su apuesta por la paz y ratifican que “por medio de las armas no hay ningún tipo de solución”. Mientras aguardan a que el Estado mejore sus condiciones y les construya un lugar de residencia permanente, sobre-

viven organizados en una cooperativa que cría pollos, cerdos y hasta algunos búfalos. Ante el batacazo electoral de su partido, Comunes, Willy también expresa su deseo de que se encadene un gobierno de Petro con otro de Cepeda.

En la ciudad de Cúcuta nos reunimos con integrantes del Pacto Histórico del Norte de Santander. El ambiente en la sala es más bien sombrío, a pesar de la reciente victoria electoral de su partido en las legislativas y de las perspectivas optimistas de cara a las presidenciales. La razón es que todas las personas presentes, candidatas electorales incluidas, han recibido amenazas de muerte en sus teléfonos privados, vía SMS, por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo. En el mensaje que nos muestran se puede leer “los tenemos identificados, tienen 48 horas vamos por sus cabezas muertas”. El desconsuelo se ve agravado por lo que interpretan como un abandono por parte del Estado, liderado por el mismo partido político al que ellos representan. También señalan lo difícil que es hacer política en una región tan conservadora y corrupta y denuncian la “indolencia” y la “insolidaridad” del gobierno frente a las graves amenazas que acaban de recibir.

Nuestro último encuentro antes de regresar a Bogotá tiene lugar en una pequeña finca familiar a las afueras de Cúcuta. Varios perros juegan entre nuestras piernas y en plena reunión se desata un fuerte aguacero que nos obliga a elevar el tono de voz para poder escucharnos bien. Estamos con los habitantes de Juan Frío, un sujeto de reparación colectiva. La voz cantante la lleva Dina, una mujer que alterna sus intervenciones en la reunión con el cuidado de su hijo pequeño y la vigilancia de una gran pota en la que prepara la comida para unas quince personas. Esta fue una zona dominada durante mucho tiempo por grupos paramilitares. Uno de los legados más traumáticos de aquella época lo podemos contemplar con nuestros propios ojos en una zona de monte cercana a la finca. Allí, justo delante del río



Táchira, que marca la frontera con Venezuela, continúan en pie los restos de los hornos que los paramilitares utilizaban para incinerar los cadáveres de las personas que asesinaban. Un vecino lo compara con el Holocausto, aunque puntualiza que en los campos de concentración nazis existía un historial de los judíos que ingresaban en ellos. Aquí, en cambio, “no había ningún tipo de registro escrito”. A día de hoy el destino de muchas personas desaparecidas continúa siendo un misterio para sus familiares. Otra vecina nos asegura que alguna gente de esta zona “todavía piensa que las hortalizas están regadas con muertos”.

Etapas 4. Bogotá.

Los dos grupos de la delegación nos reencontramos en Bogotá para trasladarles a las instituciones políticas las demandas que hemos recogido en nuestro recorrido por

seis departamentos del país. En primer lugar, nos recibe el embajador de España en Bogotá, Santiago Jiménez, que nos define a Colombia como uno de sus destinos más complicados, pese a que trabajó en Siria durante la guerra. España, a través de su embajada, colabora con el gobierno colombiano en dos procesos de paz con grupos armados: el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Este último involucra al grupo que amenazó a los miembros del Pacto Histórico con los que nos reunimos en Cúcuta. Jiménez resume las labores de la embajada española en Bogotá con la fórmula “paz, paz, paz y feminismo”. No obstante, subraya la contradicción que supone que en un país con una institucionalidad tan importante y tantos organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos no se consiga detener la hemorragia permanente de víctimas. 187 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado, bajo un gobierno progresista. En Colombia hay registradas como víctimas alrededor de 9 millones de personas, de una población total cercana a los 54. Es decir, 1 de cada 6. La reciente inclusión de Colombia en la lista de países seguros de la Unión Europea no se condice con los altos niveles de violencia que persisten en el país.

Continuamos con nuestra ronda de reuniones en las respectivas Direcciones Generales de Derechos Humanos de los ministerios del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores, en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y en las oficinas de la ONU en Colombia. En varias de estas instituciones nos encontramos con un hecho sobresaliente: mujeres y hombres jóvenes que fueron acogidos en años anteriores por el programa asturiano de atención a víctimas, por encontrarse amenazados y amenazadas de muerte, ahora se reúnen con nuestra delegación en calidad de representantes políticos de las instituciones colombianas. Un interlocutor nos declara que ellos siguen considerándose “pueblo organizado, pero dentro del Estado”.

Asturias también fue territorio de acogida para Aída Quilcué, la candidata del Pacto Histórico a la vicepresidencia de Colombia. La vida de esta líder indígena del pueblo nasa está profundamente atravesada por la violencia, como la de tantos compatriotas suyos. En diciembre de 2008, Quilcué acababa de regresar de realizar una denuncia sobre la situación de los pueblos indígenas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Suiza. Su esposo, Edwin Legarda, fue asesinado por el ejército mientras se dirigía a recogerla. Todo indica que ella era el objetivo real del ataque. Poco después, fue invitada por el gobierno asturiano para participar en un “alcuentru de cosmovisión y resistencia indíxenes” en Oviedo. Actualmente, Aída Quilcué se desempeña como senadora por la circunscripción especial indígena, lo que no impidió que a principios de febrero fuese víctima de un secuestro exprés por parte de una disidencia de las FARC en el Cauca. En una reunión en un pequeño despacho del Senado, dos de sus asesores más cercanos resaltan su carácter dialogante y su capaci-



dad para tender puentes con un lenguaje de unidad de país que trasciende a los movimientos de izquierdas. No tiene problemas para “sentarse a discutir con los antagonicos”.

Como ejemplo supremo mencionan lo que sucedió en 2018. En el resguardo indígena de Monterilla y ante más de dos mil integrantes del pueblo nasa, Aída Quilcué recibió al viceministro de Defensa y a un general del ejército que venían a disculparse en nombre del Estado colombiano, obligados por una sentencia judicial, por el asesinato de su marido. La líder indígena aceptó su perdón y abrazó al viceministro, pero insistió en denunciar la impunidad de los autores intelectuales del homicidio. En una entrevista posterior, añadió: “no podemos permitir que nos sigan asesinando por pensar diferente, por vivir en un país diverso como es Colombia. Nosotros entendemos que la ideología de muchos es distinta a la de nosotros y la respetamos, pero también queremos que respeten nuestra identidad, cultura y forma de ser indígena”.

Cristian Acosta Olaya es autor del libro *Un dique en aguas turbulentas. Identidades políticas, populismo y violencia en la Colombia de Jorge Eliécer Gaitán, 1928-1948*. Este joven politólogo colombiano, investigador en el CONICET argentino, nos desgana algunas claves sobre la actualidad política de su país. En primer lugar, señala que los acuerdos de paz de 2016, por los que la guerrilla de las FARC dejó de existir como una suerte de “alteridad nacional”, posibilitaron la existencia de un gobierno progresista en Colombia. El presidente Petro “entró en 2022 con un respaldo muy generalizado de la sociedad”, pero ese “exceso de optimismo” se fue “morigerando” a partir de una serie de reveses parlamentarios. Su gobierno tuvo enfrente “al poder legislativo, a los medios de comunicación, a los empresarios y a los dueños de un país, Colombia, que está entre los tres o cuatro más desiguales del mundo”. A pesar de ello, ha conseguido “una estabilidad macroeconómica que muy pocas veces se vio en el país” y un “auge

inusitado del consumo”. Sobre la estrategia petrista de “paz total”, Acosta Olaya enfatiza la dificultad que supone “negociar con todos los actores armados al mismo tiempo”, incluyendo no solamente a lo que en la jerga académica se conoce como Grupos Armados Organizados (GAO), sino también a Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). Sus perspectivas electorales traslucen un pesimismo que contrasta con el optimismo generalizado que hemos percibido durante todo el viaje. Su primera razón es que la subjetividad colombiana sigue demasiado impregnada por las ideas neoliberales. “Tenemos una cosmovisión política muy de derechas”. Su segunda razón tiene que ver con el liderazgo de Cepeda. Le valora como un tipo “brillante y formadísimo, con una historia personal desgarradora” y que “puso



contra las cuerdas a un líder que parecía intocable como Uribe”, pero le achaca también un cierto déficit de ambición política. A Cepeda le estarían faltando, en un sentido weberiano, ganas de “meter la mano en la rueda de la historia”.

Un día después del encuentro fortuito de parte de la delegación precisamente con Iván Cepeda en el Senado, nuestro último acto antes de regresar a España consiste en ofrecer una rueda de prensa de conclusiones preliminares en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Previamente, nos reunimos con su Consejo Mayor. La ONIC representa a 82 de los 115 pueblos indígenas de Colombia,

que cuentan con un sistema de gobierno propio, estructurado geográficamente en cinco macrorregiones. El 30% del territorio nacional colombiano está habitado por indígenas, aunque solamente sean alrededor del 6% de la población. La Constitución colombiana de 1991 reconoce sus derechos fundamentales y también sus funciones jurisdiccionales especiales. El consejero mayor, Roselino Guarupe Joropa, nos plantea que “no es suficiente con avanzar en lo jurídico, sino que también hay que hacerlo en garantías económicas y presupuestarias”, aunque para ello haga falta “tocar los intereses de los grandes poderes del país”. Cuando el gobierno avanza en derechos, como con la reciente subida del salario mínimo de un 24%, el movimiento indígena sale a las calles a defenderlo. “Ahí nos encontramos”. Las autoridades indígenas celebran el acuerdo alcanzado durante la última delegación con el gobierno asturiano, a través de la Dirección General de la Agenda 2030, por el que esta última financiará proyectos de agricultura regenerativa en Colombia en colaboración con la ONIC. Este proyecto institucional pone una nueva piedra en la alianza solidaria astur-colombiana que el programa de atención a víctimas y la delegación llevan más de dos décadas cultivando con la mayor de las perseverancias internacionalistas. Ojalá en un futuro próximo la conquista de la paz con justicia social en Colombia convierta a las dos últimas en iniciativas innecesarias.

Mientras tanto, la delegación asturiana de verificación de paz y derechos humanos ya está redactando su informe final de 2026, que será presentado próximamente a la ciudadanía y a las autoridades.

[Toda obra individual está sostenida por un esfuerzo colectivo y esta más que ninguna otra. Gracias a Arjona, Alba, Alma, Candela, Carlos, Esther, Orozco, Lucía, Pilar, Nahuel, Rubén, Tania, Verónica, Eloína, Adrián, Almudena, Inmaculada y Mauricio. Esta actividad se ha desarrollado como parte de la colaboración entre AMA Asturias y Nor-tes en el marco del proyecto COOPERAMA 2026/2027]



En la visita a la cárcel de Cúcuta la Delegación Asturiana recibió el siguiente escrito con la petición de difundirlo como expresión de su voluntad de paz: “Comunicado de Presos Políticos para la construcción de Paz. Desde las cárceles de Colombia al mundo Cúcuta, Norte de Santander, 13 de marzo de 2026.

Dirigido a los pueblos del mundo, a las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, a los movimientos de derechos humanos, a la comunidad internacional y a la XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos.

Desde los centros penitenciarios de Colombia, las personas privadas de la libertad que nos reconocemos como presos políticos elevamos nuestra voz para expresar un profundo compromiso con la construcción de la paz, la justicia social y la reconciliación de los pueblos.

Aunque nos encontramos tras los muros de las cárceles, seguimos siendo parte de la sociedad y del destino colectivo del país. Desde estos espacios de encierro reflexionamos sobre las causas profundas de los conflictos sociales y políticos que han marcado la historia de Colombia y de muchos pueblos del mundo.

Estamos convencidos de que la paz no puede limitarse al silencio de las armas. La paz ver-

dadera implica transformaciones sociales, democráticas, culturales y económicas que garanticen dignidad, justicia y participación de todos los pueblos.

Reconocemos que los conflictos sociales y armados han dejado profundas heridas en millones de colombianos. Las víctimas del conflicto merecen verdad, reconocimiento y caminos reales hacia la reparación y la dignidad.

Desde nuestra condición actual reafirmamos la disposición de contribuir a procesos de memoria, reflexión y reconciliación que permitan cerrar los ciclos de violencia que han marcado a generaciones enteras. Consideramos que incluso en los lugares como estos de mayor exclusión pueden surgir procesos de aprendizaje, dignificación humana y construcción de futuro.

Por ello, proponemos que los patios donde se encuentran presos políticos continúen consolidándose como laboratorios de paz y espacios de pedagogía social, en los cuales puedan desarrollarse procesos de formación en cultura de paz, programas de resolución pacífica de conflictos, encuentros de reconciliación, iniciativas educativas y culturales, así como reflexiones colectivas sobre las transformaciones que requieren nuestras sociedades. Desde las cárceles proponemos también impulsar escuelas de pedagogía para la paz orientadas a promover el respeto por los derechos humanos, fomentar el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos, fortalecer la conciencia crítica sobre las causas estructurales de la violencia y contribuir a la formación de ciudadanos comprometidos con la convivencia democrática.

Consideramos que estas iniciativas pueden desarrollarse con el acompañamiento de universidades, organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos y la comunidad internacional. Asimismo, creemos necesario avanzar en escenarios de diálogo con las víctimas y con los distintos sectores de la sociedad civil, en



espacios de respeto, escucha y reconocimiento mutuo.

Estamos convencidos de que el encuentro humano y el diálogo sincero constituyen caminos fundamentales para avanzar hacia la reconciliación y hacia la construcción de una memoria colectiva que permita aprender del pasado y evitar la repetición de los hechos que han marcado dolorosamente la historia del país. Invitamos a los movimientos sociales, comunidades territoriales, organizaciones populares y sectores democráticos a construir conjuntamente una agenda de país para la paz basada en principios como la justicia social, la seguridad jurídica, la democracia participativa, el respeto por los derechos humanos, la inclusión social, la dignidad de los pueblos y la defensa por la permanencia en los territorios.

Esta agenda debe construirse desde las comunidades, los territorios y los sectores históricamente excluidos. Hacemos también un llamado a la solidaridad internacional, que históricamente ha sido fundamental en el acompañamiento y fortalecimiento de los caminos hacia la reconciliación y la búsqueda de una paz estable y duradera.

Consideramos necesario el reconocimiento del conflicto armado interno de las causas estructurales que lo originaron como un paso fundamental para avanzar hacia soluciones políticas, sociales y democráticas que permitan superarlo. Estas aspiraciones no pertenecen únicamente a un país, sino que hacen parte de las luchas universales de los pueblos del mundo por la justicia, la dignidad y la paz.

Desde nuestra condición de presos políticos reafirmamos la voluntad de seguir aportando a los caminos de la paz, con la convicción de contribuir a que las nuevas generaciones puedan vivir en un país con mayores oportunidades, justicia social y respeto por la vida.

Quienes hoy nos encontramos tras los muros de las cárceles continuamos caminando, desde nuestra realidad, junto a los pueblos que luchan por un mundo más justo.

Desde las cárceles de Colombia enviamos este mensaje a la comunidad internacional: y decirles que la paz es posible cuando los pueblos se reconocen, dialogan y transforman las condiciones que generan la violencia. Invitamos a todas las personas comprometidas con la vida, la dignidad humana y la construcción de un mundo más justo a sumarse a este camino colectivo hacia la paz, con la esperanza de que un futuro distinto sea posible para todos y todas.

En este sentido, hacemos un respetuoso llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a las plataformas sociales y a los organismos multilaterales para que continúen acompañando y observando la situación de derechos humanos en los centros penitenciarios de Colombia, promuevan espacios de diálogo humanitario y respalden iniciativas orientadas a la construcción de paz, la reconciliación y la dignificación de las personas privadas de la libertad.

Solicitamos igualmente que se impulse el seguimiento a las condiciones de reclusión, el respeto por los derechos fundamentales de la población carcelaria y el apoyo a procesos de pedagogía para la paz que permitan convertir estos espacios de encierro en escenarios de reflexión, transformación y construcción de futuro.

Colectivos de Presos Políticos del ELN Complejo Penitenciario y Carcelario de Cúcuta.”



ORGANIZACIONES

ACEB, Asociación Colombiana de Empleados Bancarios
 ACEU, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios
 ACONC, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca
 ADIECOL, Asociación de Desarrollo Integral de Colombia, Santander de Quilichao
 ANDAS, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria
 ANTHOC Buga
 ANTHOC, Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios
 ASMEDIC, Asociación Médica para la Comunidad
 ASOCATDAME, Asociación de Campesinos Trabajadores Agropecuarios
 Asocampec, Asociación Campesina Ecoambiental
 Asociación Avelino Ul
 Asociación Juntas Comunales de Tuluá
 Asociación Pro Zona de Reserva Campesina
 ASPROANORT, Asociación de Productores Agropecuarios Norte Santander
 Astrazonacal, Asociación de Trabajadores de la Zona de Reserva Campesina de Caloto
 Banderas Unidas, barrio San Miguel, comuna 9, Cúcuta
 Bosque de las Heliconias
 CAJAR, Colectivo de Abogados José Alver Restrepo
 Campaña todas las vidas importan, Pereira
 Caribe Afirmativo
 CESPAS, Centro de Estudios para la Paz, Risaralda
 CGT, Central General de Trabajadores
 CNA, Coordinador Nacional Agrario
 Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
 Comunidades campesinas del norte del Cauca (Caloto, Corinto, Santander de Quilichao, Miranda)
 Consejo Comunitario Guachené
 Consejo Interétnico Norte del Cauca
 Conspirando por la Paz
 Construyendo Vías Diferentes
 Contrapunto juvenil

Cooperativa Comprocan
 Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
 Corporación Minga
 Corporación Vínculos
 CPDH, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
 CRIDEC, Concejo Regional Indígena de Caldas
 CSPP, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
 CTC, Central de Trabajadores de Colombia
 CUT, Central Unitaria de Trabajadores CUT, Valle, Cauca, Risaralda, Jamundí, Norte de Santander.
 CUT, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia
 Desalambrados
 DHOC, Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia
 Escuela de Sembradoras de Vida
 FECODE, Federación Colombiana de Educadores
 Fensuagro, Federación Sindical Unitaria Agropecuaria
 Firmantes de Paz Caño Indio
 Fundación Color Esperanza
 Fundación Erika Bautista
 Guardianes de la democracia
 Hilos de Justicia, Cartago
 Humanidad Vigente
 Juntas de Acción Comunal del Alto Ariari
 Mesa territorial de garantías Eje cafetero
 MOVICE, Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado
 Mujeres Sembrando Sueños
 Mujeres Sin Filtro
 Mujeres Trascendiendo por la Paz
 Observatorio de Paz y Conflictividad Social del Oriente Caldense
 ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia
 PCN, Proceso Comunidades Negras
 PRAI Catatumbo
 Presos disidencias cárcel Villavicencio
 Presos Políticos de las disidencias de las FARC EMC en la cárcel de Villavicencio
 Presos-as políticos del ELN en las cárceles de Palmira y de Cúcuta

Pueblo Joven del Norte
 PUPSOC, Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, Cauca, Valle, Nariño
 Red de DDHH Paz y Vida EDUCAL (Caldas)
 Red de Mujeres Buscadoras
 Red Francisco Isaías Cifuentes
 Red Llano y Selva
 Red por la Vida
 Red tejedora entornos seguros
 RENACER Siglo XXI
 SER, Sindicato de Educadores de Risaralda
 Sinaltrainal, Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario. Dosquebradas, Pereira, Valle.
 SintracuaValle, Sindicato de Trabajadores de Acuavalle
 Sintradian, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
 Sintraelec, Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Colombia
 SINTRAEMCALI, Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali
 Sintraemsdes, Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de los Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia, Pereira.
 SINTRAGRIM, Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta
 Sintraicañazucol, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Caña de Azúcar de Colombia
 Sintrainagro, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
 Sintramunicipio Yumbo
 Sintraquim, Sindicato Industria Química y Farmacia
 Sintraunicol, Sindicato Nacional De Trabajadores y Empleados Universitarios, Valle
 Somos Defensores
 SUTEC, Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca
 SweFOR, Movimiento Sueco por la Reconciliación
 UP, Unión Patriótica
 Veeduría ciudadana del Catatumbo

REFERENCIAS Y FUENTES

1. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session61/advance-version/a-hrc-61-20-aev.pdf>
2. <https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/colombia/report-colombia/>
3. <https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Colombia-logra-hito-en-su-lucha-contra-el-narcotrafico-3275-toneladas-de-cocaina-incautadas-entre-2022-y-2026-260322.aspx>
4. <https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Petro-suspende-dialogos>
5. <https://www.rtvcnoticias.com/colombia/acuerdo-comuneros-del-sur-samaniego>
6. <https://www.presidencia.gov.co/prensa/HistorialVida/VIDA3425.pdf>
7. <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/los-peros-de-la-onu-a-proyecto-de-ley-de-sometimiento-de-bandas-criminales-las-sanciones-deben-ser-adecuadas-3486776>
8. https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Documents/2025.07.20_Proyecto9. <https://indepaz.org.co/observatorio-de-derechos-humanos-y-conflictividades/>
10. <https://www.unocha.org/publications/report/colombia/colombia-informe-de-tendencias-e-impacto-humanitario-en-2025>
11. <https://www.efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj>

12. <https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/colombia/report-colombia/>
13. <https://indepaz.org.co/mientras-el-reclutamiento-crece-la-infancia-se-reduce-dinamicas-de-reclutamiento-de-nna-en-territorios-bajo-control-armado/>
14. <https://colombia.un.org/es/297052-nota-informativa-%E2%80%99Catrapados-en-las-redes-del-conflicto-aumento-del-reclutamiento->
15. https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/nota-informativa-atrapados-en-las-redes-del-conflicto-aumento-del-reclutamiento-de-ninas-y-ninos/
16. <https://www.swissinfo.ch/spa/la-onu-expresa-su-preocupaci%C3%B3n-por-la-muerte-de-7-menores-en-un-bombardeo-en-colombia/90343117>
17. <https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Petro-dijo-que-ordeno-bombardeos-respetando-el-DIH-y-asumiendo-riesgos-251113.aspx>
18. <https://www.youtube.com/watch?v=esECepYmUaQ>
19. <https://www.defensoria.gov.co/-/el-principio-de-humanidad-debe-prevaler-por-encima-de-la-guerra-defensor%C3%ADa-del-pueblo>
20. <https://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/>
21. <https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/7236-comision-primer-a-prueba-proyecto-para-erradicar-la-mutilacion-genital-femenina-en-colombia>
22. <https://colombia.unfpa.org/es/news/el-momen-to-de-poner-fin-la-mutilacion-genital-femenina-en-colombia-es-ahora>
23. <https://relatoria.jep.gov.co//documentos/providencias>
24. <https://una.uniandes.edu.co/index.php/blog/68-delitos-politicos-conexidad-y-acuerdo-final-para-la-terminacion-del-conflicto-y-la-construccion-de-una-paz-estable-y-duradera>
25. <https://caracol.com.co/2026/04/29/jep-acredita-como-victima-directa-a-alias-simon-trinidad-dentro-del-caso-06-de-la-union-patriotica/>
26. <https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2026/03/03-04-2026-Presentacion-Informe-Anual-2025-Evento-Version-Final.pdf>
27. <https://www.rtvnoticias.com/politica/10-logros-clave-del-gobierno-del-presidente-gustavo-petro-en-2025>
28. <https://www.europapress.es/internacional/noticia-colombia-eleva-7837-victimas-falsos-positivos-1990-2016-20260429063000.html>
29. <https://www.europapress.es/internacional/noticia-colombia-eleva-7837->
30. Reunión con la UARIV, Bogotá, 16 de marzo/26
31. <https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/retrasos-en-el-fondo-de-reparacion-afectan-pago-de-indemnizaciones-a-victimas-no-se-giraron-recursos-de-2025/>
32. <https://unidadbusqueda.gov.co/actualidad/re->

gistro-136010-personas-desaparecidas-colombia-abril-2026/

33. <https://unidadbusqueda.gov.co/actualidad/resultados-busqueda-balance-nacional-2024/>

34. <https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/colombia/report-colombia/>

35. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/colombia>

36. <https://somosdefensores.org/informe-anual-2025-i-promesas-rotas/>

37. <https://somosdefensores.org/informe-anual-2025-i-promesas-rotas/>

38. <https://www.colectivodeabogados.org/invitacion-a-rueda-de-prensa-cierre-de-la-xxii-delegacion-asturiana-de-derechos-humanos-y-paz-en-colombia/>

39. <https://www.infobae.com/america/agencias/2026/03/29/el-gobierno-de-asturias-fortalece-su-accion-humanitaria-en-colombia/>

40. <https://humanidadvigente.net/declaracion-final-de-la-vigesima-segunda-visita-asturiana-de-derechos-humanos-y-paz/>

41. <https://www.codopa.org/declaracion-final-delegacion-colombia>

42. <https://www.instagram.com/p/DWEhh74jkvY/>

43. <https://www.nortes.me/2026/03/03/una-nueva-delegacion-asturiana-de-verificacion-de-derechos-humanos-se-prepara-para-viajar-a-colombia/>

chos-humanos-se-prepara-para-viajar-a-colombia/

44. <https://www.instagram.com/reels/DWws18HDIYM/>

45. <https://humanidadvigente.net/la-xxii-delegacion-asturiana-de-derechos-humanos-y-paz-alerta-sobre-el-agravamiento-de-la-situacion-humanitaria-en-el-guaviare/>

46. <https://www.nortes.me/2026/04/03/viaje-solidario-a-los-centros-del-conflicto-en-colombia/>

47. <https://pachakuti.org/regresa-la-mision-astur-de-colombia/>

48. <https://www.codopa.org/declaracion-final-delegacion-colombia>

49. <https://pachakuti.org/colombia-en-elecciones-observacion-asturiana/>

50. <https://www.youtube.com/watch?v=HYAnZOkPn8>

51. <https://web.nydia-erika-bautista.org/declaratoria-de-lesa-humanidad-en-el-caso-de-nydia-erika-bautista/>

52. <https://x.com/RadNalCo/status/2034264774083547253>

53. <https://pachakuti.org/pero-hubo-alguna-vez-hornos-crematorios-en-juan-frio/>

54. <https://pachakuti.org/la-delegacion-astur-en-el-cauca-departamento-interetnico-de-colombia/>

CON EL APOYO DE:

Ayuntamiento  de Langreo



**XXII INFORME ASTURIANU
ESTÁU DE LOS DRECHOS HUMANOS Y DE
LA PAZ EN COLOMBIA 2026**

XXII INFORME ASTURIANU ESTÁU DE LOS DRECHOS HUMANOS Y DE LA PAZ COLOMBIA 2026

Los avances en calidá democrática contrasten colos ataques a la dirixencia social y al texíu social organizáu que ta en peligru

La XXIIª Delegación asturiana estima l'acompañamientu mientres la nuesa visita por parte de les organizaciones integrantes del Comité de Selección del Programa Asturianu d'Atención a Víctimes de la Violencia en Colombia: CUT-DDHH nacional y Subdirectives; CNA, MOVICE, ANDES, CSPP, ONIC, CPDH, CAJAR y Fensuagro.

En memoria fértil de TINO BRUGOS, mayestru, sindicalista, internacionalista ástur cántabru, activista de los drechos humanos ya integrante de la Delegación Asturiana en visites a zones de conflictu armáu en Colombia.

Semeyes: XXII Delegación Asturiana

Edita: XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y la Paz en Colombia

Colofón de: Protect Defenders

Torna: Alma Hidalgo Lucena

Imprime: Paper Color

INDIZ

PRESENTACIÓN	7
Prólogo	7
Integrantes de la XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz	9
Rexones visitaes	10
Entrevistes institucionales	10
1-. LA PAZ, UN ANHELU, UNA NECESIDAD	11
Un conflictu fragmentándose y degradándose	11
Esquemes de gobernanza armao illegal nos territorios	14
La Política de Defensa, Seguranza y Convivencia Ciudadana nun llega a les rexones	15
Medra'l reclutamientu de menores	15
LGBTIQ+ un colectivu discrimináu y perseguíu	17
La persistente violencia contra les muyeres y neñes	17
Medra'l desplazamientu a la fuercia	18
Avances en drechos económicos, sociales y culturales	18
Crítica situación nes cárceles.	19
Simón Trinidad, presu políticu nos Estados Xuníos	20
Meyores metanes les dificultaes pal cumplimientu del Alcuertu de Paz	21
La reactivación de la reforma agraria convencional	22
La Xurisdicción Especial de Paz profier les sos primeres sentencies	23
Cuestionada la Unidá para l'Atención y Arreglu Integral a les Víctimes	23
Drechos de los pueblos indíxenes	24

Sigui la desapaición a la fuerca de persones	25
Incrementéntense los ataques a persones defensores	26
2-. SITUACION DE LOS DRECHOS HUMANOS NES REXONES VISITAES ENTE'L 5 Y EL 17 DE MARZU/26.	29
Norte de Santander	29
Cauca	29
Valle del Cauca	30
Eje cafetero	30
Guaviare	31
Meta	32
Bogotá D.C.	33
CONCLUSIONES	34
ENCAMENTAMIENTOS	35
Al gobiernu de Colombia	35
Al gobiernu d'España y a la Unión Europea	36
UN RELLATU Y UNA CARTA DEL VIAXE	36
Viaxe solidariu a los centros del conflictu en Colombia	36
Carta d'ún colectivuu de presos políticos del ELN	36
ORGANIZACIONES	48
REFERENCIAS Y FUENTES	49

PRESENTACIÓN

Prólogo

ATAYAR LA CONTINUACIÓN DEL CONFLICTU

Ventidós años dempués de la primer Delegación Asturiana de Drechos Humanos y Paz en Colombia déxenos constatar, cola abonda perspectiva, los elementos de continuidá y cambéu produciós. Acullá de les retóriques oficiales y los análisis comenenciudos, si daqué tien d'imprescindible l'axenda que s'entama cada añu ye'l contactu colos activistes sociales en cada rincón del país, la recoyida de testimonios ensin más enfotu que dar voz a quien de manera desinteresada mos lo ufierta.

Primer constatación: en Colombia'l conflictu permanez. Esta afirmación nun supón nenguna devaluación de la importancia de los procesos de paz, de los cambeos políticos, de les meyores en drechos civiles, sociales, económicos y culturales. Arguyecémos de que, el granu de sable que supón l'acoyida temporal a persones defensores de drechos humanos y sindicalistes de Colombia n'Asturies, reflexar nel papel protagonista que munches d'elles desempeñen nos cambeos positivos que guardemos.

Pero los graves ataques a civiles y activistes sociales siguen y agrávense en delles rexones que visitemos. La declaración formal de la Unión Europea pola que considera a Colombia un país seguru, lloñe de constituyir un xestu de diplomacia escontra los esfuerzos de



los gobernantes del país andín, ye un actu d'egoísmu ya irresponsabilidá, onde prima'l cálculu nes polítiques migratorias restrictives de drechos y la oportunidá de negociu ensin llimitaciones llegalas pa les sos multinacionales.

Una segunda constatación que facemos ye l'impulsu a les reformes democrátiques, daqué que pudimos comprobar de primer mano cola participación de miembros de la delegación como observadores demientres les eleiciones de marzu. Siguiamos con interés y esmolecimientu sobro la situación política colombiana, nun contestu rexonal de involución énte'l fortalecimientu d'opciones autoritarias y les brutales intervenciones del gobiernu norteamericanu, en clara violación del Drechu internacional y la soberanía de los pueblos.



Nesti sentíu van ser decisives les vinientes eleiciones presidenciales. Pa superar les torgues qu'impiden avanzar na construcción democrática, nel afitamientu d'un Estáu Social de Drechu, nel llibre desempeñu del activismu social, ye precisu atayar la continuación del conflictu. Pa ello nun hai otu camín que confrontar la resistencia política y armada al cambéu de los sectores que defienden los sos privilexos y el poder económicu de cualesquier orixe, dende una aición del Estáu coherente colos drechos humanos y dende la movilización democrática de les mayoríes sociales.

Como cabera constatación relevante quixera destacar el retrocesu de la cooperación internacional y la presencia de los organismos supranacionales que vinien desempeñando un papel positivu nel conflictu, daqué que dende la nuesa primer delegación pudimos reparar nel estensu territoriu colombianu. Esmoleznos el zarru de trés oficines de la ONU en Medellín, Neiva y Villavicencio, qu'hasta agora desempeñaben xeres de monitoréu, asistencia técnica y promoción de los drechos humanos en zones onde'l riesgu de la degradación del conflictu, nes nueves circunstancies, ye real.

Esti retrocesu fae sumir al de la cooperación y de numerosos organizaciones non gubernamentales internacionales.

La presencia sobro'l terrén, y el papel de delegaciones como la nuesa, ye ún llabor que dexa superar la frialdá y los espeyismos de les estadístiques y los informes oficiales.

Nun mundu apoderáu pola inmediatez y la política espectáculu, dar carpetazu mediáticu a la realidá de les zones de conflictu cuando se producen inflexiones decisives ye una práctica llamentablemente estendida.

Tamos acabantes de comprobalo col xenocidiu en Gaza. Nun ye'l casu de la Delegación Asturiana de Drechos Humanos y Paz en Colombia.

Nestos ventidós años, los miles de kilómetros percorríos texeron con un filu simbólicu de solidaridá les rellaciones de los pueblos de dambos llaos del océanu.

L'informe que s'ufierta de siguió ye amuesafirme d'esta declaración de compromisu.

Mauricio Valiente *Direutor Xeneral de la Comisión Española d' Ayuda al Refuxáu, CEAR.*

INTEGRANTES DE LA XXII DELEGACIÓN ASTURIANA DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ

ADRIÁN GAYO.

Alcalde del ayuntamientu de Teverga/Asturias.

MAURICIO VALIENTE OTS.

Direutor Xeneral de la Comisión Española d'Ayuda al Refuxáu, CEAR.

INMACULADA GONZÁLEZ CARVAJAL.

Presidenta de la Coordinadora d'Ongs d' Asturias, CODOPA

ELOINA BERMEJO LOZANO.

Secretaría de la Coordinadora d'Ongs d' Asturias, CODOPA

MARÍA ESTHER BARBÓN BARBÓN.

Comisiones Obreres d'Asturies, CCO

RUBÉN RUIZ FERNÁNDEZ.

Federación d'Enseñanza, Comisiones Obreres d'Asturies

JAVIER ARJONA MUÑOZ.

Soldepaz Pachakuti

PILAR RATO RODRÍGUEZ.

Presidenta de Paz y Solidaridá Asturias

LUCÍA ALLER GUTIÉRREZ.

Inxenería Ensin Fronteres Asturias, ISFA

DAVID SÁNCHEZ PIÑEIRO.

As amblea Moza d'Asturies, AMA

ALMA HIDALGO LUCENA.

Conseyu de la Moicedá del Principáu d'Asturies CMPA y Conseyu de la Moicedá de Xixón CMX.

CARLOS MEANA SUÁREZ.

Soldepaz Pachakuti

ALBA NOGUEIRO GARCÍA.

Soldepaz Pachakuti

VERÓNICA LAORDEN GÓMEZ-PAVÓN

Comisión Española d'Ayuda al Refuxáu, CEAR

JAVIER OROZCO PEÑARANDA.

Soldepaz Pachakuti. Técnico de la Delegación Asturiana. Coordinador del Programa Asturianu d'Atención a víctimes de la violencia en Colombia.



REXONES VISITAESS

CAUCA: Popayán, Santander de Quilichao, Corinto

VALLE DEL CAUCA: Cali y la cárcel de Palmira

RISARALDA: Pereira

NORTE DE SANTANDER: Cúcuta y la cárcel de Cúcuta, Juan Frío

GUAVIARE: San José del Guaviare, El Retorno

META: El Castillo, Puerto Lleras, Puerto Esperanza, Villavicencio y cárcel de Villavicencio.

BOGOTÁ.D.C.



ENTREVISTES INSTITUCIONALES

La XXII Delegación Asturiana axunta representantes institucionales, alcaldes d'El Retorno nel Guaviare y El Castillo nel Meta, les persones delegaes de la Defensoría del Pueblu nel Guaviare, Meta y Norte Santander, Prosperidá Social y Consejería Presidencial de DDHH nel Norte Santander, Axencia de Reincorporación y Normalización, ARN.

En Bogotá la Delegación compartió atopadures y valoraciones no que cinca al estáu de los drechos humanos y de la paz col Sr. Embaxador d'España Santiago Jiménez Martín, col Sr. Scott Cambell representante en Colombia del del Altu Comisionáu de la ONU pa los Drechos Humanos y con funcionarios de la Dirección de Drechos Humanos del Ministeriu del Interior, la Dirección de Drechos Humanos y Drechu Internacional Humanitariu del Ministeriu de Defensa, la Unidá pa l'Atención y Arreglu Integral a les Víctimes, el Sr. Nelson Restrepo de la Dirección de Drechos Humanos y Drechu Internacional Humanitariu del Ministeriu de Rellaciones Esteriores de Colombia.

La XXII Delegación Asturiana de Drechos Humanos y paz visitó Colombia ente'l 5 y el 17 de marzu del 2026.

1-LA PAZ, UN ANHELU, UNA NECESIDÁ

“Colombia enfréntase a la posibilidá de recular a la grave situación de los drechos humanos esperimentada enantes de la robla del Alcuertu de Paz, en particular nos territorios.” Informe del ACNUDH “Estáu de los Drechos Humanos en Colombia nel 2025.”¹

UN CONFLICTU QUE DIXÉBRASE Y AMENÓRGASE

La Delegación Asturiana de Drechos Humanos y Paz que s'integró a la Misión d'Observación Electoral (MOE) nos comicios del 8 de marzu, felicita al pueblu colombianu pol exerciciu de la so soberanía de la qu'emanó un nuevu Congresu de la República.

Colombia avanza na construcción d'Estáu Social de Drechu cola torga del conflictu armáu internu que persiste, estázase, estiéndese y degrádase con graves afectaciones sobro la población civil, les comunidaes y la so dirixencia, a pesar del propóscitu del gobiernu presidíu por Gustavo Petro Urrego d'algamar la paz, compromisu asumíu pol Estáu dende la firma del Alcuertu de Paz coles FARC va diez años.

La espansión y degradación actual del conflictu armáu internu rellaciónase col incumplimientu apostáu del Alcuertu de Paz nos gobiernos de Juan Manuel Santos ya Iván Duque, na marxinación del campesináu y na hestórica concentración de la propiedá de la tierra que s'agravó cola contrareforma agraria a sangre y fueu demientres los gobiernos d'Álvaro Uribe, caldu de cultivu pa la minería ilegal, la espansión de los cultivos d'usu ilícitu a nueves árees fuxendo de los sulfatamientos aéreos, la penetración del Congresu y de segmentos de los poderes y de la



fuercia públicu por axentes de la corrupción empresarial y del narcotráficu, acovecíos pola impunidá estructural.

Según la Oficina de les Naciones Xuníes pa la Coordinación d'Asuntos Humanitarios, OCHA, más de 1,6 millones de persones foron impactaes por violencia y conflictu armáu en 2025, triplicando les cifres del 2024.

La espansión del conflictu refléxase nel Informe d'Amnistía Internacional sobro Colombia: “Rexistráronse fechos especialmente esmolecedores nos departamentos de Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Topetó, Bolívar y La Guajira, según nes rexones del Catatumbo, Madalena Medio, Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar. Intensificáronse les disputes pol control territorial, social y económicu y la fragmenta-

ción de los grupos armaos. La Fundación Escurres pa la Paz identificó 14 zones en disputa ente estos —el doble qu’al entamu del mandatu del presidente Gustavo Petro— y documentó un aumentu de los combates ente grupos armaos y les fuerces militares y de seguridá.”

Les privaciones ilegales de la llibertá por grupos armaos ilegales tienen un altu sub rexistru porque les families foron amenazaes y nun denuncien. Usen fines estorsivos o de xusticia revolucionaria” qu’inclúi tortura y en dellos casos termina n’homicidiu y en desapaiación forzada. La ONU rexistró que se pasó de 163 casos en 2024 a 277 en 2025 (245 homes y 32 muyeres).

NARCOTRÁFICU. Les prindes de drogues siguen medrando. El Ministeriu de Defensa comunicó la prinda de 3.275 tonelae de cocaína valoraes en 95.000 millones de dólares ente’l 2022 y el 2026. Pal gobiernu ye la mayor prinda mundial de cocaína porque “Colombia, a pesar de los sos erros y problemes, tien la intelixencia más sofisticada n’alianza con 71 naciones pa prindar, ensin matar a naide.”

Sicasí, el gobiernu de los Estaos Xuníos nun certificó a Colombia (24 set./25) na so llucha contra’l narcotráficu y amenazó con una intervención militar en xineru del 2026.

LOS DIALOGOS DE LA PAZ TOTAL. El conflictu, les sos causes y soluciones foron encetaes en meses de diálogu ente’l gobiernu nacional y los grupos armaos con poques resultancies a vulgar pola espansión territorial, la intensidá y l’impactu d’una confrontación de más de sesenta años que se degrada.

Por orde del presidente Gustavo Petro dende’l 17 de xineru/25 suspendióse la negociación col Exércitu de Lliberación Nacional, ELN. “Lo que cometió l’ELN nel Catatumbo son crímenes de guerra. Suspéndese’l procesu de diálogu con esti grupu. L’ELN nun tien nenguna voluntá de paz.”

La decisión alcontrada según el senador y candidatu presidencial Iván Cepeda, delegáu del Gobiernu nos diálogos- en que “L’ELN ta cometiendo crímenes de guerra na rexón del Catatumbo, asesinando a civiles inermes, líderes sociales y a firmantes de la paz, nuna operación que ta espregando en distintos conceyos del Catatumbo. Énte esta circunstancia, la Delegación de paz del Gobiernu nun puede seguir nos diálogos nesti momentu”.



El gobiernu avanzó nel propósiu de Paz Territorial dende’l 2 de febreru/25 cola Disidencia del ELN Frente Comuñeros del Sur, al apautase cese de les hostilidáes, desmináu humanitariu, non reclutamientu y desvinculación de menores, sustitución de cultivos y busca de persones sumíes.

Les meses de diálogu coles disidencies de les FARC Segunda Marquetalia nunca nun volvió a entamase.

El gobiernu anunció -en xunetu/25- que caltendría diálogos coles disidencies Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacíficu. El 21 d’abril/26 suspendióse xunto coles negociaciones col Estáu Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional Exércitu Bolivariano tres la muerte de trés soldaos y cuatro menores nun ataque con drones en Ipiales, Nariño.

Avance nos diálogos socioxurídicos con bandes criminales de Medellín, Quibdó y Bonaventura y col grupu paramilitar Exércitu Gaitanista de Colombia, EGC.

Pa la ONU ye necesario dexar escamplaes los drechos de les víctimes a la verdá, la xusticia y l'arreglu -pa nun xenerar impunidá nin gabeles pa xefes criminales- nel proyectu de llei presentáu'l 22 de xunetu/255 que busca'l desarme, la desmovilización y la reintegración d'esos grupos y bandes.

NUN HAI PAZ TERRITORIAL. Les llibertaes fundamentales de les persones y l'autonomía de les organizaciones sociales de les rexones sometíes a estratexes de control polos grupos armaos, tán llindaes poles presiones a les comunidaes y les amenaces a la dirixencia que disienta o denuncie violaciones del DIH y de los drechos humanos.

La instrumentalización de les comunidaes por actores armaos pa la minería ilegal pon en riesgu la vida nos territorios, aumenta la violencia y debilita la organización comuña. Amás, la contaminación de los ríos afecta directamente la salú, el sustentu y la vida cotidiana de les comunidaes. Los grupos armaos ilegales responsables de graves violaciones del DIH son les disidencies de les FARC conocíes como Estáu Mayor Central, EMC, Estáu Mayor de Bloques y Frentes, EMBF, Coordinadora Nacional Exércitu Bolivarianu CNEB y la Segunda Marquetalia.

Tamién recibimos denuncies contra l'Exércitu de Lliberación Nacional, ELN, los grupos paramilitares Cla del Golfu - Exércitu Gaitanista de Colombia, EGC, y los Conquistadores de La Sierra Nevada - Los Pachencia.

En rexones visitaes pola Delegación Asturiana nos departamentos del Cauca, Valle, Norte de Santander Meta y Guaviare, hai comunidaes sometíes al control armáu y a los enfrentamientos ente les disidencies Tao Mayor de Bloques y Frentes EMBF y l'Estáu Mayor Central EMC, el ELN y la Cla del Golfu-AGC. A pesar de los esfuerzos del gobiernu nacional por apangar les consecuencias de la esguilada del conflictu nos territorios visitaos hai un claru retrocesu na garantía de drechos humanos básicos.

Hai medrana de qu'ente la toma de posesión d'un nuevu gobiernu n'agostu/26 prodúzase desplazamientos masivos nel Guaviare y la Meta.



MASACRES. Mientres l'añu 2025 rexistráronse 87 masacres -asesinatu n'una acción de trés o más persones- que dexaron 174 víctimes.

Según INDEPAZI Ente'l 2016 y el 2026 rexistráronse 733 masacres en 295 conceyos que dexaron 2.676 persones asesinaes. Les masacres - l'asesinatu de trés o más persones n'un mesmu fechu- tán asocediendo tamién en zones urbanes como'l barriu Talaya de la localidá de Bosa/Bogotá, na que fueron asesinaes trés muyeres el 24 de marzu/26.

La Oficina OCHA de la ONU en Colombia informó -en marzu/26- que l'añu pasáu van aumentar les afectaciones humanitaries del conflictu con más de 155.000 persones confinaes y 96.400 movíos, afectando especialmente a comunidaes étniques y siguen creciendo les restricciones al accesu humanitariu.

Amás de les families afectaes pol conflictu

armáu tán abargana d'un millón de persones más, afectaes polos desastres ambientales.

Rexístrase una medría de los ataques de los grupos armaos con armes de fueu, drones y esplosivos contra la fuerza públicu en rexones del Cauca, Huila, Guaviare, Norte de Santander, Valle del Cauca -incluyida la ciudá de Cali y n'otres ciudaes y territorios afectando tamién a la población civil.

Mientras el plan pistola” executáu per bandes criminales fueron asesinaos n'Antioquia y na rexón Caribe 173 integrantes de la fuerza públicu y 675 fueron mancaos.

La práctica de retener a miembros de la fuerza públicu por parte de persones civiles mientras se desenvuelven operativos militares, foi señalada pol Ministeriu de Defensa como una reacción primida polos grupos armaos ilegales en rexones del Guaviare, Cauca, Valle, Huila y Putumayo.

Rexistráronse violaciones al DIH por guerrilles y paramilitares nes qu'ocuparon escueles, amenaciaron profesoraú y executaron hostigamientos dende centros escolares, en delles ocasiones tando en clases. Les denuncies provienen del Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y Sierra Nevada de Santa Martha. Los pueblos indíxenes nasa y murui enfrenten el reclutamentu de los sos menores dientro de les aules.

ESQUEMES DE GOBERNANZA ARMADA ILLEGAL NOS TERRITORIOS

La población civil colombiana sigue siendo afectada pola degradación y espansión del conflictu armáu por grupos armaos ilegales y bandes que s'aproven de dineru cola estorsión, el tráficu de drogues, la minería ilegal y baltamientu de selves.

Crez el número de persones afectaes pola esguilada



del conflictu ente grupos armaos, grupos paramilitares y bandes delincuenciales, toes engarraes de la mesma cola fuerza públicu: confinamientos, reclutamentu de menores, amenaces individuales y colectives, masacres, captura o rotura de les organizaciones sociales de base, bombardeos, ataques contra la población civil y l'asesinatu asistemáticu de la dirixencia social qu'aguanta, enfrenta y denuncia los atropellos.

La Defensoría del Pueblu (boletín Voces qu'Aguanten, set./25) sollertó del control social sobro la población por parte d'actores armaos non estatales por aciu “esquemes de gobernanza armada ilegal” qu'inclúin la imposición de normes, multes, castigos físicos, estorsiones, reclutamentu, esclavitú sexual, toques de queda, asistencia obligatoria a citaciones y xuntes de control, como asocede nel ríu San Juan (Topetó), rexones d'El Guaviare como La Torna y los Montes de María.

LA POLÍTICA DE DEFENSA, SEGURANZA Y CONVIVENCIA CIUDADANA NUN LLEGA A LES REXON

Según los informes del Ministeriu de Defensa mientres el gobiernu de Gustavo Petro, sacantes el delitu de Trata de Persones que baxó de 591 casos nel 2023 a 251 nel 2025, los demás indicadores siguen a l'alza, reflexando la crisis de los drechos humanos: l'homicidiu intencional pasó de 13.636 casos nel 2022 a 14.038 casos nel 2025.

El Secuestro pasó de 313 casos nel 2024 a 701 casos nel 2025; les masacres pasaron de 87 casos con 302 víctimes nel 2024 a 90 casos con 315 víctimes nel 2025; la estorsión: pasó de 13.082 casos nel 2024 a 13.417 casos nel 2025.1 Según los datos del Ministeriu de Defensa les acciones de terrorismu doblar mientres la Paz Total, al pasar de 742 casos al entamu del gobiernu Petro nel 2022 a 1.398 casos nel 2025. Esta cifra reflexa un escalamiento del conflictu que correspuende a la so expansión sobro los territorios.

La revisión de la doctrina operativa de la policía xuntu coles instrucciones del gobiernu de respetar la protesta social, la Política de Seguridá, Defensa y Convivencia Ciudadana y la Política de Drechos Humanos y Derechu Internacional Humanitariu, tarién xenerando cambeos nel tratamientu a la población civil movilizada. Amnistía Internacional nel so Informe recueye la condena en primer instancia del policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, pol homicidiu de Juan Carlos Llión Acosta mientres les protestes del paru agrariu de 2013 y siguiu pindiu la decisión de casación de la Corte Suprema de Xusticia sobro la condena en dos instancias d'otru integrante del ESMAD pol homicidiu de Nicolás Neira el 1 de mayu de 2005 en Bogotá mientres una manifestación.

La familia de Nicolás siguió denunciando la impunidá evidenciada nel casu, que llevaba venti años ensin resol-



vese por completu. Per tercer añu consecutivu baxen los casos d'homicidios cometíos pola arbitrariedá de la fuerza públicu. La ONU verificó seis casos nel 2025 y revisen ocho casos más, señalando qu'hai una mayor contención de la Fuerza Públicu nel usu de la fuerza nel abordaxe de protestes sociales. Los cambeos obedeceríen a directrices del gobiernu y al apegu a los principios de necesidá y proporcionalidad nel usu de la fuerza. La fiscalía xeneral avanzó na investigación de graves violaciones de los drechos humanos cometíos mientres les protestes sociales ente'l 2018 y el 2022. Llevantó causes penales por 14 homicidios cometíos mientres les protestes del 2021 contra los comandantes de la Policía Metropolitana de Cali y del Grupu d'Operaciones Especiales.

Siguen impunes 113 casos de mancadures oculares cometíos por integrantes de la fuercia públicu mientres la represión de protestes ente'l 2018 y el 2022.

MEDRA'L RECLUTAMIENTU DE MENORES

Xenera esmolición la crecedera del reclutamientu de menores d'edá d'orixe indíxena, afro y llabrador, por grupos armaos y bandes criminales como estratexa de guerra y de control social.

Pa INDEPAZ nel so informe Dinámiques de reclutamiento de NNA en territorios baxo control armáu, “Mientras el reclutamiento crez, la infancia amenórgase”.¹

Les cifres son namás indicatives porque les families eviten denunciar por mieu o porque yá ta normalizáu esti delitu que s’atopa amestáu a otres violaciones graves de los drechos de la reciella, como la violencia sexual, tratar con fines d’esplotación sexual, desapaiciones, privaciones a la vida, violaciones a la integridá física o psicolóxica, desplazamientos forzaos, y vulneraciones del drechu a la salú o educación, castigos corporales y malos tratos, y conocimos testimonios de víctimes que foron obligaes a asesinar a compañeros y compañeres, como lo denuncia Scott Campbell representante en Colombia de la OACNUDH na so nota informativa de xunu 27/25 “Atrapaos nes redes del conflictu: aumentu del reclutamiento de neñes y neños”.²

Aumentu de reclutamiento de menores y la muerte de neños-es reclutaes. La ONU reportó nos primeros seis meses del añu pasáu 17 neños y 13 neñes muertes en situación de reclutamentu nos departamentos de l’Amazones, Arauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Norte de Santander, “incluyendo fallecimientos asocedíos en, siquier, 4 bombardeos realizaos nel marcu d’operaciones militares, nos que finaron 8 neños y 7 neñes.

Les denuncies recibíes nel Guaviare y la Meta por familiares de menores señalen a redes sociales como Meta y Tik Tok, utilizaes polos grupos armaos, los paramilitares y les bandes criminales pa reclutar menores espublizando una cultura que promueve la violencia y les ventayes económicques.

El reclutamentu de menores –a pesar del subreexistru– va n’aumentu ente’l 2022 y el 2024 llegando a 474 casos según la ONU, más 51 nel primer semestre del 2025, pasando de 600 los casos nos postreros cuatro años.

La Convención sobro los Drechos del Neñu de 2000 pro-



hibe’l reclutamentu de menores polos grupos armaos ilegales y l’Estatutu de Roma de la Corte Penal Internacional califica como crímenes de guerra’l reclutamentu o allistamentu de menores de 15 años y el so usu na loxística o nes hostilidáes, faciendo responsable al reclutador d’usar a la rapazada como escudu humanu.

13 de payares/25 nun bombardéu de la Fuerza Aéreo contra les disidencies de les FARC Tao Mayor Central, EMC, en zona rural de La Torna nel Guaviare, finaron 7 menores.

Frente a los fechos abrióse una polémica. La ONU espresó el so esmolecimientu pol fallecimientu de 3 neños y 4 neñes “en desenvolvimientu de les hostilidáes contra un oxetivu militar lexítimu en Guaviare. “Los siete neños finaos son víctimes de reclutamentu por parte d’un grupu armáu ilegal”⁴.

El presidente Petro xustificó’l bombardéu como una acción necesaria pa protexer con fines públicos: “a cencielles, pola rellación numbérica podría resultar mal facer un movimientu envolvente, pol númberu de persones, y terminar los soldaos zarraos sol fueu. Y decidí que primero que llegara a esi puntu, se bombardeara el llugar. D’ende’l bombardéu siempre tien un riesgu.”⁵

El ministru de Defensa afirmó que “quien s’arreyta nes hostilidáes pierde toa protecció, ensin distinció dalguna. Recordemos que lo que mata nun ye la edá, ye l’arma en sí”.⁶



La Defensoría del Pueblu indicó que les Fuerces Militares tienen el deber d'adoptar tolos precuros pa protexer a los menores d'edá entá naquellos casos nos que son obligaos a participar nos conflictos porque los neños, neñes y adolescentes “caltienen una protección reforzada derivada de los principios d'humanidá, precuru, necesidá militar puramente llindada, según del interés cimeru de la reciella”.⁷

En Pereira recibimos denuncias d'operaciones de llimpieza social” contra moces de los barrios populares.

LGBTIQ+ UN COLECTIVU DISCRIMINÁU Y PERSEGUÍU

Anque s'avanza en política y socialmente na reconocencia de los drechos de les persones del colectivu LGBTIQ+, persiste la discriminación llaboral y nel accesu a salú y educación públiques y los ataques con un patrón de violencia que dexó 43 persones del colectivu asesinaes mientras el 2025, ente que nel 2024 fueron 164 según Caribe Afirmativu.

Recibiéronse denuncias del aumentu de los delitos

d'odiu contra'l colectivu LGBTIQ+ por parte de grupos armaos en ciudades como Medellín, Cúcuta, Cali, Bogotá.

LA PERSISTENTE VIOLENCIA CONTRA LES MUYESRES Y LES NEÑES

Recibiéronse denuncias de reclutamientu de muyeres pa fines d'esclavitú o trata con fines d'esplotación sexual.

Hai quexes de colectivos de muyeres contra la Unidá Nacional de Protección, UNP, por discriminales en rrellación cola protección que reciben homes na mesma situación de peligru, col argumentu de que'l riesgu d'elles nun provien del so lideralgu social

Les muyeres enfrenten barreres d'accesu a la xusticia en casos de violencia sexual y de xéneru pola estigmatización y por estereotipos étnicos y de xéneru imperantes. Son revictimizaes pol burocratismu y pola falta d'acompañamientu.

Les muyeres qu'aporten a los sistemas de protección oficial pol riesgu que tienen al exercer el lideralgu nes

Los grupos armados, denuncian la falta de dispositivos abundantes de seguridad en comparación con los compañeros hombres. Estos dispositivos no integran las necesidades de conciliación de las mujeres líderes.

Los grupos armados y los paramilitares siguen ejerciendo violencia de género, violaciones sexuales, explotación sexual y embarazos forzados al acortar el uso de anticonceptivos. Niegan el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Sancionar a empiezos del 2025 la ley que dexa el divorcio con la voluntad de uno de los cónyuges.

Persiste la violencia contra las mujeres. L'Observatori Colombiano de Femicidios rexistró 609 femicidios entre xineru y setiembre y pidió aplicar más y mejores medidas para erradicarlas.¹

Colombia no desancionó la mutilación genital femenina. Cursa un proyecto de ley para erradicarla.² El 56% de las víctimas son niñas entre los 0 y 5 años de edad. Hai identificados 86 casos en población afrodescendiente. Según l'Instituto Nacional de Salud hai rexistrados 216 casos desde el 2020, la mayoría en comunidades indígenas de Risaralda, Topetó, Antioquia, Cauca, Quindío y Bogotá.³

Las mujeres y las niñas de los pueblos indígenas wiwas, arhuacas, jiw y nukak, las comunidades afro y las mujeres migrantes vienen siendo víctimas de violencia y explotación sexual en regiones de frontera como Arauca, Nariño, Norte de Santander, la Sierra Nevada de Santa Fe y en el Valle del Cauca.

También se ta atacando a mujeres acusadas de tener vences afeutivos con miembros de grupos rivales.

Rexistráronse casos de reclutamiento de niñas en espacios comunales manipuladas con promesas de protección, dinero o económicas, derivando en control, aislamiento y traslado forzados a zonas so domi-



niado armado. Una vez reclutadas, enfrentaron coerción sexual y xeres de cuidado o lógicas impuestas.

Grupos armados y bandas criminales xeneralizaron la extorsión afectando a pequeños empresarios y a personas que tán en situación de pobreza.

Medra'l desplazamientu forzáu: el desplazamientu forzáu y masivu medró un 85% en relación con 2024, al ritmo de la expansión y de la esguilada del conflicto. L'enfrentamientu por más d'un año ente'l ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC causó una crisis humanitaria en el Catatumbo y el desplazamientu forzáu de casi cien mil personas na frontera con Venezuela.

También se rexistraron desplazamientos forzados en Topetó, Nariño, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Caquetá y el Sur de Bolívar.

AVANCES EN DRECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El gobiernu ta fortaleciendo l'Estáu Social de Derecho con mejores nequidad y en derechos económicos, sociales, culturales y territoriales.

Colombia presenta una economía que creció'l 2,6% nel 2025 escalonada pola diversificación industrial escontra la superación de la dependencia mineru-energética, la reforma llaboral y la reactivación de la reforma agraria cola entrega de tierras al campesinado qu'abastez alimentos frescos y algamadizos.

Hai un amenorgamientu de la probeza monetaria pola medría acumulada del 42% del salariu mínimos postreros trés años, los subsidios a adultos mayores y el control de la inflación que baxó del 16% al 5%.

Les reformes pa la redistribución del ingresu y de la tierra tán xenerando crecedera de la demanda interna, amenorgamientu del desemplegu hasta'l 8,8% -el más baxu en venti años-.

CRÍTICA SITUACIÓN NES CÁRCELES

Les cárceles colombianes son “depósitos de persones” según un presu políticu recluyíu na cárcel La Tramacúa de Valledupar. Dende va trés décadas la Corte Constitucional calificó como un estáu de coses inconstitucional” la violación masiva y sistemática de los drechos de les persones privaes de la llibertá. Asina lo espresó nes Sentencies T-388/13, T-762/15, LA SO-122/22.

Más de 105 mil persones quitaes de la llibertá son, amás, depositaes en condiciones deplorables d'amon-tonamientu, malos tratos, dificultaes d'accesu a asistencia sanitaria, escasez y mala traza de los alimentos, dificultaes d'accesu a la xusticia y a la familia, torgues para redimir pena con trabayu o estudiu, falta d'agua y de condiciones mínimes de salobridá.

Nel casu de la cárcel de Cúcuta súmase que les muyeres enfrenten condiciones más restrictives, como segregación, espacios amenorgaos pa elles y los sos fíos, un



régime de mayor seguridá que llinda'l so tiempu fora de la celda, l'accesu a comunicaciones y frecuencia de les visites.

Na cárcel de Palmira recibíéronse denuncies d'hacinamientu (hasta 25 presos en llugares nos que tendría d'haber 8), mala atención médica, hai casos de tuberculosis y d'otres enfermedaes ensin tratar. Abusu de los analxésicos para safar remisiones a centros especializaos.

La Delegación conoció'l casu de Mauricio Tierradentro, ensin xuiciu dende fai más de cuatro años, quien amás denuncia l'asesinatu de dellos de los sos compañeros (presos pol españíu social”) a la salida de prisión.

En Palmira y Cúcuta miembros del ELN espresen la so voluntá de retomar los diálogos de paz y, nesta postrera, apurrieron un comunicáu n'ese sentíu.

En Villavicencio, repórtense graves defectos sanitarios, como'l casu de DIEGO VARGAS BETANCOURT, ensin tratamientu fayadizu. Al igual qu'en restu de penitenciaríes los presos políticos de les disidencies de les FARC tamién manifiesten disposición al diálogu.

A pesar de l'amnistía y del indultu contemplaos nel Alcuertu de Paz siguen en prisión excombatientes de les FARC como FRANK FERNÁNDEZ, condergáu a 35

años de cárcel de los cuales lleva 20 en prisión, MOISÉS QUINTERO condergáu a 51 años de los cuales pasó 12 recluyú, OSCAR FABIAN POLANÍA ARIAS, condergáu a 60 años de los que lleva 12 en prisión.

Otros presos nun apaecen nos llistaos de combatientes qu'apurrieron les FARC y siguen presos ensin que s'iguara la omisión por parte de les autoridaes y del Altu Comisionáu de Paz.

SIMÓN TRINIDAD, PRESU POLÍTICU NOS ESTAOS XUNÍOS

JUVENAL PALMERA PINEDA conocíu como SIMÓN TRINIDAD, foi integrante del Estáu Mayor del Bloque Caribe de les FARC, deteníu en Quito-Ecuador el 2 de xineru del 2004 cuando diba axuntase con un delegáu de la ONU y estraditáu el 31 d'avientu del 2004 pol gobiernu d'Álvaro Uribe Vélez a los Estaos Xuníos pol secuestro de trés ciudadanos estadounidenses nel 2003, fechos que nun acometió.

Yera dirixente del partíu d'esquierda Unión Patriótica ya incorporóse a les FARC fuxendo del esterminiu contra esi movimientu ente 1985 y 1987. Ye firmante del Alcuertu de Paz del 2016.

Dende fai 20 años ta quitáu de la llibertá incomunicáu, nuna celda so tierra y siempre cola lluz encendió, ensin accesu a llectures y ensin la posibilidá d'escribir na prisión de máxima seguridá de USP FLORENCE ADMAX, en Florence, Estáu de Coloráu, Estaos Xuníos.

Simón Trinidad foi estraditáu pol delitu supuestu de tráficu de drogues, acusación falsa que nun se prebó, pero foi condergáu a 60 años de cárcel per combalechadura pa tomar de rehenes, por cuenta de que el 13 de febreru del 2003 trés mercenarios estadounidenses -contratistes

de la empresa Northrop Grumman- cayeron a la selva colombiana accidentándose l'avioneta del Departamentu de Defensa de los EUA cuando faíen llabores d'intelixencia nel marcu del Plan Colombia.

Simón Trinidad nun participó nin tuvo responsabilidá na captura de los ciudadanos estadounidenses, Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes, quienes tuvieron en poder de les FARC más de cinco años, hasta la so lliberación cola Operación Xaque del exércitu nacional el 2 de xunetu del 2008.



Los delitos que se-y imputaron a Simón Trinidad en Colombia y los únicos que prebó la xusticia de los Estaos Xuníos, tienen el calter de delitos políticos.

Asina lo reconoció la Sala d'Amnistía o Indultu de la Xurisdicción Especial pa la Paz que-y concedió amnistía de iure pol delitu de rebelión el 21 de xunu del 2024, con base na estinción de l'acción penal a la lluz del Alcuertu Final de Paz suscritu ente'l Gobiernu Nacional y les FARC-EP el 24 de payares de 2016, nel que se determinó l'aplicación del artículu 6.5 del Protocolu Adicional II a los Convenios de Xinebra de 1949, según el cual van amnistiase y van indultar delitos políticos y conexos cometíos nel desenvolvimientu de la rebelión poles persones que formen parte de los grupos rebalbos colos cuales róblese un alcuertu de paz".2



Organizaciones colombianas de solidaridá colos presos políticos como Llazos de Dignidá, empecipiaron una campaña pal acompañamientu xurídicu y acciones de solidaridá pola llibertá de Simón Trinidad énte'l gobiernu de los Estaos Xuníos, atendiendo a la so avanzada edá (75 años), al deterioru marcáu del so salú física y mental y a l'amnistía otorgada en Colombia pola xusticia transicional que lo riquir por qu'apurra el so relatu apurriendo a la verdá y a la xusticia.

La xusticia colombiana reconoció que'l delitu de rebelión pol cual foi procesáu ye consideráu como'l delitu políticu por excelencia, al levantase contra'l réxime constitucional y ilegal vixente per mediu de les armes, na busca d'un cambéu del sistema políticu y xurídicu.

El gobiernu del presidente Gustavo Petro pidió al gobiernu de los Estaos Xuníos l'indultu y la lliberación de Simón Trinidad pa cumplir col Alcuertu de Paz y porque apurra en Colombia a la busca de la verdá y a la Paz Total. La Xurisdicción Especial pa la Paz tamién unvió cartes rogatorias al gobiernu estadounidense que nun amuesa voluntá política d'indultalo..

El 29 d'abril/26 la Xurisdicción Especial pa la Paz, JEP, reconoció a SIMON TRINIDAD como víc-

tima del xenocidiu contra la Unión Patriótica.³

AVANCES ENTE LES DIFICULTAES PAL CUMPLIMIENTU DEL ACUERDU DE PAZ

“Si nun hai un fortalecimientu de la implementación del alcuertu de paz, hai un riesgu de qu'estes situaciones deteriorar con más desplazamientu, más confinamientu, más otomías masives y asesinatos de persones defensores de drechos humanos y líderes sociales.” Scott Campbell, representante en Colombia del ACNUD. Bogotá, febreru/26. The Associated Press

La persistencia del conflictu ye una torga p'avanzar nel cumplimientu del Alcuertu de Paz suscritu ente les FARC y l'Estáu va diez años. Les persones firmantes siguen siendo amenaciaes, movíes y asesinaes con impunidá, los proyectos granibles nun tienen redolaes segures.

La Misión de Verificación de les Naciones Xunies en Colombia verificó l'asesinatu de 45 excombatientes de les Fuerces Armaes Revolucionaries de Colombia-Exércitu del Pueblu (FARC-EP) en 2025 (incluyíos 1 muyer, 5 indíxenas y 1 afrodescendiente), ente que en 2024 verificó 33, reparándose un aumentu del 36 %. Dende la firma del Alcuertu de Paz en 2016, fueron asesinaos 486 antiguos integrantes de les FARC-EP.

A diez años del Alcuertu de Paz suscritu coles FARC el gobiernu asignó la mayor inversión presupuestal pal so cumplimientu, enfocada n'inclusión territorial, víctimes y probeza, medría del presupuestu d'educación y cultura y polítiques d'igualdá.²

Les torgues pa mayores meyores, tienen que ver con falta de garantíes pa la vida, la falta de vivienda con eletricidá y agua potable, víes, centros educativos y de salú, que faciliten la reinserción de les persones firmantes de la paz.



LA REACTIVACIÓN DE LA REFORMA AGRARIA CONVENCIONAL

Ye una meyora nel puntu del Alcuertu “Reforma Rural Integral” la reactivación de la reforma agraria convencional con dotación de tierras al campesinado en rexones que sufrieron la violencia armada, predivos provenientes de la compra directa a los propietarios y finques de narcotraficantes a les que s’escastó’l derechu de dominiu, la creación de zones de reserva llabradora, la titulación de baldíos, el saneamientu y l’ampliación de resguardos indíxenes, la creación de zones agroalimentarias...

La Reforma Rural Integral», compromete a un total de diez millones d’hectárees para favorecer la titulación y explotación de tierras d’aquellos enclaves que vivieron con mayor agudez la violencia armada. Amás d’incentivar la inversión de recursos económicos, texíu granible ya infraestructura, arreyar a los conceyos nel desenvolvimientu de midíes polítiques que, de manera eficaz, contribuyan a superar les condiciones de violencia estructural del orde local

La reactivación de la reforma agraria cola disponibilidad de 2,5 millones d’hectárees foi un estímulo pal campesináu ensin tierra, una ferramienta económico pal control de la inflación y una fonte de seguridá alimentaria y de puestos de trabayu, que se refuerca cola compra de 445.770 hectárees y la dotación de tierras a 72.786 families nel 2025, dalgunes so la forma de títulos de propiedá provisional en Antioquia, Cauca, Córdoba, Guaviare, Meta y Nariño.

La entrega al campesináu de tierras en poder de la Sociedá d’Activos Especiales, SAE, provenientes d’estinción del derechu de dominiu per arriquecimientu ilícitu, ye un pasu importante na llucha contra la impunidá estructural, refuerza l’Estáu de Derechu y ye una meyora escontra la equidad.

Dellos pueblos indíxenes tienen conflictos con colonos llabradores pola ocupación de tierras de resguardu, como’l pueblu Nukak que pide detener la invasión del so territoriu nel Guaviare onde hai siquier quince caseríos de colonos y pol que circulen grupos armaos y paramilitares que someten o espulsen a los nativos.

Hai conflictos por tierras ente empresarios, La Fazenda, el grupu relixosu mormón y el pueblu indíxena guahibo en Puerto Carreño, Vichada

La Unidad de Restitución de Tierras avanzó nel 2025 na ruta colectiva de restitución de tierras al campesinado en 15 casos.

La restitución en mediu del conflictu ta siendo afectada por nuevu réfugos de tierras del campesinado que ye revictimizado y por agresiones y amenazas a los funcionarios encargaos de la restitución material.

L'aprobación de la Xurisdicción Agrario y Rural ye una meyora pa resolver conflictos por tierras.

LA XURIDISCCIÓN ESPECIAL DE PAZ PROFIER LES SOS PRIMERES SENTENCIAS

La Xurisdicción Especial de Paz, JEP, escomenció en setiembre/25 a proferir sentencias nos casos de secuestro y execuciones estraxudiciales cometíos dientro del conflictu armáu, y avanza nos casos de reclutamiento de menores y violencia de xéneru.

El primer fallu, condena a siete excomandantes de les Fuerces Armaes Revolucionaries de Colombia – Exércitu del Pueblu (FARC-EP) a cumplir ocho años de sanciones propies pola so responsabilidad reconocida en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidá cometíos mientres la implementación d'una política de secuestros ente 1993 y 2012.

Nel segundu, condena a cinco oficiales, cuatro suboficiales y trés soldaos profesionales del Exércitu Nacional a cumplir ente cinco y ocho años de sanciones propies pola so responsabilidad reconocida en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidá rellacionaos con 135 asesi-

natos y desapaiciones forzaes presentaes como baxes en combate nos departamentos de Cesar y La Guajira ente 2002 y 2005.

Les sos sentencies constitúin una meyora na llucha contra la impunidad porque se basen na reconocencia de la verdá y de la responsabilidad polos autores frente a les víctimes, lo que crea un espaciu restaurativo ensin precedentes nel país.

Nun pronunciamientu la JEP alzó de 6.402 a 7.837 el número de víctimes de “falsos positivos” o civiles executaos pol Exércitu ente 1990 y el 2016 pa presentalos como guerrilleros daos de baxa en combate y recibir pagos.¹

El presidente Petro calificó estes execuciones como “el peor crime contra la humanidá cometíu nes Américas nesti sieglu”.



CUESTIONADA LA UNIDÁ PA L'ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LES VÍCTIMES

En 2025, la Unidá para les Víctimes, UARIV, aprobó 42 planes d'arreglu colectivu, avanzó en 8 y zarró 3, según lo informao por responsables de la UARIV a la Delegación Asturiana.¹

Nes rexones percorríes hai quexes de les víctimes y de les sos organizaciones que se sienten abandonaes, afectaes nos sos drechos individuales y colectivos de xaciu burocratismu y corrupción na UARIV, entidá que reconoz nun executar namá la metá de los dineros destinaos para les víctimes. “El Fondu d’Arreglu dexó ensin xirar en 2025 más de la metá del so presupuestu de COP 324.000 millones, lo que podría retrasar la entrega de recursos para arreglu de víctimes y ensobiar el dineru disponible para’l próximu gobiernu.”

La entidá aliega problemes presupuestales y falta de participación d’otres instituciones, amás de la persistencia del conflictu, lo qu’afecta la meyora del arreglu colectivuu a pueblos indíxenes como’l hitnu de Arauca y a la comunidá de Charres, Guaviare.

DRECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍXENAS

Los pueblos indíxenes y afrodescendientes siguen siendo afectaos de manera grave polos actores del conflictu armáu que imposibilitan los planes de vida colectivos y la vida comuñal autónoma.

La disputa ente los grupos armaos ilegales, los paramilitares y la fuerza públicu xenera un clima d’inseguridá y de medrana pa los pueblos indíxenes, como pasa colos cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Foína (wiwa, kogui, aruhaco, kankuamo); el pueblu barí del Catatumbo, los pueblos makaguán, wayúu, cubeo, curripaco, piapoco, piaroa y guariacana na frontera con Venezuela y Brasil; los embera katío – dóbida – chamí, wounaan, zenú y tule na frontera con Panamá y pueblos del suroccidente como les nasa. Na frontera con Ecuador y Perú los siona, inga, kichwa, kofán, awá, murui, sáliba; pueblos de selva como los nukak, tikuna, yagua, cocama. N’otres rexones hai más pueblos indíxenes afectaos pol conflictu.



El desenvolvimientu del capítulu étnicu del Alcuertu de Paz presenta atrasos nes sos metes. Les resultancies tán llindaos pol asesinatu sistemáticu de la dirixencia indíxena y pola persistencia del conflictu nos territorios. El gobiernu reconoz y propónse avanzar por aciu un Pactu pola implementación del capítulu étnicu”.

Ye una meyora l’alquisición de 94.000 hectárees pa grupos étnicos, la constitución de 123 resguardos indíxenes, l’ampliación de 94 y la titulación de 65 territorios pa comunidaes negres, en beneficiu de 271.000 persones en 136 conceyos. onde

Esmolecen los allegamientos recibíos sobro violaciones de los drechos humanos nel contestu del mercáu de bonos de carbonu, polo que la ONU afala una regulación qu’incluya la responsabilidá de les empreses, la consulta previa, l’astención de daños a los pueblos indíxenes y a les comunidaes afrodescendientes y llabradores y garantizar midíes d’arreglu efectives.

Hai medrana nos pueblos indíxenes y comunidaes afros del Topetó pola presencia d’efectivos de los grupos armaos qu’exercen control sobro la población civil acutando les llibertaes básiques pa someter, controlar les organizaciones sociales y enquistase nes comunidaes pa prindar l’autogobiernu indíxena por aciu amenaces, cooptación ya infiltración.

Esmolez la meyora de la minería, la deforestación y la llantadera de coca en territorios colectivos que xunto col control armáu amenacen la esistencia cultural y física de los Pueblos Indíxenes y les comunidaes afrodescendientes en zones del Topetó y otros rexones del suroccidente y nororiente del país.

Persisten los ataques contra los pueblos indíxenes y la so cultura. El grupu paramilitar Conquistadores de La Sierra incineró en febreru/25 la casa ceremonial del pueblu indíxena Kankuamo nel sitiü Lagunita, correximientu de Ruseco, conceyu de Valledupar. Ye un ataque grave contra una cultura en cantu de la estinción, reconocida como Patrimoniu Inmaterial de la Humanidá.

Hai denuncies de nexos criminales ente los grupos paramilitares en Valledupar, los poderes económicos y políticos locales y miembros de la fuerza público, incluyíos los mandos del Batallón d'Inxenieros señalao d'aprovir armes pa los grupos narcu paramilitares Cla del Golfu y Conquistadores de La Sierra.

SIGUI LA DESAPAICIÓN FORZADA DE PERSONES

La Unidá de Busca de Persones Sumíes, UBPPD, informó qu'hasta marzu del 2026 hai 136.010 casos en contestu de conflictu armáu, de los cualos 36.731 tienen solicitú de busca que s'adelantra en campamentos municipales con equipos especializaos, sofitu de familiares de les víctimes y d'instituciones como Medicina Llegal y la fiscalía.

Siguen les práctiques de control social por aciu les retenciones ilegales y l'usu de la desapaición forzada de persones por guerrilles y paramilitares para atacar a quien consideren adversarios y xenerar terror.

La UBPPD informó qu'ente xineru y setiembre ato-



para a 141 persones con vida, recuperáu 1.161 cuerpos, apurríu 762 al Institutu Nacional de Medicina Llegal y Ciencies Forenses y realizáu 166 actos d'entrega digna de cuerpos y “alcuentros pa la verdá” con familiares.

La UBPPD empeció la busca de restos de persones víctimes de desapaición forzada nel esteru San Antonio —n'agües del océanu Pacíficu—, allugáu na ciudá de Bonaventura y toparon restos nel sector de La Escombrera en Medellín y nes instalaciones del Exércitu Nacional en Bogotá onde operó'l Batallón d'Intelixencia y Contrainteligencia Charry Solanu o Brigada XX.

Ye'l casu de Bonaventura y del baxu Asoria con 32 casos denunciao de desapaición forzada en 2024 y 21 en 2025.

Reconozse l'esfuerzu institucional por prevenir la desapaición forzada, una violación grave y na mayoría de los casos impune.

Magar los esfuerzos del Comité Interinstitucional de Lluha contra la Desapaición Forzada por ameyorar l'accesu a la xusticia, fortalecer la busca y prevenir nuevos casos nesta rexón, persiste la rocea institucional por cuenta de les escasas resultancies na xudicialización.

Esti delitu tien subregistros pola medrana y la revictimización a les families, na so mayoría monoparentales, a denunciar la desapaición de los sos fíos-es.

INCREMENTÉNSE LOS ATAQUES A PERSONES DEFENSORES

“Magar la voluntá política y los esfuerzos del Governu y otros instituciones, nun se revirtieron los altos niveles y el patrones de violencia en contra de les persones defensores de drechos humanos qu’el ACNUDH vien rexistrando dende 2018.” Informe OACNUDH/26

“L’añu con mayor violencia letal contra persones defensores de drechos humanos mientres el gobiernu de Gustavo Petro”. Programa Somos Defensores. Informe Promeses Rotes (14 d’abril/26).“

El gobiernu abrió espacios de diálogu col movimientu social para encetar conflictos, sicasí, personal voceros de les comunidaes nun cunten con un espaciu seguro para defender los drechos humanos.

Persisten patrones de violencia letal contra les persones qu’exercen lideralgu social o defenden los drechos humanos.

A pesar de la reconocencia pol gobiernu de GUSTAVO PETRO de la llexitimidad de defender los drechos humanos, sigue un ciclu de violencia amontada contra les persones defensores que vien dende’l 2018, primer añu d’execución del Alcuertu de paz qu’el gobiernu d’IVÁN DUQUE propúnxose “faer añicos”.

L’Informe d’Amnistía Internacional recueye cuestionamientos al presidente Petro por estigmatizar a les persones defensores de drechos humanos al declarar que les organizaciones de la sociedá civil de la



rexón del Catatumbo taben “subordinaes” a los grupos armaos qu’operaben na zona y el so gobiernu negar a rectificar cuando se-y pidió que se retratará.1

INDEPAZ rexistró l’homicidiu nel 2025 de 187 persones con lideralgu social, llegando a 1.934 persones (87,5% homes) en 427 conceyos ente’l 2016 y el 2026.

La dirigencia social que ta siendo escorrida a muerte nos postreros diez años provien de los sectores comunales (487 persones con lideralgu asesinaes), pueblos indíxenes (370), campesinado (278), líderes políticos (164), comunales (163), sindicalistes (101), LGBTI (35), víctimes (27), mineros (22) y reclamantes de tierres (17).

Nel mesmu ralu la ONU Drechos Humanos documentó 972 homicidios de persones defensores de drechos humanos (112 muyeres, 843 homes y 17 persones LGTBI+3)2.

Énte la persistencia de los ataques contra la dirigencia social, el Programa Asturianu d’Atención a Víctimes de la Violencia’l gobiernu asturianu reforzó esta acción de solidaridá política pal 2026 acoyendo a siete per-

sones que la so vida ya integridá cuerren peligru pol so defensa de los drechos humanos y de los bienes comunes.

Con estes persones el Programa Asturianu llega a 159 persones de la dirigen-
cia social colombiana acoyíes en ventiséis años:

BEATRIZ CH. M., llideresa y defensora de Drechos Humanos. Ye integrante del Movimientu Nacional de Víctimes de Crímenes d'Estáu, Movice Capítulu Cauca, del Colectivu de Muyeres Tescendiendo pola Paz y del Movimientu de Madres Buscadores. Exerz el so llabor en conceyos baxu conflictu armáu internu. Participa na solución pacífica de conflictos y defende los DDHH de les muyeres y grupos étnicos del territoriu, lidera procesos de prevención de reclutamiento forzáu de neñes, neños nuevos y adolescentes. Por cuenta del so llabor sufrió amenaces, retenciones ilegales y un atentáu n'avientu del 2025.



FABIO MARRIAGA, ambientalista, defensor de los drechos humanos, educador, poeta y tallerista de lliteratura y tradición oral en zones so conflictu armáu nel Cauca. Ye integrante de l'Asociación Rexonal d'Usuarios Llabradores del Suroccidente Colombianu, ARUC. Foi amenaciáu, movíu y reteníu nos retenes móviles por grupos armaos ilegales nel so territoriu.

JUAN CASTRO NOREÑA, inxenieru industrial, defensor de los drechos humanos, exerz lideralgu social como secretariu de salú de ASOJUNTAS, Asociación de Xuntes d'Acción Comunal de Tuluá-Valle, n'una zona rural sol control de los grupos paramilitares y de les Disidencies de les FARC que lo hostigan, amenacen y estorsionen.

LIZETH, educadora comuñal, defensora de los drechos humanos en Cartaxena d'Indies, integrante de CONTESTOS, Colectivu Comuñal Antirracista, acompañante de víctimes de la violencia policial racista. Ta recibiendo hostigamientos, estorsiones y amenaces de muerte agravaes tres l'asesinatu de los sos dos fíos, HAROLD nel 2020 y JOSÉ DAVID l'año pasáu. Les amenaces provienen de grupos armaos al marxe de la llei que s'espanden polos barrios marxinales.

ALFREDO, ye integrante del Comité de Solidaridá con presos Políticos CSPP Santander, líder llabrador y comunal. En nome de la so comunidá opúnxose a la minería d'oru a cielu abiertu nel so territoriu, polo que recibió amenaces y declaráu oxetivu de los narcu paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, grupu que-y apuesta al ELN el control de la Serranía de San Lucas. Otres persones de la mesma rexón opuestas a la minería del oru a cielu abiertu con maquinaria pesada fueron asesinaes. .

ANGELITO, ye defensora de los drechos humanos, lideresa social, educadora popular y ambiental, xestora cultural, trabaya n'economía popular, güertes comuñales y como maestra d'Artes Plástiques y Humanidaes. Ye representante de la Fundación Manoyano y de l'Asocia-

ción Mutualista Xisqua. Les sos actividaes empobinar al trabayu comuña cola población vulnerable de la localidá de Ponte Aranda, Bogotá D.C. Vien recibiendo amenaces de la banda criminal Tren de Aragua con omisión de la policía local, situación que la llevó a movese de manera forzada.

ERIKA CUELLAR SALCEDO, ye lideresa xuvenil llabrador, ambientalista, defensora de los drechos humanos, integrante de l'Asociación Municipal Llabradora de Trabajadores—ye de Piamonte Cauca, ASIMTRACAMPIC. Participa en campañes xuveniles polos drechos humanos, el mediu ambiente, la economía llabrador y contra el reclutamiento forzáu. Recibió amenaces colectives de les disidencies de les FARC y d'otros grupos al marxe de la llei. El 13 de xineru/26 el coche de protección nel que se movilizaba foi atacáu con cinco disparos d'arma de fueu.

A finales del 2025 recibéronse siete amenacies de muerte contra integrantes del Comité Permanente pola Defensa de los Drechos Humanos, CPHD Capítulu Norte de Santander, como YOHAN MANUEL VELÁZQUEZ, dirixente xuvenil y defensor de los drechos humanos. El grupu paramilitar AGC amenació a trece dirixentes ente elles l'abogada del CPDH ELIANA ZAFRA AGUDELO y a los lideralgos de dieciséis organizaciones sociales más. Tamién recibieron amenaces a nome del Frente 33 de les disidencies de les FARC – EMB, quien coinciden colos paramilitares en torgar la defensa de los drechos humanos, en callar les denuncies de les víctimes que señalen aliances criminales ente les élites locales y l'orde de destierru con plazu d'un día o asesinen a quien integren y dirixen el CPDH nesa rexón de la frontera con Venezuela.

Los integrantes del Pactu Históricu nel Norte de Santander denunciaron amenaces de muerte del grupu paramilitar AGC nes qu'alverten “tener allugaos... tien 48 horas... vamos peles sos cabezas...” y agresiones nel conceyu de Los Patios.

El Sistema d'Información del Programa Somos Defensores verificó 165 asesinatos y 874 agresiones contra per-



sones defensores de drechos humanos nel 2025. Afirma nel so Informe Promeses Rotes (abril/26) que foi “L'añu con mayor violencia letal contra persones defensores de drechos humanos mientres el gobiernu de Gustavo Petro”.

Cuestiona que la Oficina del Altu Comisionado pa la Paz nun escuchara les alvertencies de la sociedá civil sobre la crisis humanitaria en munches rexones pol remanar de los grupos armaos y bandes delincuenciales contra la dirigencia y el texíu social, cayendo nes práctiques llamentables d'anteriores gobiernos que tampoco dieron la importancia que merecen estos espacios, que'l so reconocencia real tien de tescender a la convocatoria, creación y financiamientu de los mesmos... A la lluz d'estos fechos repitimos que l'actual gobiernu nacional nun priorizó la reconocencia y la protección de quien defenden los drechos humanos en Colombia.”²

La dirigencia indíxena sigue siendo atacada. L'Asociación De Cabildros, Autoridaes Tradicionales Indíxenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule del Departamentu del Topetó.

La Orewa denunció'l 10 de marzu/26 la desapaición y l'asesinatu del gobernador indíxena Eutimio Valencia Duave, autoridá de la comunidá indíxena Altu Tarena. Ye un crime empobináu a destruir la resistencia indíxena que protexe la selva del Darién na frontera con Panamá.

Los grupos armaos ilegales y los paramilitares son los principales agresores según les denuncies.

2-. SITUACION DE LOS DRECHOS HUMANOS NES REXONES VISITAES

“Hai que caltener el silenciu pa ser quien a caltense na tierra y con vida”. (Testimoniu de'un llabrador en Puerto Esperanza, Alto Ariari-Meta)

NORTE DE SANTANDER. Dende va un añu tol departamentu ta afectáu pola espansión y la degradación del conflictu armáu internu, afectando la población de la frontera colombo-venezolana.

Les organizaciones sociales del Norte de Santander siguen esixendo garantíes para'l so llabor. Ente que la mesma institucionalidad pública nun puede funcionar en rexones del Catatumbo.

Miembros de la candidatura del Pactu Históricu nel Norte de Santander recibieron vía SMS amenaces de muerte por parte de les AGC y atópense desamparaos institucionalmente.

Firmantes de paz fueron movíos de Cañu Indiu a la finca El Pital y atópense en viviendes provisionales precaries, ensin accesu a agua potable —lo que xenera problemes de salú, especialmente na infancia— nin accesu fayadizu a educación, evidenciando l'incumplimientu de les garantíes para la so reincorporación.



Destácase la falta de reconocencia como víctimes del conflictu a delles persones de la comunidá de Juan Fríu a pesar de ser testigos de masacres y familiares directos de víctimes, y sufrir la presencia paramilitar mientres más de 15 años.

CAUCA: El departamentu del Cauca sigue siendo una de les rexones con más violaciones graves de los drechos humanos y del DIH. El deterioru de los drechos humanos y la crisis humanitaria son consecuencia de la medría de la violencia armada que produz desplazamientos forzaos, confinamientos, amenaces, asesinatos de persones de la dirigencia social, reclutamiento de menores, usu d'esplosivos en zones d'usu civil, desapaiciones forzaes, estorsiones, imposibilidad d'axuntase ensin autorización de los grupos armaos y -en delles rexones del nororienterestricciones d'ingresu a los territorios sol control de les Disidencies EMC - FARC para les misiones humanitarias de la ONU, la Defensoría del Pueblu y la Misión de Verificación del Alcuertu de Paz de la ONU y de la MAP-OEA.

Les organizaciones sociales reporten que mientres el 2025 nel Cauca fueron asesinaes 38 persones con lideralgu social, 5 firmantes del Alcuertu de Paz asesinaos, 623 muertes violentes (64 muyeres), hubo 7 masacres, 72 enfrentamientos ente disidencies de les FARC y l'Exércitu, 35 ente grupos armaos, más de cien ataques contra la Policía y 30 contra l'Exércitu, 68 ataques con drones, 70 ataques con esplosivos y 54 ataques contra civiles, amás de 54 secuestros.

Les organizaciones sociales señalen que l'aumentu de violencia respunde a la espansión del ELN y de les disidencies de les FARC Tao Mayor Central, la Segunda Marquetalia y a les sos divisiones internes con una creciente militarización del territoriu.

Hai denuncies por restricciones al exerciciu de los derechos y llibertaes sindicales, amenaces contra la dirigencia sindical y contra 110 docentes, muchos obligaos a treslladase.

Les denuncies inclúin concentración de la propiedá de la tierra en grandes terratenientes y empreses, espansión de proyectos mineros y desigualdaes nel accesu a la tierra. Los cultivos de coca y mariguana tán venceyaos a la probeza y la falta d'alternatives económicques.

Recibimos denuncies d'un aumentu del reclutamiento de menores que reciben ufiertes de dineru, teléfonos o motocicletes. Denunciar estos fechos puede provocar represalies contra les families.

Colectivos de memoria histórica denuncien dificultaes na identificación y entrega digna de cuerpos de persones sumíos. Les organizaciones de muyeres buscadores indiquen que 32 cuerpos fueron recuperaos nel 2025.

El 25 d'abril de 2026 na vía Panamericana na zona rural de Cajibío, el grupu armáu "Bloque Occidental del EMC" españó esplosivos, produciendo l'asesinatu de 22 per-

sones y dexando mancaes a otros 30, toes elles civiles, indíxenes, afros y llabradores, no que se considera una esguilada antemanada p'afectar el tiempu electoral.



VALLE DEL CAUCA. El departamentu tien dellos frentes de conflictu qu'afecten población urbana y rural.

Les organizaciones sindicales del Valle denunciaron abusos na contratación temporal de trabayadores, dalgunos lleven 15 años como trabayadores de ETT con contratos temporales, por obra y serviciu, polítiques anti sindicales n'empreses locales y en transnacionales qu'imponen desventaxes llaborales a trabayadores sindicalizados nos inxenios azucreros, l'asesinatu de dos sindicalistes del sector, setenta families movíes, amenaces d'atentáu y secuestros, hostigamiento en puestos de trabayu y viviendes por homes armaos con fusiles de los grupos al marxe de la llei.

Sinaltrainal denuncia persecución sindical por retirada de beneficios y setenta despidos nun mes,

acusaciones de adoctrinamiento y de terrorismo, hostigamiento a los trabajadores y vigilancia por cámaras, presión patronal por que se acueyan a planes de retiro voluntario para amenorgar plantía.

Los sindicatos del sector bancario reciben presiones sindicales, vulneración de derechos sindicales, zarru de sucursales, creación de la figura de corresponsales bancarios destrucción de puestos de trabayu y racismo nel ámbitu llaboral.

La corrupción nel ámbitu sanitariu xenera vulneración de derechos de los trabajadores qu'afecta a los pacientes. Despidos inxustificaos ya inestabilidad, retirada de funciones.

CALI. Los sindicatos de distintos sectores denuncien un contestu xeneralizáu de persecución contra'l llabor sindical, incluyendo violencia contra líderes y lideresas, desplazamientos forzaos y graves afectaciones a derechos básicos.

Cali conecta colos puertos del Pacíficu y según l'Alerta de la Defensoría del Pueblu del 26 sept./25, convirtióse en teatru d'operaciones que xeneren riesgu para les comunidaes urbanu y rural per parte de la guerrilla d'el ELN, les disidencies de les FARC, l'Exércitu Gaitanista de Colombia (EGC); bandes criminales como los Shottas y Espartanos (nel puertu de Bonaventura), La Oficina y La Inmaculada (en Tuluá), Lokos Yam, Los Zetas y RPS (en Quibdó); amás de los carteos transnacionales de Sinaloa y Jalisco Nueva Xeneración, el Tren de Aragua, mafies italianes y albaneses, y grupos ecuatorianos (Llobos, Choneros y Tiguerones).

L'Alerta proxecta un escenariu de violencia urbana en Cali considerando la fragilidad de los pactos de non confrontación ente grupos armaos y bandes criminales.

GUAVIARE

Les comunidaes llabradoras tán sometíes a frecuentes confinamientos y cansaes de mal vivir -más de



mediu sieglu- en mediu del conflictu armáu y de les actuales disputes pol control social y territorial ente les disidencies de les FARC d'Iván Lozada "Mordigañu" y alies Calarcá Córdoba, el grupu paramilitar Renacer ERPAC y la fuercia público, xenerando medrana na población y presión sobro les organizaciones sociales, empuestes a perder la so autonomía.

Les comunidaes llabradoras de la Meta y del Guaviare tarrecen qu'una previsible esquilada de los enfrentamientos vuelva xenerar desplazamientos forzaos nel sur del Guaviare y en rexones del Altu Ariari como Puerto Esperanza. Pola so vocación de permanencia nel territoriu esixen inversión público n'infraestructures, caminos, pontes, escoles, centros de salú, espacios culturales, y anque hai quexes nel sentíu de que les meses de participación nun resuelven los problemes o nun se convoquen con regularidá, esixen la reactivación de les meses de diálogu colos lideralgos, incluyíos los del ríu Inírída y la puesta en marcha la xurisdicción agraria pa resolver los conflictos per tierres.

Hai mieu ente la población y la percepción de que primero que tome posesión el nuevu gobiernu, nel Guaviare va haber una situación entá más crítica de los Drechos Humanos.

Hai denuncies de que l'exércitu nacional solo atacaba al grupu de alías Iván Lozada “Mordigañu” y non al de Calarcá. Similares denuncies en sentíu contrariu recibimos en rexones de la Meta.

El campesinado arrincó los plantíos de coca, pero volvió semala por falta de sofitu integral pa sustituyir los cultivos.

La zona de reserva llabrador de la Guaviare se traslapa con territorios del pueblu indíxena nukak makú lo que ta xenerando tensiones.

Recibimos denuncies de que mientres les elecciones del 8 de marzu/26 hubo alzada, caciplo de persones y de votos p'acopar la curul de les víctimes nel Guaviare que foi ganada por ALEJANDRO CASTILLO GAITÁN, lo qu'esplicaría en parte'l que la metá de la representación de les víctimes nel Congresu nes elecciones de marzu/26 fueren cooptadas poles cles políticos.

META: la población en zones del departamentu de la Meta ta afectada pol conflictu ente les disidencies de les FARC y la fuercia públicu. La dirigencia social tien mieu d'exercer la representación comuñal pol riesgu de ser escorrida y les comunidaes nuevamente movíes.

Depués de la visita asturiana al Altu Ariari, el 17 de marzu/26, les disidencies EMC de les FARC emitieron un comunicáu nel qu'acuten nos territorios que controlen l'accesu a misiones humanitarias de la ONU y de la OEA, según a la Defensoría del Pueblu.

Son previsibles los efectos nocivos sobro la población civil d'esti aislamientu forzáu del monitoreo y de la observación de los drechos humanos en mediu del conflictu.



En Puerto Esperanza les organizaciones de la rexón del Altu Ariari tán sometíes al peligrosu de la confrontación armada na so rexón y al riesgu que suponen pa les directives de les xuntes d'acción comunal y pa la población polo xeneral un recrudescimientu de la violencia y un nuevu desplazamientu masivu.

Nesta como n'otres rexones de Los Llanos, la ciudadanía tien mieu de denunciar y d'exercer los sos drechos.

Na xunta sostenida pola Delegación Asturiana col alcalde d'El Castillo, Meta, Daimer Otálora, l'alministración municipal esplicó les dificultaes d'orde públicu qu'hai na zona y l'esfuerzu que l'alministración municipal fai por llevar infraestructura ya inversión a los territorios estensos del conceyu. L'alcalde quexar de que'l gobiernu retayó los recursos d'inversión y nun facilita la interlocución col presidente del gobiernu.

El conceyu del Castillo ye un territoriu militarizado cola presencia de más de 800 efectivos del exércitu nacional, más los efectivos del cuerpu téunicu d'investigación

de la fiscalía y la Policía Nacional. L'alcalde considera que ye necesaria más pie de fuerza y más inversión.

La delegación asturiana recibió informaciones según les cualos presentáronse nuevos casos de detenciones, tortures y execuciones estraxudiciales cometies por miembros de la fuerza público, Brigada Móvil y Fuerza de Xera Omega del exércitu nacional.

Recibimos denuncies qu'indiquen que l'exércitu nacional executaría extraxudicialmente al ciudadanu **NED DAVID VALENCIA RODRÍGUEZ** na zona rural del conceyu de Vistahermosa (Meta).

La defensora de Drechos Humanos, **CARMEN MAYUSA PRADA**, escoyida como representante a la cámara pol Departamentu de la Meta, denunció tar recibiendo amenaces dende'l día previu a les eleccionnes (7 de marzu/26).

PEREIRA. Les organizaciones sociales de la rexón cafetera denuncien amenaces a maestros, sindicalistes, dirigenzia llabradoru ya indíxenu y senadores del Pactu Históricu.

Hai denuncies por infracciones al DIH por parte del ELN y violaciones graves de los drechos humanos pol grupu EGC que cuntaría cola actitú omisiva del exercitu para mover población de territorios estratéxicos para la minería.

Risaralda tien un millón d'habitantes de los que 134 mil son víctimes del conflictu (el 56% muyeres).

Les organizaciones sociales consideren necesaries midies preventives pol riesgu de disputa territorial ente'l ELN y 13 estructures paramilitares en Caldas y son escéptiques pola perda de control de los conceyos, lo que xenera de resultes al curtiu plazu l'afitamientu, al mediu plazu la estabilización y al llargu plazu la normalización de formes de gobernanza criminal.

La presencia d'homos armaos y motorizados poniendo retenes ya interviniendo na cotidianidá, nos mercaos locales afecta l'autonomía personal y la vida comunal.

Hai alarma na ciudá de Cartago-Valle pola desapaiación de 11 persones ente xineru y febreru d'anguaño. A finales del 2023 sumió la pareya de moces Isis Sánchez Restrepo y Jean Pool Hernández quien siguen sumíos.

BOGOTÁ D.C. Les organizaciones sociales de la ciudá capital alvierten d'un esmolecedor deterioru nes condiciones para l'exerciciu de los drechos fundamentales sobremanera no que fai a la población más moza.

Constátase una medría sostenida de los procesos de estigmatización escontra esti sector, quien son crecientemente oxetu de discursos de criminalización que los venceyen con dinámiques d'inseguridá. Esti enclín vieno acompañáu d'una progresiva restricción y desarticulación de los espa-



cios lexítimos de participación, organización y reivindicación social y política, llindando de manera significativa la so capacidá d'incidencia y debilitando el texú democrático.

Coles mesmes, reparar que les polítiques locales de seguridá, caracterizaes pola participación d'empreses privaes integraes en gran medida por personal proveniente de fuerces militares y estructures desmovilizadas, contribuyeron a un deterioru adicional de la situación de drechos humanos.

CONCLUSIONES

Colombia avanza en calidá democrática construyendo Estáu Social de Drechu con polítiques de equidad, inclusión, redistribución de la tierra y del ingresu, que cunten con ampliu respaldu social.

Mientras nel 2025 creció la economía, xubió la tasa d'emplegu, amontóse'l salariu mínimu, controlóse la inflación, se redistribuyeron tierres al campesinado qu'abasteció la demanda interna d'alimentos y amontóse la inversión n'educación, salú ya infraestructures.

Adelántrase una política de combate al narcotráficu que les sos cifres faen de Colombia'l país del mundu con mayores prindes de drogues, estradiciones de narcotraficantes escontra Estaos Xuníos ya intervenciones sobro les propiedaes de la mafia.

A pesar de les meyores en drechos sociales y de la bon resultancia económica, el conflictu armáu internu apinóse y esparcióse a rexones que tán en disputa ente los grupos armaos ilegales (ELN), grupos de disidencies de les FARC y grupos paramilitares enfrentaos pol control d'árees de minería y de territorios onde se cultiva, procesase y distribúyese cocaína, mariguana y se trafica con armes y persones.

La política de Paz Total qu'incluyó meses de diálogu y ceses al fueu, nun llogra detener l'asesinatu de la dirixen-



cia social, nin les violaciones graves de los drechos humanos y del DIH contra pueblos indíxenes, comunidaes afrodescendientes, el campesinado y comunidaes urbanes que tán sol control de bandes delincuenciales.

Nos territorios en disputa y nos que s'impunxo una gobernanza ilegal, cuerre peligru l'autonomía y l'esistencia de les organizaciones representativas de les comunidaes como les xuntes d'acción comunal, los sindicatos llabradores, les autoridaes indíxenes y negres.

El texú asociativo de los territorios foi convertíu nun oxetivu a controlar por aciu la violencia pa usar la población civil como escudu y para lexitimase amosando un sofitu comuñal consiguíu por aciu la coacción o la cooptación.

Como lo previeron les comunidaes rurales mientras la visita asturiana en marzu/26, el conflictu armáu internu esguila en díes previos a les elecciones presidenciales. Los ataques de les disidencies de les FARC nel suroccidente contra la población civil xeneren un ambiente de medrana que sirve a sectores políticos gustantes a afondar la confrontación interna.

La degradación y fragmentación del conflictu foi desdibuxando les llínees ideolóxiques y les formes de vanceyamientu cola población civil qu'estremaben a les guerrilles de los grupos paramilitares. En delles

árees hai cuatro o más conflictos en cursu ente grupos armaos con población civil metanes la confrontación.

Les comunidaes visitaes pola Delegación Asturiana denunciaron la situación estrema a la que los someten los actores armaos, confinamientos, estorsiones, amenazas, asesinatos selectivos, reclutamiento de menores, violencia contra les muyeres, mináu d'árees d'usu de la población civil, desapaición a la fuerzia de persones, desplazamientos masivos, restricciones a les llibertaes básiques con imposición de la llei del silenciu.

A pesar de los ataques el movimientu social sigue movilizándose, esixendo paz y reformes estructurales y reivindicando la soberanía nacional énte les violaciones del derechu internacional que comete'l gobiernu d'Estaos Xuníos na área del Caribe.

ENCAMENTAMIENTOS

AL GOBIERNU DE COLOMBIA:

Amontar la presencia del Estáu con inversión social y desenvolvimientu sostenible nes rexones so conflictu armáu.

Fortalecer l'autonomía de les autoridaes y organizaciones territoriales llabradoras, indíxenes y afros, y protexer de manera efectiva la vida de la dirixencia social y de les persones firmantes del Alcuertu de Paz coles FARC.

Caltener les canales de diálogu colos actores armaos ilegales, apautar ceses al fueu billateral y alcuerdos humanitarios escontra la paz territorial partiendo de les prioridaes que presenten les organizaciones sociales nos escenarios de diálogu de cada rexón.

Afondar la sustitución de cultivos d'usu ilícitu por proyectos granibles con sofitu del Estáu, alcordaos coles



comunidaes y organizaciones que defienden el territoriu.

Avanzar nel cumplimientu del Alcuertu de Paz afondando la reforma agraria con entrega y restitución de tierres al campesináu y construyir una institucionalidá pública de sofitu a la economía llabrador.

Reformar la encomienda pública sustituyendo la doctrina del enemigu internu por un enfoque con drechos humanos.

Siguir coles reformes estructurales en materia de drechos de propiedá sobro les tierres, reforma política y de la doctrina cola que se forma a encomalo públicamente.

Avanzar nel cumplimientu de los drechos de les persones privaes de llibertá, garantizando que reciban alimentación fayadizo y calidable, garantícese'l so accesu a la salú y tómenses midíes p'acabar col hacinamiento, amás del cumplimientu de los drechos de les infancias preses y la sustitución de penes a les madres

pa evitar la separación de los menores de 3 años.

Implementar polítiques d'igualdá tresversales qu'eviten la revictimización de les muyeres víctimes, prevean el reclutamientu, la esclavitú sexual y tratar nel senu del conflictu armáu y la detección de les violencies específiques que sufren les muyeres.

Apurrir a la mocedá mecanismos pal desenvolvimientu d'una vida plena protexía y al marxe de los grupos armaos por aciu la educación como ferramienta de prevención del reclutamientu.

AL GOBIERNU D'ESPAÑA Y A LA UNIÓN EUROPEA

Amontar la cooperación para la sustitución de cultivos d'usu ilícitu en Colombia.

Sofitar la reconstrucción del texíu social – organizativu nos territorios afectaos pol conflictu armáu.

Ayudar a superar les torgues pa la paz como pidió'l Intergrupu del Congresu Español pola paz de Colombia.

Promover y fortalecer los programes de protección para persones defensores de los drechos humanos y ambientalistas en riesgu.

Concretar mecanismos de sofitu mutuú ente los gobiernos d'España y d'Asturies col gobiernu propiu de los pueblos indíxenes p'avanzar nel cumplimientu de los oxetivos de l'Axenda 2030.

UN RELLATU Y UNA CARTA DEL VIAXE

Viaxe solidariu a los centros del conflictu en Colombia.
(David Sánchez PIÑEIRO, Asamblea Moza d'Asturies, AMA.



Una crónica sociopolítica de lo que vio, sintió y deprenvió un integrante de la 22ª delegación asturiana de verificación de paz y drechos humanos.

Nel contestu de la guerra d'Iraq, periodistes estadounidenses viaxaben a cubrir el conflictu empotraos n'uniões del exércitu gringo. La nuesa esperiencia nun tien enforma que ver con aquella, pos nin somos periodistes nin partimos escontra una guerra, pero tuvimos quince díes percorriendo'l territoriu colombianu "empotradores" n'una delegación ciudadana de paz y drechos humanos.

Etapa 1. Bogotá.

El día ta borrosu y el centru de Bogotá preséntase col so caos y el so bulliciu característicos. Nos puestos caleyeros rúlfense frutes tropicales y camisetes de la selección. Homes nuevos pasien llapaes blanques ufiertando a los turistas fotografiase con elles y paisanes xueguen al axedrez en meses de plásticu en plena cai. La nuesa delegación empecipia'l so percorríu a pocos metros del llugar onde asesinaron al candidatu lliberal y socialista Jorge Eliécer Gaitán en 1948. El so magniciu, que dio llugar a un españú popular conocíu como'l "Bogotazo", ye un acontecimientu decisivu na violenta hestoria de la Colom-

bia contemporanea. N'una de les esquines de la carrera séptima, barganal de la plaza de Bolívar, el Movimientu Nacional de Víctimes de Crímenes d'Estáu (MOVICE) asitió per tola acera, semeyes de gran tamañu coles cares de persones asesinaes y sumíes. Al llau, na carpa onde se pronuncien los discursos conmemorativos, sobresal un póster de Manuel Cepeda, senador de la Unión Patriótica asesinau en 1994 y padre d'Iván Cepeda, actual candidatu del Pactu Históricu a la presidencia de Colombia.

El 8 de marzu festexen elecciones lexislatives en Colombia y la nuesa delegación ta citada enantes de l'amanecida na sede de la Misión d'Observación Electoral (MOE). Dende ellí esplegamos en distintos minibuses pelos distintos barrios de la ciudá (San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Bosa) pa tar presentes nos colexos antes de l'apertura de les urnes. Les resultancies finales de la xornada dibuxen un Senáu y una Cámara de Representantes nos que'l Pactu Hestóricu aumenta la so representación y consolídase como la fuercia político más votada, pero ensin ser capaz de consiguir una mayoría en nengún de los dos órganos lexislativos. La esistencia d'una mayoría parlamentaria contraria a los intereses del poder executivu foi precisamente la mayor torga col que s'atopó l'actual gobiernu de Gustavo Petro a la d'implementar les sos principales reformes.

Etapa 2. Cauca, Valle del Cauca, Risaralda.

La delegación abandona la capital y estrémase en dos grupos: unu más pequenu a mover pelos departamentos de la Meta y el Guaviare, mentantu qu'otru más numberosu viaxa escontra'l Cauca, nel sur del país. Na nuesa primer xunta, en Santander de Quilichao, tenemos un alcuentru fugaz con dos de les siete persones que van viaxar llueu a la nuesa tierra para ser acoyíes mediu añu nel Programa Asturianu d'Atención a Víctimes de la Violencia en Colombia (PAV). Ye una iniciativa pionera a nivel español y européu, que nos sos 26 años d'esistencia dio llar a 159 persones amenaciaes

de muerte pol so activismu social o polos sos llabores en defensa de los drechos humanos. Nin el programa nin la delegación añal sostendríense mientres tantu tiempu de nun ser pol aportunante compromisu solidariu de l'asociación xixonesa Soldepaz Pachakuti. Dos de los principales artifi-



ces d'esta xesta internacionalista son Javier Orozco y Javier Arjona, a quien el nuesu colega Pablo Batalla dedicó dos entrevistes biográfiques en Nortes que dan testimoniu de la so dignidá humana y del so grandor político y moral.

Nesta xunta en Santander de Quilichao sentimos por primer vegada una denuncia que se va a repitir como una lletanía en casi tolos llugares que vamos visitar dempués: ta produciéndose una medría alarmante del reclutamientu mozu por parte de los grupos armaos. En munchos casos ye un reclutamiento forzáu, pero tamién se reparan “vinculaciones voluntaries”, contra les que ye inda más difícil lluchar. Amás de los incentivos económicos, “empuñar una arma xenera poder y respetu”. Los grupos armaos modernizaron los sos mecanismos de captación y agora tamién recurren a redes sociales como Tik Tok o Facebook y a los videoxuegos. Un líder afrodescendiente esplicanos que les persones que

nutren les files de los grupos armaos “nun vienen de Marte nin de Xúpiter, son d'equí, los nuegos hermanos y primos”. La realidá d'un sistema patriarcal y machista”, amás, fai que munches moxes y muyeres nueves sían reclutaes polos



grupos armaos con fines d'esclavitú o explotación sexual.

La viniente etapa del nuesu percorríu escontra'l norte ye'l predio El Tablón, nel conceyu de Corinto. Hasta ellí escóltanos la guardia llabradorá, un cuerpu autoorganizado pa garantizar la seguridá de les comunidaes que, a diferencia de la guardia indíxena, nun cunta con reconocencia xurídica per parte del Estáu colombianu. El predio ocupa una estensión de 247 hectárees y pertenecía hasta apocayá a terratenientes estranxeros que lo teníen semi-abandonáu, pero l'esfotu de llabradors ensin tierra y la intervención del gobiernu de Petro, nel marcu de la so reforma agraria, consiguieron que nesti casu particular, la tierra pertenezca a quien la trabaya. Sicasí, los llabradors d'El Tablón denuncien hostigamientos permanentes del exercitu, dexando claro que non toles cañes del Estáu colombianu cooperen coles directrices polítiques del gobiernu.

Siguimos xubiendo y enfusamos nel departamentu del

Valle del Cauca. En Palmira atopamos con Walter, del Comité de Solidaridá colos Presos Políticos (CSPP), que mos facilita una visita a una penitenciaria de media alta seguridá. Una vegada pasaos los controles protocolarios, apaex énte nós el patiu interior de la cárcel y un campu de fútbol de yerba ñatural descomanadamente estrechu. Cruciamos les puertes del centru al empar qu'un grupu de 14 presos nuevos que tán ingresando en prisión, esposados en pareyes poles muñeca. Nel interior, caltenemos una llarga xunta con Mauricio Tierradentro, un home priváu de llibertá y a la espera de xuiiciu mientres cuatro años por participar nel españú social de 2021 contra'l gobiernu d'Iván Duque. Mauricio cúntanos que, amás de les decenes de muertes provocaes pola represión policial mientres les protestes, dellos compañeros fueron sistemáticamente asesinaos al salir de la cárcel.

Nun segundu momentu incorporar a la xunta un grupu de presos del Exércitu de Lliberación Nacional (ELN), que denuncien les males condiciones de la cárcel, apor-tunen nel so apueste pola paz y refuguen con vehemencia les acusaciones de connivencia ente la guerrilla y el narcotráficu salíes de la boca de Petro. “El narcotráficu ye un cáncer, lo peor pa la sociedá”. Enantes de despidinos recuerden el nome de Manuel Pérez Martínez, un cura español siguidor de la Teoloxía de la Lliberación qu'aportó a comandante en xefe del ELN a finales de los setenta. Tamién espresen la so alegría pola recién identificación de los restos de Camilo Torres, sacerdote guerrilleru y mártir que'l so cuerpu llevaba más de seis décadas sumíu.

Nesta etapa del viaxe acompañanos Nahuel González, mozu diputáu valencianu de Esquerra Xunida nel Congresu. Nahuel foi unu de los miembros de la delegación asturiana de 2024, cuando se “namoró de Colombia y entendió la complexidá de la situación de violencia política que se vive equí”. Esta vegada viaxó al país convidáu pol Conseyu Nacional Electoral (CNE) pa realizar xeres



d'observación internacional nes elecciones lexislatives. Al ser preguntáu pola so valoración del actual gobiernu del cambéu, la so respuesta ye contundente: “Petro camudó la hestoria de Llatinoamérica. Fai 15 años mirábamos a Colombia como un país gobernáu pola estrema derecha y con presidentes bien autoritarios”. Agora, sicasí, ye “una esperanza y un referente frente a la puxanza de la estrema derecha mundial”. Mientras charramos al atapecer nun parque so la catedral de Palmira, Nahuel tamién destaca qu'en cada llugar que visitamos topamos con persones, principalmente muyeres, “que lleven tola vida engarrando pola dignidá de los sos pueblos”.

Pereira, la capital del departamentu de Risaralda, recuerda por momentos a un país del sudeste asiáticu, poles sos selves urbanes, la guapura de los sos atapeceres y la proliferación desafranada de motocicletes. La nuesa rutina en cada llocalidá a la que vamos ye abondo similar y consiste en caltener llargues xuntes con colectivos llocales (sindicatos, organizaciones de drechos humanos, asociaciones llabradores, indíxenes, afrodescendientes o de muyeres),

escuchar atentamente les sos hestories personales —travesaes davezu por niveles de violencia humanamente difíciles de soportar— y tomar nota de les sos demandes pa treslladales dempués a les instituciones colombianes y espublizales al traviés de la comunidá internacional. En Pereira, amás, tenemos la oportunidá d'entrevistanos en priváu con dos muyeres —bien distintes ente sí— que los sos testimonios resúltenos especialmente interesantes.

La primera ye María Teresa Henao, militante feminista y polos drechos humanos. Dellos años atrás esta muyer apaeció nunes carpetes secretas del exércitu como un peligru pa la seguridá nacional. María Teresa ye una antigua integrante de les Fuerces Armaes Revolucionaries de Colombia (FARC), onde puntualiza que nunca tuvo na estructura armada nin llegó a remanar un arma. Agora fai parte de Comunes. Nes elecciones lexislatives de 2018 y 2022, dichu partíu consiguió diez “curules” (escaños), otorgaes directamente polos alcuerdos de paz de 2016 coles mires de facilitar la integración de la guerrilla na vida institucional del país. Sicasí, nes elecciones de 2026 dicha clausa espiró y Comunes acaba de quedase ensin representación. María Teresa reconoz que—yos foi pésimu”, pero coles mesmes allégrase de les bones resultancies d'una fuerza progresista como'l Pactu Históricu. En relación col conflictu armáu, treslládanos la posición del so partíu: “nesti país nun hai otra salida que la llegalización de les plantes d'usu ilícitu como la mariguana y la coca”.

Ángela Andrea García ye una moza de Manizales que coordina l'Observatoriu de Conflictividá, Paz ya Innovación Social del Oriente Caldense. Cuando estudiaba Trabayu Social vivió un episodiu que marcó la so trayectoria vital. Nuna asignatura tocó—y lleer un informe de 2014 del Centru Nacional de Memoria Histórica nel que se narraben “los distintos repertorios de violencia y fechos victimizantes que tuvieron llugar nel marcu del conflictu armáu nacional”. Mientras lo lleía, Andrea lloraba y devolv-

vía. “Casi muerro. Yo sabía qu’esti país taba en guerra, pero al traviés de la pantalla. Crecí nel centru del país y la guerra foi fundamentalmente nes periferies”. Esi día adquirió inconscientemente un compromisu pedagóxicu y militante. Dende un puntu de vista históricu, rellata que cada vez que se dieron procesos de paz, lo que siguió foi un esterminiu de los desmovilizados: pasó cola Unión Patriótica (con más de 7.000 miembros del partíu asesinaos a finales de los ochenta y principios de los noventa), pasó col M-19 y ta pasando coles FARC (dende 2016 fueron asesinaos casi 500 firmantes de paz). Andrea ye bien crítica colos grupos guerrilleros que siguen operando en Colombia: “la insurxencia tenía una filosofía, unos convencimientos, unes banderes absolutamente clares como la redistribución de la tierra. Anguaño tamos falando de paramilitares y narcotraficantes”. Tamién espresa’l so pesimismu frente al panorama d’anguaño: “tenemos un problema de seguridá incontrollable a lo llargo y anchu del país, hai una perda absoluta del control por parte del Estáu”.

- Nesti escenariu, ¿qué supondría una victoria de la mandrecha nes elecciones presidenciales?
- La llegada otra vuelta de la violencia absoluta escontra tol mundu. Ellos nun faen distinciones [ente guerrilleros y líderes sociales]. Tol que tea nel so contra ye un revolucionariu peligrosu. Nos gobiernos de Uribe buscóse la seguridá a cuenta de sacrificar los drechos humanos.

Etapa 3. Norte de Santander.

Dende’l sur del país la nuesa metá de la delegación viaxa al Norte de Santander, a la ciudá de Cúcuta. Acabantes d’aterrizar treslladámonos directos a la cárcel, estremera con Venezuela, p’axuntanos con otru grupu de presos del ELN y, nesta ocasión, tamién con una presa, proveniente de la cárcel de muyeres. El so nome ye Sonia Escribán. Lleva 19 años presa y tien una conderga de 45. A pesar de la so trayectoria como guerrillera confiésanos qu’ella “ye mala



pa la política”. Quexar de la discriminación que sufren les muyeres al respective de los homes nos sos respectivos centros penitenciarios: menos tiempu pa visites, horarios más acutaos pa faer llamaes telefóniques, cites xinecolóxicos virtuales y dispersión de les preses del ELN en distintos módulos, cuando los homes conviven toos xuntos nel mesmu espaciu. Tamién nos rellata’l dolor que sufren les preses colos sos fíos yá ñacíos na cárcel y al momentu de cumplir los trés años son-yos por fuerza arrebatados. Los presos apúrrennos un documentu políticu empobináu a les instituciones colombianes y treslládenos el so enfotu en que la posible llegada d’Iván Cepeda a la presidencia dexa reactivar les meses de negociación de paz col ELN, que na actualidá tán temporalmente suspendíes. Nueses guíes nesta visita fueron Adriana Lizarazo, una muyer del CSPP que tuvo acoyida n’Asturies porque la diben a asesinar en Colombia, y la so fía Carolina Sandoval, que siguiendo les buelgues de so madre va ser acoyida temporalmente por un programa de la Universidá de Burgos.

Mientras esti viaxe conocemos a numberoses persones comunes que tán protexíes por esquemes de seguridá del

Estáu, qu'inclúin davezu un touterrén blindáu, un guardaespaldas y un xilecu antibales. Son integrantes del Comité Permanente pola Defensa de los Drechos Humanos (CPDH), sindicalistes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) o mozos militantes del Partíu Comunista. Un compañeru de la delegación destaca'l llamativu contraste ente quien dispón de vehículos blindaos n'España (ministros del gobiernu o altos cargos del Estáu) y quien lo fai en Colombia (ciudadanos corrientes, muyeres activistes, trabajadores probes). Según datos de la Unidá Nacional de Protección (UNP), a mediaos de 2025 más de 13.000 persones taben protexíes en Colombia por esquemes de seguridad. L'añu anterior les solicitúes xubieren hasta casi 51.000.

N'unu de los pocos momentos nos que la nuesa frenética axenda d'alcuentros dexa tomar un respiru y caltener delles conversaciones informales, sentámonos a comer con un grupu de muyeres de Banderes Xuníes, con quienes caltuvimos una xunta previa na so sede del barriu de San Miguel. Munches d'elles son venezolanes o tienen la doble nacionalidá y denuncien que “la problemática de la frontera ye de nunca acabar”. La so asociación realiza un importante trabayu comuñal, enfocáu especialmente en muyeres víctimes de violencia. Mientres la sobremesa, una muyer que nun utiliza'l so nome real por mieu a represalies remembra un episodiu traumáticu de la so vida. Cuando yera adolescente foi prindada pol ELN nel Catatumbo, violada al pie de otres moces y recibió un tiru na pierna. Consiguió escapase mientres un enfrentamientu de la guerrilla colos paramilitares, pero'l so calvariu nun terminó aína, les amenaces sobro ella y la so familia obligaron al so fíu a solicitar asilu políticu n'Alemaña. “Nunca me va dir el dolor”.

El Catatumbo, al norte de Cúcuta, ye una de les zones más calientes de Colombia. Nesta rexón selvática, rica en recursos ñaturales y con estensos plantíos de fueya de coca, prodúzse dende xineru de 2025 un enfrentamientu armáu ente'l ELN y el Frente 33, una de les disi-



dencias de les FARC que nun s'acoyó a los alcuerdos de paz. Como resultancia, alreduro d'un centenar de persones foron asesinaes y casi 100.000 foron movíes de la zona. Ente estes postreres, un grupu de 71 firmantes de paz de les FARC al pie de les sos families, que moraben en Caño Indio y tuvieron que ser reasitiaos por fuercia nun campamentu pela redolada de Cúcuta, atarraquitaos n'habitáculos prefabricaos y ensin accesu permanente a agua potable. El so voceru, Willy, antiguu comandante de les FARC mientres 28 años, cúntanos que los vecinos de la zona refugaron primeramente la so presencia y que pa ellos “tou ye un sufrimientu”. A pesar de los carecimientos, nun se penen del so apueste pola paz y ratifiquen que

“por mediu de les armes nun hai nengún tipu de solución”. Mientras aguarden a que l’Estáu ameyore les sos condiciones y constrúya-yos un llugar de residencia permanente, sobreviven entamaos nuna cooperativa que cría pites, gochos y hasta dellos búfalos. Énte la llombada electoral del so partíu, Comunes, Willy tamién espresa’l so deséu de que s’encadene un gobiernu de Petro con otru de Cepeda.

Na ciudá de Cúcuta axuntamos con integrantes del Pactu Históricu del Norte de Santander. L’ambiente na sala ye más bien aveséu, a pesar de la recién victoria electoral del so partíu nes lexislatives y de les perspectives optimistes de cara a les presidenciales. La razón ye que toles persones presentes, candidates electorales incluyíes, recibieron amenaces de muerte nos sos teléfonos privaos, vía SMS, por parte de les Autodefenses Gaitanistes de Colombia (AGC), tamién conocíes como Cla del Golfu. Nel mensaxe que mos amuesen pue lleese “tenémosvos identificaos, tenéis 48 horas, vamos a poles sos cabeces muertes”. El desconsuelu vese agraváu polo qu’interpreten como un abandonu por parte del Estáu, lideráu pol mesmu partíu políticu al qu’ellos representen. Tamién señalen lo difícil que ye faer política nuna rexón tan conservadora y corrupta y denuncien la “indolencia” y l’insolidaridá del gobiernu frente a les graves amenaces qu’acaben de recibir.

El nuesu últimu alcuentru antes de tornar a Bogotá tien llugar nuna pequeña finca familiar pela redolada de Cúcuta. Dellos perros xueguen ente les nueses piernes y en plena xunta desamárrase un fuerte bastíu que mos obliga a alzar el tonu de voz pa poder escuchanos bien. Tamos colos habitantes de Juan Frío, un suxetu d’arreglu colectivuu. La voz cantante llevar Dina, una muyer qu’alterna les sos intervenciones na xunta col cuidu del so fíu pequenu y la vixilancia d’una gran pota na que prepara la xinta para unes quince persones. Esta foi una zona apoderada mientras muncho tiempu por grupos paramilitares. Unu de los legaos más traumáticos d’aquella dómina



foi poder contemplar colos nuesos propios güeyos nuna zona de monte cercana a la finca. Ellí, xusto delante del ríu Táchira, que marca la frontera con Venezuela, siguen de pies los restos de los fornos que los paramilitares utilizaben para incinerar les cadarmes de les persones qu’asesinaben. Un vecín fai comparanza col Holocaustu, aunque puntualiza que nos campos de concentración nazis esistía un historial de los xudíos qu’ingresaben nellos. Equí, en cambéu, “nun había nengún tipu de rexistru escritu”. A día de güei el destín de munches persones sumíes sigui siendo un misteriu pa los sos familiares. Otra vecina asegúranos que dalguna xente d’esta zona “inda piensa que les hortolices tán regaes con muertos”.

Etapu 4. Bogotá.

Los dos grupos de la delegación realcontramos en Bogotá

pa tresllada-yos a les instituciones polítiques les demandes que recoyimos nel nuesu percorríu por seis departamentos del país. De primeres, recibir l'embaxador d'España en Bogotá, Santiago Jiménez, que mos define a Colombia como ún de los sos destinos más complicaos, magar que trabayó en Siria mientres la guerra. España, al traviés de la so embaxada, collabora col gobiernu colombianu en dos procesos de paz con grupos armaos: el ELN y l'Exércitu Gaitanista de Colombia (EGC). Esti postreru arreyta al grupu qu'amenació a los miembros del Pactu Históricu colos qu'axuntamos en Cúcuta. Jiménez resume los llabores de la embaxada española en Bogotá cola fórmula "paz, paz, paz y feminismu". Sicasi, sorraya la contradicción que supon que nun país con una institucionalidad tan importante y tantos organismos dedicaos a la defensa de los derechos humanos nun se consiga detener la hemorragia permanente de víctimes. 187 defensores de derechos humanos fueron asesinaos l'año pasáu, so un gobiernu progresista. En Colombia hai rexistraes como víctimes alrededor de 9 millones de persones, d'una población total cercana a los 54. Esto ye, 1 de cada 6. La recién inclusión de Colombia na llista de países seguros de la Unión Europea non se condice colos altos niveles de violencia que persisten nel país.

Siguimos cola nuesa ronda de xuntes nes respectives Direcciones Xenerales de Derechos Humanos de los ministerios del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores, na Unidá para l'Atención y Arreglu Integral a les Víctimes (UARIV) y nes oficinas de la ONU en Colombia. En delles d'estes instituciones atopamos con un fechu sobresaliente: muyeres y homes nuevos que fueron acoyíos n'años anteriores pol programa asturianu d'atención a víctimes, por atopase amenaciaos y amenaciaes de muerte, agora axúntense cola nuesa delegación en calidá de representantes políticos de les instituciones colombianes. Un interlocutor decláranos qu'ellos siguen considerándose "pueblu entamáu, pero dientro del Estáu".

Asturies tamién foi territoriu d'acoyida para Aída Quilcué, la candidata del Pactu Históricu a la vicepresidencia de Colombia. La vida d'esta líder indíxena del pueblo nasa ta fundamente travesada pola violencia, como la de tantos compatriotes sos. N'avientu de 2008, Quilcué acababa de tornar de realizar una denuncia sobro la situación de los pueblos indíxenes nel Conseyu de Derechos Humanos de la ONU, con see en Suiza. El so maríu, Edwin Legarda, foi asesináu pol exércitu mientres se dirixía a recoyela. Tou indica qu'ella yera l'oxetivu real del ataque. Poco dempués, foi convidada pol gobiernu asturianu pa participar nun "alcuentru de cosmovisión y resistencia indíxenes" n'Uviéu. Anguaño, Aída Quilcué desempeñase como senadora pola circunscripción especial indíxena, lo que nun torgar qu'a principios de febreru fuera víctima d'un secuestro exprés por parte d'una disidencia de les FARC nel Cauca. Nuna xunta nun pequenu despachu del Senáu, dos de los sos asesores más cercanos resalten el so calter dialogante y la so capacidá pa tender pontes con un llinguaxe d'unidá de



país que tesciende a los movimientos d'esquierdes. Nun tien problemes pa sentase a aldericar colos antagonicos”.

Como exemplu supremu menten lo qu'asocedió en 2018. Nel resguardu indíxena de Monterilla y énte más de dos mil integrantes del pueblu nasa, Aída Quilcué recibió al viceministro de Defensa y a un xeneral del exércitu que veníen esculpase en nome del Estáu colombianu, obligaos por una sentencia xudicial, pol asinatu del so home. La líder indíxena aceptó'l so perdón y abrazó al viceministru, pero oportuno en denunciar la impunidá de el autores intelectuales del homicidiu. Nuna entrevista posterior, añadió: “nun podemos dexar que nos sigan asinando por pensar distintu, por vivir nun país diversu como ye Colombia. Nós entendemos que la ideoloxía de munchos ye distinta a la de nós y respetar, pero tamién queremos que respeten la nuesa identidá, cultura y forma de ser indíxena”.

Cristian Acosta Olaya ye autor del llibru *Un dique n'agües aturbolinaes. Identidaes polítiques, populismu y violencia na Colombia de Jorge Eliécer Gaitán, 1928–1948*. Esti mozu polítologu colombianu, investigador nel CONICET arxentín, esbillanos delles claves sobre l'actualidá política del so país. De primeres, señala que los alcuerdos de paz de 2016, polos que la guerrilla de les FARC dexó d'esistir como una suerte de “alteridad nacional”, fixeron posible la esistencia d'un gobiernu progresista en Colombia. El presidente Petro “entró en 2022 con un respaldu bien xeneralizáu de la sociedá”, pero esi escesu d'optimismu” foise “morigerando” a partir d'una serie de reveses parlamentarios. El so gobiernu tuvo enfrente “al poder lexislativu, a los medios de comunicación, a los empresarios y a los dueños d'un país, Colombia, que ta ente los trés o cuatro más desiguales del mundu”. A pesar d'ello, consiguió “una estabilidá macroeconómica que bien poques vegaes ver nel país” y una puxanza inusitado del consumu”. Sobre la estratexa petrista de “paz total”, Acosta Olaya enfatiza la dificultá que supón “axustar con tolos actores armaos

coles mesmes”, incluyendo non solamente a lo que na xiriga académica conozse como Grupos Armaos Entamaos (GAO), sinón tamién a Grupos Delincuenciales Entamaos (GDO). Les sos prospectives electorales traslucen un pesimismu qu'oldea col optimismu xeneralizáu que percibimos mientras tol viaxe. La so primer razón ye que la suxetividá colombiana sigue demasiao trescalada poles idees neoliberales. “Tenemos una cosmovisión política bien de dereches”. La so segunda razón tien que ver col lideralgu de Cepeda. Valóra-y como un tipu rellumante y formadísimu, con una hestoria personal desgarradora” y que “punxo contra les cuerdes a un líder que paecía intocable como Uribe”, pero-y achacar tamién un ciertu déficit d'ambición política. A Cepeda tarién faltándo-y, nun sentíu weberiano, ganas de “meter la mano na rueda de la hestoria”.



Un día dempués del alcuentru casual de parte de la delegación precisamente con Iván Cepeda nel Senáu, el nuesu últimu actu antes de tornar a España consiste n'ufiertar una rueda de prensa de conclusiones preliminares na see de la Organización Nacional Indíxena de Colombia (ONIC). Primeramente, axuntamos col so Conseyu Mayor. La ONIC representa a 82 de los 115 pueblos indíxenes de Colombia, que cunten con un sistema de gobiernu propiu, estructu-

rado xeográficamente en cinco macrorregiones. El 30% del territoriu nacional colombianu ta habitáu por indíxenes, anque solamente sían alredu del 6% de la población. La Constitución colombiana de 1991 reconoz los sos drechos fundamentales y tamién les sos funciones xurisdiccionales especiales. El conseyeru mayor, Roselino Guarupe Joropa, plantéganos que “nun ye abundu con avanzar no xurídico, sinón que tamién hai que faelo en garantíes económiques y presupuestaries”, anque para ello faiga falta “tocar los intereses de los grandes poderes del país”. Cuando'l gobiernu avanza en drechos, como cola recién xubida del salariu mínimu d'un 24%, el movimientu indíxena sale a les cais a defendelo. “Ende atopamos”. Les autoridaes indíxenes celebren l'alcuerdu alcanzáu mientres la última delegación col gobiernu asturianu, al traviés de la Dirección Xeneral de l'Axenda 2030, pol qu'esta postrera va financiar proyectos d'agricultura rexenerativa en Colombia en collaboración cola ONIC. Esti proyectu institucional pon una nueva piedra na alianza solidaria ástur-colombiana que'l programa d'atención a víctimes y la delegación lleven más de dos décadas cultivando cola mayor de los esfotos internacionalistes. Oxalá nun futuru próximu la conquista de la paz con xusticia social en Colombia convierta a les dos postreres n'iniciatives innecesaries.

Mentanto, la delegación asturiana de verificación de paz y drechos humanos yá taredactando'l so informe final de 2026, que va ser presentáu llueu a la ciudadanía y a les autoridaes.

[Toa obra individual ta sostenida por un esfuerzu colectivu y esta más que nenguna otra. Gracias a Arjona, Alba, Alma, Candela, Carlos, Esther, Orozco, Lucía, Pilar, Nahuel, Rubén, Tania, Verónica, Eloína, Adrián, Almudena, Inmaculada y Mauricio. Esta actividá desenvolióse como parte de la collaboración ente AMA Asturias y Nortes nel marcu del proyectu COOPERAMA 2026/2027]

En la visita a la cárcel de Cúcuta la Delegación Astu-



riana recibió el siguiente escrito con la petición de difundirlo como expresión de su voluntad de paz:

“Comunicado de Presos Políticos para la construcción de Paz. Desde las cárceles de Colombia al mundo Cúcuta, Norte de Santander, 13 de marzo de 2026.

Dirixió a los pueblos del mundu, a las organizaciones sociales defensores de drechos humanos, a los movimientos de drechos humanos, a la comunidá internacional y a la XXII Delegación Asturiana de Drechos Humanos. Dende los centros penitenciarios de Colombia, les persones privaes de la llibertá que reconocemos como presos políticos alzamos la nuesa voz para espresar un fondu compromisu cola construcción de la paz, la xusticia social y la reconciliación de los pueblos.

Anque mos topamos tres les muries de les cárceles, siguiamos siendo parte de la sociedá y del destín colectivu del país. Dende estos espacios d'encierre cavilgamos sobro les causes fondes de los conflictos sociales y políticos que marcaron la hestoria de Colombia y de muchos pueblos del mundu.

Tamos convencíos de que la paz nun pue llandase al silenciu de les armes. La paz verdadera implica tresformamientos

sociales, democráticas, culturales y económicas que garanticen dignidad, justicia y participación de todos los pueblos.

Reconocemos que los conflictos social y armados dejaron grandes heridas en millones de colombianos. Las víctimas del conflicto merecen verdad, reconocimiento y caminos reales escontra el arreglo y la dignidad.

Dende la nueva condición actual reafirmamos la disposición de contribuir a procesos de memoria, reflexión y reconciliación que dexen cerrar los ciclos de violencia que marcaron a generaciones enteras. Consideramos que inclusive nos llugares como estos de mayor exclusión pueden surgir procesos de aprendizaje, dignificación humana y construcción de futuro.

Por ello, proponemos que los patios donde se atopen presos políticos sigan consolidándose como laboratorios de paz y espacios de pedagogía social, nos cuales puedan desenvolverse procesos de formación en cultura de paz, programas de resolución pacífica de conflictos, alcuentros de reconciliación, iniciativas educativas y culturales, según reflexiones colectivas sobre los tresformamientos que enriquecen las nuevas sociedades. Dende las cárceles proponemos también impulsar escuelas de pedagogía para la paz empobinadas a promover el respeto por los derechos humanos, fomentar el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos, fortalecer la conciencia crítica sobre las causas estructurales de la violencia y contribuir a la formación de ciudadanos comprometidos con la convivencia democrática.

Consideramos que estas iniciativas pueden desenvolverse con el acompañamiento de universidades, organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos y la comunidad internacional. Con los mismos, creemos necesario avanzar en escenarios de diálogo con las víctimas y con los distintos sectores de la sociedad civil, en espacios de respeto, escucha y reconocimiento mutuo.



Tamos convencidos de que el encuentro humano y el diálogo sincero constituyen caminos fundamentales para avanzar escontra la reconciliación y escontra la construcción de una memoria colectiva que dexa aprender del pasado y evitar la repetición de los hechos que marcaron dolorosamente la historia del país. Convidamos a los movimientos sociales, comunidades territoriales, organizaciones populares y sectores democráticos a construir conjuntamente una agenda de país para la paz basada en principios como la justicia social, la seguridad jurídica, la democracia participativa, el respeto por los derechos humanos, la inclusión social, la dignidad de los pueblos y la defensa por la permanencia en los territorios.

Esta agenda tiene de construirse dende las comunidades, los territorios y los sectores históricamente excluidos. Hacemos también un llamado a la solidaridad internacional, que históricamente fue fundamental en el acompañamiento y fortalecimiento de los caminos escontra la reconciliación y la busca de una paz estable y duradera.

Consideramos necesario el reconocimiento del conflicto armado interno de las causas estructurales que lo iniciaron como un paso fundamental para avanzar escontra soluciones políticas, sociales y democráticas que dexen superarlo. Estas aspiraciones no pertenecen sólo a un país, sino que hacen parte de los luchos universales de los pueblos del mundo por la justicia, la dignidad y la paz.

Dende la nueva condición de presos políticos reafirma-

mos la voluntá de seguir apurriendo a los caminos de la paz, col convencimientu de contribuyir a que les nueves xeneraciones puedan vivir nun país con mayores oportunidaes, xusticia social y respetu pola vida.

Quien güei atopamos tres los murios de les cárceles siguimos caminando, dende la nuesa realidá, al pie de los pueblos que lluchen per un mundu más xustu.

Dende les cárceles de Colombia unviamos esti mensaxe a la comunidá internacional: y dici-yos que la paz ye posible cuando los pueblos reconócense, dialoguen y tresformen les condiciones que xeneren la violencia. Convidamos a toles persones comprometíes cola vida, la dignidá humana y la construcción d'un mundu más xustu a sumase a esti camín colectivuu escontra la paz, cola esperanza de qu'un futuru distintu sía posible pa toos y toes.

Nesti sentíu, faemos un respetuosu llamáu a la comunidá internacional, a les organizaciones defensores de drechos humanos, a les plataformes sociales y a los organismos multilaterales por que sigan acompañando y reparando la situación de drechos humanos nos centros penitenciarios de Colombia, promuevan espacios de diálogu humanitariu y sofiten iniciatives empobinaes a la construcción de paz, la reconciliación y la dignificación de les persones privaes de la llibertá.

Solicitamos igualmente que s'impulse'l siguimientu a les condiciones de reclusión, el respetu polos drechos fundamentales de la población carcelaria y el sofitu a procesos de pedagogía pa la paz que dexen convertir estos espacios d'encierre n'escenarios de reflexón, tresformamientu y construcción de futuru.

Colectivos de Presos Políticos del ELN Complexu Penitenciariu y Carcelariu de Cúcuta.”



ORGANIZACIONES

ACEB, Asociación Colombiana de Empleados Bancarios
 ACEU, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios
 ACONC, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca
 ADIECOL, Asociación de Desarrollo Integral de Colombia, Santander de Quilichao
 ANDAS, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria
 ANTHOC Buga
 ANTHOC, Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios
 ASMEDIC, Asociación Médica para la Comunidad
 Asocampec, Asociación Campesina Ecoambiental
 Asociación Avelino Ul
 ASOCATDAME, Asociación de Campesinos Trabajadores Agropecuarios
 Asociación Juntas Comunales de Tuluá
 Asociación Pro Zona de Reserva Campesina
 ASPROANORT, Asociación de Productores Agropecuarios Norte Santander
 Astrazonacal, Asociación de Trabajadores de la Zona de Reserva Campesina de Caloto
 Banderas Unidas, barrio San Miguel, comuna 9, Cúcuta
 Bosque de las Heliconias
 CAJAR, Colectivo de Abogados José Alver Restrepo
 Campaña todas las vidas importan, Pereira
 Caribe Afirmativo
 CESPAS, Centro de Estudios para la Paz, Risaralda
 CGT, Central General de Trabajadores
 CNA, Coordinador Nacional Agrario
 Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
 Comunidades campesinas del norte del Cauca (Caloto, Corinto, Santander de Quilichao, Miranda)
 Consejo Comunitario Guachené
 Consejo Interétnico Norte del Cauca
 Conspirando por la Paz
 Construyendo Vías Diferentes
 Contrapunto juvenil
 Cooperativa Comprocan

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
 Corporación Minga
 Corporación Vínculos
 CPDH, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
 CRIDEC, Concejo Regional Indígena de Caldas
 CSPP, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
 CTC, Central de Trabajadores de Colombia
 CUT, Central Unitaria de Trabajadores CUT, Valle, Cauca, Risaralda, Jamundí, Norte de Santander.
 CUT, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia
 Desalambrados
 DHOC, Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia
 Escuela de Sembradoras de Vida
 FECODE, Federación Colombiana de Educadores
 Fensuagro, Federación Sindical Unitaria Agropecuaria
 Firmantes de Paz Caño Indio
 Fundación Color Esperanza
 Fundación Erika Bautista
 Guardianes de la democracia
 Hilos de Justicia, Cartago
 Humanidad Vigente
 Juntas de Acción Comunal del Alto Ariari
 Mesa territorial de garantías Eje cafetero
 MOVICE, Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado
 Mujeres Sembrando Sueños
 Mujeres Sin Filtro
 Mujeres Trascendiendo por la Paz
 Observatorio de Paz y Conflictividad Social del Oriente Caldense
 ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia
 PCN, Proceso Comunidades Negras
 PRAI Catatumbo
 Presos disidencias cárcel Villavicencio
 Presos Políticos de las disidencias de las FARC EMC en la cárcel de Villavicencio
 Presos-as políticos del ELN en las cárceles de Palmira y de Cúcuta

Pueblo Joven del Norte
 PUPSOC, Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, Cauca, Valle, Nariño
 Red de DDHH Paz y Vida EDUCAL (Caldas)
 Red de Mujeres Buscadoras
 Red Francisco Isaías Cifuentes
 Red Llano y Selva / Red por la Vida
 Red tejedora entornos seguros
 RENACER Siglo XXI
 SER, Sindicato de Educadores de Risaralda
 Sinaltrainal, Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario. Dosquebradas, Pereira, Valle.
 SintracuaValle, Sindicato de Trabajadores de Acuavalle
 Sintradian, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
 Sintraelec, Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Colombia
 SINTRAEMCALI, Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali
 Sintraemsdes, Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de los Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia, Pereira.
 SINTRAGRIM, Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta
 Sintraicañazucol, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Caña de Azúcar de Colombia
 Sintrainagro, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
 Sintramunicipio Yumbo
 Sintraquim, Sindicato Industria Química y Farmacia
 Sintraunicol, Sindicato Nacional De Trabajadores y Empleados Universitarios, Valle
 Somos Defensores
 SUTEC, Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca
 SweFOR, Movimiento Sueco por la Reconciliación
 UP, Unión Patriótica
 Veeduría ciudadana del Catatumbo
 y Defensores del Medio Ambiente del Meta

REFERENCIAS Y FUENTES

1. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session61/advance-version/a-hrc-61-20-aev.pdf>
2. <https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/colombia/report-colombia/>
3. <https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Colombia-logra-hito-en-su-lucha-contra-el-narcotrafico-3275-toneladas-de-cocaina-incautadas-entre-2022-y-2026-260322.aspx>
4. <https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Petro-suspende-dialogos>
5. <https://www.rtvnoticias.com/colombia/acuerdo-comuneros-del-sur-samaniego>
6. <https://www.presidencia.gov.co/prensa/HistorialVida/VIDA3425.pdf>
7. <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/los-peros-de-la-onu-a-proyecto-de-ley-de-sometimiento-de-bandas-criminales-las-sanciones-deben-ser-adecuadas-3486776>
8. https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Documents/2025.07.20_Proyecto9
9. <https://indepaz.org.co/observatorio-de-derechos-humanos-y-conflictividades/>
10. <https://www.unocha.org/publications/report/colombia/colombia-informe-de-tendencias-e-impacto-humanitario-en-2025>
11. <https://www.efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj>
12. <https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/colombia/report-colombia/>

13. <https://indepaz.org.co/mientras-el-reclutamiento-crece-la-infancia-se-reduce-dinamicas-de-reclutamiento-de-nna-en-territorios-bajo-control-armado/>
14. <https://colombia.un.org/es/297052-nota-informativa-%E2%80%99Catrapados-en-las-redes-del-conflicto-aumento-del-reclutamiento->
15. https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/nota-informativa-atrapados-en-las-redes-del-conflicto-aumento-del-reclutamiento-de-ninas-y-ninos/
16. <https://www.swissinfo.ch/spa/la-onu-expresa-su-preocupaci%C3%B3n-por-la-muerte-de-7-menores-en-un-bombardeo-en-colombia/90343117>
17. <https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Petro-dijo-que-ordeno-bombardeos-respetando-el-DIH-y-asumiendo-riesgos-251113.aspx>
18. <https://www.youtube.com/watch?v=esECepYmUaQ>
19. <https://www.defensoria.gov.co/-/el-principio-de-humanidad-debe-prevaler-por-encima-de-la-guerra-defensor%C3%ADa-del-pueblo>
20. <https://www.observatoriofemicidioscolombia.org/>
21. <https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/7236-comision-primer-a-prueba-proyecto-para-erradicar-la-mutilacion-genital-femenina-en-colombia>
22. <https://colombia.unfpa.org/es/news/el-momento-de-poner-fin-la-mutilacion-genital-femenina-en-colombia-es-ahora>
23. <https://relatoria.jep.gov.co//documentos/providencias>
24. <https://una.uniandes.edu.co/index.php/blog/68-delitos-politicos-conexidad-y-acuerdo-final-para-la-terminacion-del-conflicto-y-la-construccion-de-una-paz-estable-y-duradera>
25. <https://caracol.com.co/2026/04/29/jep-acredita-como-victima-directa-a-alias-simon-trinidad-dentro-del-caso-06-de-la-union-patriotica/>
26. <https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2026/03/03-04-2026-Presentacion-Informe-Anual-2025-Evento-Version-Final.pdf>
27. <https://www.rtvnoticias.com/politica/10-lo-gros-clave-del-gobierno-del-presidente-gustavo-petro-en-2025>
28. <https://www.europapress.es/internacional/noticia-colombia-eleva-7837-victimas-falsos-positivos-1990-2016-20260429063000.html>
29. <https://www.europapress.es/internacional/noticia-colombia-eleva-7837->
30. Reunión con la UARIV, Bogotá, 16 de marzo/26
31. <https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/retrasos-en-el-fondo-de-reparacion-afectan-pago-de-indemnizaciones-a-victimas-no-se-giraron-recursos-de-2025/>
32. <https://unidadbusqueda.gov.co/actualidad/registro-136010-personas-desaparecidas-colombia-abril-2026/>
33. <https://unidadbusqueda.gov.co/actualidad/resultados-busqueda-balance-nacional-2024/>
34. <https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/colombia/report-colombia/>

35. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/colombia>
36. <https://somosdefensores.org/informe-anual-2025-i-promesas-rotas/>
37. <https://somosdefensores.org/informe-anual-2025-i-promesas-rotas/>
38. <https://www.colectivodeabogados.org/invitacion-a-rueda-de-prensa-cierre-de-la-xxii-delegacion-asturiana-de-derechos-humanos-y-paz-en-colombia/>
39. <https://www.infobae.com/america/agencias/2026/03/29/el-gobierno-de-asturias-fortalece-su-accion-humanitaria-en-colombia/>
40. <https://humanidadvigente.net/declaracion-final-de-la-vigesima-segunda-visita-asturiana-de-derechos-humanos-y-paz/>
41. <https://www.codopa.org/declaracion-final-delegacion-colombia>
42. <https://www.instagram.com/p/DWEhh74jkvY/>
43. <https://www.nortes.me/2026/03/03/una-nueva-delegacion-asturiana-de-verificacion-de-derechos-humanos-se-prepara-para-viajar-a-colombia/>
44. <https://www.instagram.com/reels/DWws18HDIYM/>
45. <https://humanidadvigente.net/la-xxii-delegacion-asturiana-de-derechos-humanos-y-paz-alerta-sobre-el-agravamiento-de-la-situacion-humanitaria-en-el-guaviare/>
46. <https://www.nortes.me/2026/04/03/viaje-solidario-a-los-centros-del-conflicto-en-colombia/>
47. <https://pachakuti.org/regresa-la-mision-astur-de-colombia/>
48. <https://www.codopa.org/declaracion-final-delegacion-colombia>
49. <https://pachakuti.org/colombia-en-elecciones-observacion-asturiana/>
50. <https://www.youtube.com/watch?v=HYAnZOktPn8>
51. <https://web.nydia-erika-bautista.org/declaratoria-de-lesa-humanidad-en-el-caso-de-nydia-erika-bautista/>
52. <https://x.com/RadNalCo/status/2034264774083547253>
53. <https://pachakuti.org/pero-hubo-alguna-vez-hor-nos-crematorios-en-juan-frio/>
54. <https://pachakuti.org/la-delegacion-astur-en-el-cauca-departamento-interetnico-de-colombia/> NOTA DE LA TRADUCTORA:

NOTA DE LA TRADUCTORA:

Tornar un informe internacional a les nueses llingües maternes nun ye otra cosa más que dignificar a toles que cayeron pel camín y foron obligaes a esfrutar la vida coles pallabres d'otru.

Caúna de les pallabres que foron tornaes, lleven consigo l'intentu de reparación en materia democrática a toles inmigrantes que ficieron camín ente Asturias y Colombia

Alma Hidalgo Lucena

COL APOYU DE:

Ayuntamiento  de Langreo



XXII INFORME ASTURIANU

ESTÁU DE LOS
DRECHOS HUMANOS
Y DE LA PAZ

COLOMBIA 2026

